



2021

**XVII VISITA ASTURIANA DE VERIFICACIÓN  
DEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EN COLOMBIA**



**XVII VISITA ASTURIANA DE VERIFICACIÓN  
DEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EN COLOMBIA**



# XVII VISITA ASTURIANA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. 2021

## Visita realizada entre el 14 y el 27 de marzo del 2021

*“Estamos entre la pandemia y la guerra”. Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC.*

*“La oficina de la ONU en Colombia está en mora de reemplazar en sus informes la palabra “persistentes” al referirse a las agresiones contra la dirigencia social y usar el término “ataques sistemáticos” vistos los patrones de conducta que se repiten en cerca de mil asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz”<sup>1</sup>*

*“La presencia de las instituciones internacionales de Derechos Humanos se redujo significativamente en los territorios del Norte del Cauca. Esto ha dificultado la visibilización oportuna de las afectaciones territoriales. Las acciones de los grupos armados también se han dirigido en contra de los observadores internacionales, lo que demuestra el respeto inexistente a las normas del DIH, en contradicción del carácter político que se atribuye a sí mismos los grupos armados”. ACIN. Informe de desarmonías territoriales Zona Norte del Departamento del Cauca, Colombia, 2020*

*“Gracias por venir a Colombia, un país en el que se degrada la vida, en el que no hay un proyecto de paz sino comisionados de guerra, en el que hay políticos ladrones con grupo armado como en Orocué-Casanare y en el que cada día masacran mujeres en las casas y en las calles. Es muy valioso el esfuerzo del Programa Asturiano al mantener la solidaridad y acogernos a la dirigencia perseguida a muerte por tantos años”. AIDA AVELLA, Senadora de la República.*

*“En Colombia para la oposición el año electoral es un año mortal y el año 2022 lo es. Llegamos sin que se implementen las medidas en políticas de género contenidas en el Acuerdo de Paz, sin políticas de protección a las organizaciones sociales y a sus dirigentes. A las víctimas del conflicto tampoco les están cumpliendo. La fuerza pública protege la producción, no la vida de la población, por ejemplo en el puerto de Buenaventura en el que se masacra a la gente y hay mucho dinero español invertido”. MARIA JOSE PIZARRO, Diputada en la Cámara de Representantes.*

*“Gracias por visitar a Colombia. Reciban un gran reconocimiento por el esfuerzo de proteger la vida de activistas sociales y políticos”. IVAN CEPEDA, Senador de la República.*

*“Resaltamos el acompañamiento de la Delegación Asturiana en el terreno y sus esfuerzos por construir en Europa una visión diferente de la del gobierno colombiano en el tema de los derechos humanos. ALBERTO CASTILLA, Senador de la República”.*

*“El Programa Asturiano será cada vez más necesario, porque no hay garantías para la oposición social, ni para quienes defienden los derechos humanos”. ANTONIO SANGUINO, Senador de la República.*

*Hacemos constar nuestro rechazo al acto de hostigamiento con ráfagas de fusil contra la Delegación Asturiana y contra las autoridades y la guardia indígenas cuando cruzábamos el sector de El Palo, municipio de Caloto/Cauca, el 19 de marzo/21, a menos de un kilómetro de un control de la fuerza pública, en una demostración de la facilidad y la impunidad con la que los grupos armados, legales o no, pueden atacar a civiles que defienden los derechos humanos. XVII Delegación Asturiana en Colombia.*

**Fotos:** XVII Delegación Asturiana

**Edita:** XVII Delegación Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en Colombia, con el apoyo del Ayuntamiento de Langreo +GUE/NGL + ProtectDefenders.eu + CMPA

**Traducción:** Xose Firmu García Cosío

**Imprime:** Gráficas Ápel

## **La XVII Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia estuvo integrada por:**

**Lucía Muñoz Dalda**, diputada de UNIDAS PODEMOS en el Congreso de España.

**Manu Pineda**, europarlamentario español de Izquierda Unida-Unidas Podemos; integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y de la Delegación de Relaciones de la Unión Europea-América Latina.

**Javier Arjona Muñoz**, de Soldepaz Pachakuti.

**Beatriz Merás Colunga**, de la Asamblea Moza d'Asturies.

**Nathalia Gamarra Syniuk**, de Ingeniería Sin Fronteras Asturias, y de la Coordinadora Asturiana de Ongs.

**Marta Mosquera Guimeráns**, asesora en el Parlamento Europeo.

**Javier Orozco Peñaranda**, Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Técnico de la XVII Delegación Asturiana en Colombia.

### **Territorios recorridos.**

La Delegación Asturiana sostuvo entrevistas con pobladores, organizaciones sociales y de víctimas en territorios de los departamentos del Meta, Cauca, Valle del Cauca, Magdalena, Guajira y Cesar. También visitó asentamientos deprimidos de Ciudad Bolívar y del municipio de Soacha y San Mateo en Bogotá.



*Viviendas en Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.*

# Í N D I C E

<b>Presentación</b> .....	9
<b>Estado de los Acuerdos de La Habana y del proceso de Paz con las FARC</b> .....	10
<b>La Justicia Especial para la Paz, JEP</b> .....	12
<b>Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas</b> .....	14
<b>Comisión de la Verdad</b> .....	14
<b>Aplicación de la Ley de Amnistía</b> .....	14
<b>Situación con el ELN</b> .....	15
<b>Los Derechos Humanos en el 2019 y primer trimestre del 2020</b> .....	16
<b>1. Ataques a la dirigencia social, persistencia del paramilitarismo</b> .....	25
<b>2. Ejecuciones extrajudiciales y masacres</b> .....	34
<b>3. Población en situación de desplazamiento. Minas antipersonales</b> .....	36
<b>4. Personas privadas de la libertad. Tortura, trato cruel, inhumano o degradante</b> ...	38
<b>5. Mujeres, infancia, juventud, víctimas, población LGBTI</b> .....	38
<b>6. Impunidad</b> .....	41
<b>7. Pueblos indígenas</b> .....	43
<b>8. Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y Ambientales</b> .....	45
<b>Conclusiones y recomendaciones</b> .....	48
<b>Organizaciones e instituciones entrevistadas</b> .....	49



*La Delegación Asturiana con autoridades del pueblo nasa. ACIN-CRIC. Santander de Quilichao/Cauca.*

## PRESENTACIÓN

Han pasado cinco años desde la firma de unos acuerdos de Paz que generaron ilusión en un pueblo que llevaba más de medio siglo en guerra abierta, ilusión convertida en frustración cuando el gobierno de Duque, heredero político de Álvaro Uribe, tomó la decisión de sabotearlos abiertamente.

Viendo esto, y a pesar de la situación de pandemia que asola el mundo, decidimos que la XVII Delegación Asturiana de verificación de los Derechos Humanos en Colombia no podía dejar de organizarse.

Colombia no se encuentra en una situación de posconflicto, sino en un nuevo ciclo de violencia que está generando miedo en la población a un año de las elecciones presidenciales de mayo del 2022.

Debemos seguir denunciando con firmeza la no implementación de los Acuerdos firmados en el 2016, y denunciar el genocidio, la represión y el hostigamiento que sufren los líderes y lideresas sociales y los pueblos indígenas como una muestra más del gobierno autoritario de Iván Duque.

En el momento de la publicación de este informe, acabamos de presenciar cómo, el 28 de abril, el pueblo colombiano dijo basta y empezó un masivo paro nacional que tiene como primer plano el rechazo a la reforma tributaria pero como trasfondo, la situación insostenible que lleva viviendo Colombia desde hace años.

Colombia sufre un déficit de 25 billones de pesos y, en línea con la política de derecha y neoliberal, el gobierno de Duque intentó solventarlo exprimiendo a las clases populares con una reforma tributaria regresiva que afectaría de forma nefasta a las necesidades básicas y a los recursos sociales en Colombia.

Ante esta situación, la población decidió salir a la calle, donde se encontró con la desproporcionada represión policial y militar con la que el gobierno colombiano respondió a las protestas. Hemos visto con horror la cruenta represión de la policía contra manifestantes, las innumerables detenciones y los asesinatos extrajudiciales en un vano intento del gobierno de acallar las protestas. Son ya 58 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 18 casos de violencia sexual, más de 500 personas dadas por desaparecidas y al menos 503 detenidas consecuencia directa de la decisión del Presidente Duque de militarizar la respuesta a las protestas sociales.

Exigimos el envío de una misión europea a Colombia que garantice que los derechos humanos de las colombianas

y colombianos no sean vulnerados y que, además, verifique el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El gobierno de Duque lleva ignorando y malogrando este Acuerdo de Paz desde su llegada al gobierno.

El envío de una misión de verificación de los acuerdos de paz y de los derechos humanos no puede esperar. La Unión Europea no puede seguir evitando oír el clamor de desesperación y rabia que el pueblo colombiano lleva días lanzando al mundo.

La situación de los derechos humanos en Colombia va de mal a peor: el incumplimiento del Acuerdo de Paz, la re-paramilitarización, las guerrillas, la brutalidad policial, el abandono de los territorios, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el modelo económico, la pandemia, el confinamiento y el desgobierno agravan la crisis de derechos humanos en Colombia.

La Delegación Asturiana constató graves regresiones en materia de derechos, como las masacres, los asesinatos selectivos, el desplazamiento y el reclutamiento forzados, las restricciones a las libertades básicas, la persistencia de la impunidad, del paramilitarismo y el despliegue de terror funcional a los intereses del agro-empresariado y de las multinacionales.

Nuestra Delegación insta a comparecer ante la Comisión de la Verdad de la Justicia Especial para la Paz, a los empresarios, los altos mandos militares y los dirigentes políticos para que den su versión sobre paramilitarismo, desplazamiento forzado y despojo de tierras, masacres, asesinatos selectivos y otras violaciones graves y masivas de los derechos humanos, como lo están haciendo los exguerrilleros de las FARC.

Hacemos un llamado público al gobierno de Colombia para que cese la represión y dejen de matar. Demandamos del gobierno de España que, en aras de los derechos humanos y la democracia, aplique las cláusulas de derechos humanos previstas en los tratados de libre comercio y trabaje decididamente por el cese de la represión y la violencia, inhibiendo a empresas españolas de la venta de armas a Colombia en un contexto en el que las graves violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo erosionan la paz y la democracia.

**Lucía Muñoz Dalda**, *diputada de UNIDAS PODEMOS en el Congreso de España.*

**Manu Pineda**, *europarlamentario español de Izquierda Unida-Unidas Podemos; integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y de la Delegación de Relaciones de la Unión Europea - América Latina.*

## **ESTADO DE LOS ACUERDOS Y DEL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC**

El histórico Acuerdo de Paz con las FARC está en peligro y las organizaciones sociales exigen su cumplimiento en movilizaciones como la del 28 de abril del presente año bajo el lema “Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque”.

A pesar de la importancia histórica y de la voluntad contenida en los Acuerdos de Paz suscritos por el Estado y las FARC hace más de cuatro años, Colombia no está en paz ni vive en post-conflicto.

El Acuerdo está siendo incumplido por el gobierno de Iván Duque quien simula su cumplimiento ante el exterior, lo que está propiciando un nuevo ciclo de violencia que resulta letal para la dirigencia social y para las comunidades del campo y de la ciudad.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) verificó el asesinato de 73 antiguos integrantes de las FARC-EP, para un total de 248 homicidios de este tipo desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.<sup>1</sup>

Los firmantes de la paz están siendo asesinados con impunidad, 273 desde el a firma del Acuerdo, según las FARC. “El asesinato de Juan de Jesús Monroy Ayala en octubre del año pasado tuvo un gran impacto porque lideraba la incorporación de exguerrilleros en el Meta. Ese crimen nos recordó que no hay garantías para la vida, ni hay control en el uso de las platas para la paz. Hay pérdida de los recursos para la paz, una guadaña por ejemplo llega con un sobreprecio de tres veces su valor; los “operadores” del gobierno incrementan el valor de las cosas, o se las quedan”.<sup>2</sup>

1 [https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020\\_traduccion-no-oficial.pdf](https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf)

2 Audiencia en La Julia-La Uribe, departamento del Meta. 16 de marzo del 2021

“Hay problemas de seguridad, los escoltas no tienen viáticos y no pueden acompañarnos en los desplazamientos fuera de los espacios territoriales de reincorporación, entonces nos quedamos a pie haciendo gestiones sin seguridad y estando muy amenazados. De hecho, nos impusieron restricciones de movilidad a Los Comunes. Están creando condiciones para cincuenta años más de guerra por culpa del gobierno si no cumple lo acordado”.<sup>3</sup>

El gobierno colombiano tiene otra opinión. Según Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación: “Como dice el presidente Duque, recibimos con el Acuerdo un “rompecabezas” de 10.000 fichas, sin borde y sin la imagen que debíamos construir. Y ahora lo vamos a entregar planeado, ordenado, estructurado, financiado, para que la transformación territorial sea irreversible... Dejar las armas y sumarse como firmante del Acuerdo fue para los 13.999 excombatientes de las FARC un desafío”.<sup>4</sup>

El conflicto ha cambiado. En el Norte del Cauca hay al menos ocho grupos armados, lo que da una idea de la fragmentación, la persistencia y la gravedad del conflicto como consecuencias del incumplimiento del Acuerdo de Paz.

En esa región operan el Comando Coordinador de Occidente, las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, el Frente Ismael Ruiz, el Ejército de Liberación Nacional ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, la Segunda Marquetalia, además de la fuerza pública con presencia en todos los municipios del Cauca con el Ejército Nacional (Tercera Brigada, Brigada Móvil número 16, Batallón de Alta Montaña N° 8, batallón José Hilario López, Fuerza de Despliegue Rápido 4), la Policía Nacional, los grupos de inteligencia y el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD.

En medio de este despliegue de tropas del Estado ocurren graves violaciones de los derechos humanos en las que los responsables buscan confundir en relación con la

3 Entrevista en el ETRC Simón Trinidad, 16 de marzo del 2021

4 <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/los-cinco-avances-del-acuerdo-de-paz-con-farc-581863>



*Finca Los Mangos, Caloto/Cauca. Liberación de la Madre Tierra.*

autoría, para aumentar el temor de la población y de los excombatientes farianos.

El gobierno distorsiona el objeto del Acuerdo en relación con los pueblos indígenas según las denuncias del CRIC: “El gobierno nacional, pese a su postura poco disimulada de no cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, ha logrado centralizar gran parte de los recursos de cooperación internacional destinada al tema de la Paz sin que este brinde las garantías necesarias para la implementación del acuerdo que garantice el goce efectivo de lo pactado. Entre otras partes de la agenda política gubernamental, los está aprovechando para, de manera encubierta en supuestas iniciativas de paz y desarrollo, usurpar el concepto de territorialidad desarrollado desde las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en sus planes de vida, y redefinirlo en función de la explotación económica de los territorios y sus recursos. Eso agrava aún

más los riesgos para la pervivencia y existencia de la población rural, además de no tomar en cuenta las necesidades ni de los territorios mismos como seres con vida propia ni de las poblaciones que los habitan ancestralmente”.<sup>5</sup>

“Sin la comunidad internacional nos sentimos huérfanos, si el acuerdo se acaba a pesar de “los blindajes”, no volvemos a los tiros, pero hubo gente que volvió al monte a la lucha armada viendo estos incumplimientos, por eso hay y habrá guerra por más años”.<sup>6</sup>

Los cuestionamientos a la política de simulación de cumplimiento que aplica el gobierno, salen de la cotidianidad de las personas que dejaron las armas: “No hay la atención acordada para los adultos mayores, ni para las personas lisiadas de

5 CRIC. Entre la pandemia y la guerra” Reporte anual 2020

6 Entrevista en el ETRC Simón Trinidad, 16 de marzo del 2021

guerra. La salud es un caos en el ETCR, la educación es muy deficiente, la validación del bachillerato no da los conocimientos básicos para seguir una carrera universitaria, algunos estudiaron y no consiguen trabajo por ser exguerrilleros”.<sup>7</sup>

“Aquí han crecido las amenazas de muerte contra exguerrilleros, no tenemos seguridad, a este lugar llegan exguerrilleros de las FARC que salieron de las cárceles. La UNP tiene militares y ex policías como escoltas nuestros, eso da temor”.<sup>8</sup>

“La situación de las comunidades empeoró más que cuando estaban con la guerrilla en el territorio; sólo han callado los fusiles por un momento, pero la razón de la confrontación se ahondó más. Al no haber desarrollo humano el Acuerdo está quedando en un cese al fuego y otras insurgencias crecen de nuevo. Ante el problema de inseguridad marchamos desde los ETCR hacia Bogotá exigiendo de la UNP la protección, pero no cumplen”.<sup>9</sup>

La alcaldesa encargada del municipio de Mesetas precisó “No tenemos recursos para inversión, sólo para el pago de nóminas y poco más, tenemos el ETCR más grande de Colombia y los gobiernos nacional y departamental nos dejan solos con el problema de estos espacios”.<sup>10</sup>

**La Reforma Rural Integral no avanza.** El gobierno anunció el ingreso de más de un millón de hectáreas al Fondo Nacional de Tierras, pero en los últimos tres años solo ha entregado 63.480 hectáreas a 4.750 familias.

En los espacios territoriales visitados (Mariana Páez y Simón Trinidad en el Meta, y Pondores en la Guajira) se evidencia la falta de interés del gobierno por adelantar los proyectos productivos para excombatientes, cuyos recursos en buena parte provienen de la Unión Europea y que, según las denuncias, se pierden por el camino en la maraña burocrática y de intermediarios montada por el gobierno

que ha centralizado el manejo de los recursos de la cooperación internacional para la paz en sus redes clientelares.

En el departamento del Meta la paz está siendo sabotada por el gobierno nacional que no cumple con la inversión para la reincorporación de excombatientes, frenada por la falta de tierras en propiedad, por la falta de proyectos productivos y por el asesinato de los firmantes del Acuerdo. Es la opinión unánime de las organizaciones sociales del Meta.

“De seis puntos del Acuerdo no han cumplido ni el 18%. El programa de sustitución voluntaria de coca ha sido sabotado por el gobierno que no le cumple a quienes ya la erradicaron”.<sup>11</sup>

“Nuestros proyectos productivos no son viables porque no tenemos tierras en propiedad, solo un terreno arrendado por 20 millones de pesos al año, tenemos más gastos que ingresos; hemos hecho una asociación de cuatro veredas campesinas con exguerrilleros y creamos un nuevo espacio en diez hectáreas que llamamos Nueva Área de Reincorporación, ya se compraron, pero el municipio aun no nos titula las tierras y el gobierno tiene la estrategia de incumplir y echarle la culpa a las disidencias de las FARC”.<sup>12</sup>

## LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ, JEP,

continúa su labor y comienza a dar resultados en medio de dificultades presupuestales, de riesgos para sus jueces y comparecientes. Los avances se concretan en la toma de versiones, las investigaciones de los siete macro casos abiertos y la participación de las víctimas que son 380 mil registradas y en las 36.000 decisiones judiciales adoptadas.<sup>13</sup>

Las personas que se han sometido a la JEP son 12.705, de las cuales 9.795 hicieron parte de las FARC, 2.795, de la Fuerza Pública, 125 eran agentes del Estado y otras 12 personas

7 Entrevista en el ETRC Simón Trinidad, 16 de marzo del 2021

8 Entrevista en el ETRC Simón Trinidad, 16 de marzo del 2021

9 Entrevista en el ETRC Simón Trinidad, 16 de marzo del 2021

10 Entrevista con la alcaldesa de Mesetas-Meta, 17 de marzo del 2021

11 Audiencia ETCR Simón Trinidad, 16 de marzo del 2020

12 Audiencia en La Julia-La Uribe, departamento del Meta. 16 de marzo del 2021

13 <https://www.eltiempo.com/amp/justicia/ano-nuevo-como-avanzo-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz-en-2020-y-que-se-espera-en-2021-557972>



llegaron por casos relacionados con la protesta social.<sup>14</sup> Hay la amenaza de un proyecto de ley que cursa en el Congreso para desmontar parte sustancial del Acuerdo de Paz en lo referente

14 <https://www.eltiempo.com/amp/justicia/ano-nuevo-como-avanzo-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz-en-2020-y-que-se-espera-en-2021-557972>

a derechos de las víctimas a conocer la verdad y acceder a justicia especialmente en casos de violencia sexual, la desaparición forzada y desplazamiento forzado. Las víctimas que acuden al JEP no cuentan con garantías para proteger de manera efectiva su derecho a la vida al acudir al sistema integral previsto en la JEP.

El magistrado de la JEP Eduardo Cifuentes envió un mensaje el 30 de diciembre del 2020: “No hay que ponerle más trabas al acuerdo de paz. Los colombianos sensatos no podemos caer en la trampa de volver a la guerra. El sistema integral está dando frutos. Hay que dejarlo trabajar y no sabotearlo”.<sup>15</sup>

**COMISIÓN DE LA VERDAD.** Las personas que integraban las FARC, algunos paramilitares y militares, han accedido a la JEP y han reconocido responsabilidad en secuestros, asesinatos, reclutamiento y desplazamiento forzado, pero continúan renuentes a comparecer para dar sus aportes a la verdad los empresarios, los altos mandos militares y los dirigentes políticos. La Comisión de la verdad termina su misión este año.

La Comisión recibió informes hasta el 31 de marzo del 2021 que será el último año de funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entidad creada tras el acuerdo de paz para seguirle el rastro a lo que estuvo detrás de los principales hechos del conflicto armado en el país, y que en noviembre entregará un informe final, exponiendo sus hallazgos.

FRANCISCO DE ROUX, presidente de la Comisión de la Verdad expresó *“Proponemos* un diálogo para transformar la seguridad. A no revertir los pasos dados por las Fuerzas Militares cuando intentaron cambiar el objetivo de la guerra por un Ejército al servicio de la paz, a pesar de que aún hay guerrilla y grupos criminales. Invitamos a la seguridad dada por la confianza: cuando los ciudadanos creen los unos en los otros y confían en sus instituciones. La exaltación de las armas de todos los lados da desconfianza y provoca la guerra, no da seguridad”<sup>16</sup>.

15 <https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/ano-nuevo-2021-entrevista-con-eduardo-cifuentes-presidente-de-la-jep-balance-del-2020-557975>

16 <https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/fin-de-ano-2020-el-mensaje-del-padre-de-roux-presidente-de-la-comision-de-la-verdad-para-2021-557875>

## LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

avanza en sus trabajos y reporta búsquedas de restos en 63 sitios del país y adelanta pactos regionales por la búsqueda de personas desaparecidas en el Meta, Magdalena, Antioquia, Puerto Berrío y Bogotá.

“De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, a la fecha se han registrado 113.442 personas que continúan desaparecidas, de las cuales el 63,9% son víctimas de desaparición forzada, el 20,7% fueron secuestradas y el 15,3% reclutadas de manera ilegal. Esto sin contar con el alto subregistro que puede existir de personas desaparecidas no reportadas, como, por ejemplo, personas que participaron en las hostilidades que se encuentran desaparecidas”.<sup>17</sup>

En nueve de los 32 departamentos del país se concentra el 60% de las desapariciones registradas en Colombia, estos departamentos son: Antioquia, Meta, Magdalena, Valle del Cauca, Cesar, Santander, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo. Este es un hecho que ha afectado a miles de familias y comunidades en múltiples municipios del país. La desaparición produce angustia y zozobra de manera prolongada y altera los proyectos de vida de familias completas; causa daño transgeneracional y afecta no solo sus núcleos primarios, sino también sus procesos comunitarios y sociales, los cuales han perdido día tras día a sus líderes y lideresas, ocasionando el resquebrajamiento del tejido social. Pese a los grandes impactos de la desaparición, las personas que buscan no han desistido en su lucha por obtener respuestas”.<sup>18</sup>

## APLICACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA,

alrededor de 1.400 ex-combatientes que deberían

17 <https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/conozca-los-pactos-regionales-por-la-busqueda-de-las-personas-desaparecidas-en-colombia/>

18 <https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/conozca-los-pactos-regionales-por-la-busqueda-de-las-personas-desaparecidas-en-colombia/>



estar cobijados bajo las figuras de amnistía-indulto siguen encarcelados.

**La Ley de víctimas y restitución de tierras.** El conflicto armado deja en más de medio siglo y hasta el momento nueve millones de víctimas, entre personas muertas, desaparecidas y desplazadas que tienen derechos reconocidos.

La Ley de Víctimas ha sido prorrogada, lo que abre una oportunidad para avanzar en la restitución de las tierras que fueron despojadas con violencia. “A finales del 2020 había 6.153 sentencias judiciales –incluyendo 19 para pueblos étnicos– que responden a 11.786 solicitudes

administrativas presentadas desde 2012 por parte de las víctimas, que han beneficiado a 74.812 personas”.<sup>19</sup>

La fuerza pública sigue negándose a cumplir las órdenes de los jueces de la república de acompañar y proteger la entrega material de tierras despojadas a sus legítimos propietarios, las comunidades, como ocurre en la región de Urabá.

Para las comunidades de la región de Urabá el mayor obstáculo para la restitución de las tierras usurpadas a las comunidades campesinas y afros, es el expresidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ y su entorno empresarial, político y paramilitar.

## SITUACIÓN CON EL ELN

La falta de continuidad del diálogo del gobierno con el ELN somete a Colombia a la continuación del conflicto armado interno y a los pobladores de las áreas de su influencia a los rigores de una guerra en la que la fuerza pública persiste en violar el DIH y en aliarse con los grupos paramilitares para agredir a la población civil que ven como el “enemigo interno”.

El ELN, a través de sus representantes en la Mesa de Diálogo de La Habana ha reconocido que tienen contactos con el Gobierno colombiano y mantienen la esperanza de reactivar la mesa de diálogos para la paz: “Pese al estado de congelamiento de los acercamientos desde los últimos dos años, en todo este tiempo de alguna manera ha habido contactos, la mayoría de ellos indirectos y todos confidenciales. El propósito es esperar y volver a instalar una nueva mesa”.<sup>20</sup>

La mesa de diálogos con el ELN se instaló en La Habana en febrero del 2017 por el gobierno de JUAN MANUEL SANTOS. El gobierno de IVAN DUQUE desde su posesión el 7 de agosto del 2018 se negó a enviar sus delegados y

19 [HRC46-Informe-anual-2020\\_traducccion-no-oficial.pdf](#)

20 <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/20/eln-confirma-que-ha-seguido-en-contacto-con-el-gobierno-con-miras-a-reactivar-una-mesa-de-dialogo/>

suspendió los diálogos en enero del 2019 tras el atentado del ELN en el que murieron 22 cadetes de policía.

El gobierno colombiano exigió del gobierno cubano la captura y extradición de la delegación del ELN. “He ordenado el levantamiento de la suspensión de órdenes de captura a los 10 miembros del ELN y ha revocado condiciones que permitan su permanencia en el país cubano, así mismo, pido que este país haga efectivas dichas capturas”.<sup>21</sup>

Para el ELN el gobierno colombiano actúa con perfidia frente a la insurgencia, desconoce los compromisos adquiridos ante los países garantes del diálogo y sigue un guion de los EUA para que el Departamento de Estado incluya a Cuba en la lista de países que no combaten el terrorismo. “Es de máxima perfidia calificar a Cuba como violadora del Derecho Internacional y hacerlo como pago por sus servicios a la paz, cuando los violadores son Trump y Duque”.<sup>22</sup>

El 27 de noviembre de 2020 personalidades de varios países escribieron una carta al Secretario General de la ONU en la que expresan: “No podemos permanecer ahora pasivos ante un desafío descomunal que concierne a la República de Cuba, nación que está siendo injustamente atacada por cuenta de su coherencia y compromiso con la paz de Colombia. Apoyo que fue reconocido por Usted, Sr. Secretario General, como lo expresó su portavoz, el Sr. Stéphane Dujarric, el 8 de mayo de 2018, día que Cuba recibió en su territorio a la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional, ELN”.<sup>23</sup>

“Como comunidades del Pacífico que padecemos a diario el absurdo conflicto armado en nuestros territorios y le hemos apostado a la salida negociada porque es el único camino tras más de 50 años de confrontación armada, expresamos: 1. Rechazo a la perfidia Gobierno Nacional ante el desconoci-

miento del Derecho Internacional. Compartimos el concepto jurídico que le fue entregado al Presidente Duque por Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, en julio de 2019, que junto con otros juristas internacionales sustenta que Cuba no puede extraditar a los miembros del ELN porque está obligada a cumplir el derecho internacional, al igual que el Gobierno Nacional debe garantizar el retorno de esta delegación cumpliendo con los protocolos que firmó el Estado colombiano con el ELN, en 2016, con el respaldo de los países garantes. 2. Convocamos al Presidente Iván Duque al cumplimiento de los protocolos en su integralidad para liberar a Cuba de tal injusta e inmerecida condena, y a retomar con sinceridad la Constitución y la ley, rompiendo los vínculos con los grupos paramilitares que aún persisten en miembros de las Fuerza Pública, como sendero para la salida negociada a ese conflicto que sigue prolongándose y degradándose”.<sup>24</sup>

## LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 2020 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

Amplios sectores de la población continúan sometidos a las acciones violentas de los actores armados, legales e ilegales, que violan los derechos humanos y las reglas de la guerra en Colombia.

Las élites colombianas son las responsables de unas dinámicas de exclusión y violencia que dejan graves consecuencias sociales: Colombia es el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo, según la Revista FORBES.<sup>25</sup>

21 <https://www.telesurtv.net/news/colombia-ivan-duque-ruptura-mesa-dialogo-eln-20190118-0034.html>

22 <https://www.efe.com/efe/america/politica/la-guerrilla-del-eln-rechaza-inclusion-de-cuba-en-lista-terrorista-ee-uu/20000035-4249363>

23 <https://www.justiciaypazcolombia.com/carta-secretario-general-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas/>

24 <https://verdadpacifico.org/rechazamos-a-la-perfidia-del-estado-colombiano/>

25 <https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-america-latina/>

Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos ambientales, afirma Global Witness.<sup>26</sup> En abril del 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú para proteger la vida de quienes defienden el medio ambiente. El gobierno de Colombia no lo ha ratificado a pesar de ser el país más peligroso del mundo para los ambientalistas. Por el contrario ha decretado el reinicio de fumigaciones con glifosato.

Colombia, según la ACNUR, sigue siendo el país del mundo con más víctimas de desplazamiento forzado con nueve millones de personas.<sup>27</sup>

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, después de Afganistán, Colombia es el país con más víctimas de minas antipersona en el mundo.<sup>28</sup>

Colombia es uno de los países del mundo con más casos y denuncias por ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de personas en los últimos treinta años.

El crecimiento de las economías ligadas al narcotráfico, la especulación, la corrupción, la minería y la agroindustria –protegidas por los grupos paramilitares– están generando la proliferación de grupos armados que atacan a la dirigencia social y a los habitantes de los territorios abocados a desplazarse o a morir masacrados.

El paramilitarismo continúa. A pesar de que es un compromiso del Estado contenido en el Acuerdo de Paz, no hay política pública para dismantlar a los grupos paramilitares, perseguir a sus auspiciadores y romper sus redes de apoyo, incluidas las que tienen dentro del gobierno y de la fuerza pública, responsables de gran parte de la violencia actual.

26 <https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/>

27 El Tiempo, <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/colombia-es-el-pais-con-mas-desplazados-internos-informe-acnur-378716>

28 CICR. Informe trimestral. Abril/21, <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/05/cicr-presento-balance-trimestral-de-victimas-de-minas-antipersonal-en-colombia/>

Los ataques a la dirigencia social son muy graves e impunes. No hay garantías para representar a las comunidades ni para defender los derechos humanos.

El panorama general de inseguridad y graves violaciones de los derechos humanos en Colombia es preocupante, sin embargo, el gobierno –a través del Ministerio de Defensa– muestra su optimismo: “Con la Política de Estabilización “Paz con Legalidad”, presentada al país en diciembre de 2018, el Presidente Iván Duque honra la responsabilidad histórica que tiene con el país y con su gente. Garantiza que se repare a las víctimas, sabe sobre la trascendencia de cumplir con quienes están en proceso de reincorporación y con las familias en proceso de sustitución de cultivos ilícitos que cumplan y se mantengan fieles a la legalidad. Además, lidera que en los territorios más afectados por la violencia se inicie el camino hacia la estabilización definitiva. Con ello, se da un paso sin precedentes, en la vía en que en todo el territorio se pueda, en el mediano plazo, gozar de un futuro en el que se cumpla la legalidad, se promueva el emprendimiento y, al fin, exista equidad...”<sup>29</sup>

También subieron los casos de secuestro y los “actos de terrorismo”, definidos como la acción de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Estos actos pasaron de 209 en el 2019 a 403 acciones en el 2020 afectando oleoductos, torres de conducción eléctrica, carreteras y puentes.<sup>30</sup>

El gobierno informa que erradicaron manualmente 94.606 hectáreas de coca en el año 2019 y 130.147 hectáreas en el 2020<sup>31</sup>, pero los cultivos siguen extendiéndose porque se siembran más áreas en parques naturales y en los

29 [Informe Paz con Legalidad. Agosto 2018 - Enero 2021 2.pdf](#)

30 [Logros de la Política de Defensa y Seguridad Diciembre 2020 \(1\).pdf](#)

31 [Logros de la Política de Defensa y Seguridad Diciembre 2020 \(1\).pdf](#)

frentes de colonización. Esta migración de los cultivos de uso ilícito se agravará con las aspersiones aéreas con glifosato anunciadas para este año.

La emergencia sanitaria por el COVID 19 puso en evidencia la precariedad del sistema de salud pública y la imposibilidad de acceso de la mayoría de la población a la sanidad privada. Además, afecta la asistencia de niños y niñas a las escuelas y su derecho a la educación pues el 72% de los hogares rurales no tienen acceso a internet para recibir las clases virtuales.

La pandemia y el confinamiento agravaron las desigualdades históricas del país. La CEPAL registró para Colombia un aumento del desempleo, del trabajo informal, de la vulnerabilidad de las mujeres y de la concentración de la propiedad y de la riqueza en pocas manos. Esto afecta de manera particular a las poblaciones que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres y la población rural, afrodescendiente e indígena, agudizando las desigualdades sociales.

Creció la pobreza monetaria y la pobreza extrema: “El país cerró el 2020 con 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria, mientras que en pobreza extrema la situación fue más pronunciada, toda vez que de esta cifra total de personas, 7,47 millones de habitantes ahora están en esta crítica situación, frente a 4,68 millones de personas en 2019, para un aumento anual de 2,79 millones de personas”.<sup>32</sup>

Los sindicatos del profesorado del Valle del Cauca denunciaron: “Desde el sindicato del magisterio denunciamos la presión para volver a clases hacinadas y con el profesorado sin vacunar, además de los constantes ataques a la libertad de cátedra”.<sup>33</sup>

El confinamiento es utilizado por los grupos armados para bloquear regiones, aumentar el control territorial y social sobre las comunidades campesinas y afros y sobre los pueblos indígenas. Al respecto Amnistía Internacional infor-

mó que “A consecuencia de los enfrentamientos armados, 23.128 personas pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes en el departamento del Chocó se vieron confinadas durante todo 2020”.<sup>34</sup>

“Una de las razones por este recrudecimiento de ataques y amenazas son los intentos de los grupos armados de aprovechar e instrumentalizar la pandemia para ampliar sus esferas de influencia, tratando de auto-representarse como garantes del orden público o justificar agresiones y asesinatos con supuestas violaciones a medidas sanitarias. Estas pretensiones inmediatamente chocaron con los esfuerzos de las comunidades de reforzar las labores de control territorial como parte de su estrategia de prevención frente a la pandemia. Es por eso que gran parte de los ataques y amenazas adicionales fueron dirigidas en contra de la Guardia Indígena como actor más visible del control territorial”.<sup>35</sup>

Las organizaciones de víctimas reiteran las denuncias contra el gobierno por la falta de una política que les garantice acceso a la verdad, a la justicia, reparación y garantías de no repetición.

Según el gobierno las víctimas están siendo atendidas. “Desde agosto de 2018 se han implementado 1.079 acciones reparadoras beneficiando a 159 sujetos de reparación colectiva. Durante el mismo periodo, se han entregado bienes de uso colectivo y se ha dado apoyo a proyectos productivos y de infraestructura social y comunitaria en beneficio de 131 sujetos de reparación colectiva, con 44.853 millones de pesos. 8.776 hogares han sido acompañados en su proceso de retornos en este Gobierno. De igual manera, se han entregado 1’979.703 giros de atención humanitaria para atender a 917.631 hogares víctimas de desplazamiento forzado en etapas de emergencia, por 1,26 billones de pesos”.<sup>36</sup>

32 DANE Colombia. <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/dane-publico-cifras-de-la-pobreza-monetaria-en-colombia-584732>

33 Audiencia en Cali, 21 de marzo del 2021

34 AMNISTIA INTERNACIONAL, Informe 2020/21, <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021SPANISH.PDF>

35 CRIC. Entre la pandemia y la guerra” Reporte anual 2020

36 <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/los-cinco-avances-del-acuerdo-de-paz-con-farc-581863>



*Reunión con la dirigencia sindical. Popayán/Cauca.*

En el Valle del Cauca tiende a agravarse la violencia contra los pobladores de zonas marginales de Buenaventura y Tumaco como resultado de los proyectos de ampliación de las infraestructuras para el comercio marítimo y el narcotráfico.

La corrupción mata al reducir los recursos destinados a facilitar el acceso de la población más vulnerable a derechos como el de la alimentación, la salud, la educación y los derechos económicos, sociales y culturales. Además, la corrupción es una fuente de peligro (persecuciones, amenazas, atentados, asesinatos) para la dirigencia social que la enfrenta con denuncias.

El reclutamiento forzado no ha parado en los territorios, aunque tuvo un incremento significativo desde el 2018 según la ACIN: “Las estrategias de reclutamiento de menores incluyen: 1) Recompensas o dineros por mandados o favores de compra los miembros de estos grupos. 2) Enamoramiento de niños-as, adolescentes y jóvenes con el fin de suministrar in-

formación. 3) Presuntas generaciones de amistades que tienen como objetivo causar algún tipo de empatía con estos grupos. 4) Casos de jóvenes que son utilizados para comercializar y consumir sustancias psicoactivas. 5) Familiares de niños, niñas y adolescentes con algún grado de familiaridad con miembros de los grupos armados utilizados para reclutar niños”.<sup>37</sup>

La fuerza pública y en particular el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, está usando de manera habitual armas de fuego de corto y largo alcance contra los manifestantes.

Usan armas no convencionales como armas contundentes. Armas de letalidad reducida son usadas intencionalmente como armas de alta peligrosidad y letalidad, además el ESMAD usa armas no protocolarias (machetes,

37 ACIN. Informe de desarmonías territoriales Zona Norte del Departamento del Cauca, Colombia, 2020



*Reunión con la dirigencia sindical del Valle del Cauca. Cali/Valle.*

hondas, caucheras) y munición recalzada y con metralla, además de usar las armas de dotación y fuego real. Esta acción es la más peligrosa y letal que realiza el ESMAD de la Policía Nacional y el ejército colombiano y lo más grave es que se ha convertido en una práctica regular en contra de movilizaciones especialmente las movilizaciones indígenas.<sup>38</sup>

En el proceso por el asesinato del joven de quince años NICOLAS NEIRA ocurrido el 1° de mayo de 2005, quedó demostrado que el agente del ESMAD, NÉSTOR RO-

DRÍGUEZ RÚA, disparó su arma de dotación a la cabeza del menor, por lo que fue condenado a 17 años de prisión por el juzgado 18 penal de Bogotá.<sup>39</sup>

El ESMAD dispara a matar o a dejar tuertas a las personas como acto represivo ante el uso del derecho a la protesta.

YURI MAYERLY CAMARGO CASTAÑO de 19 años de edad, perdió el ojo izquierdo por el estallido de un disparo de gas lacrimógeno, hecho impune cometido el 29 de noviembre del 2019 por la policía durante la represión

38 ACIN. Informe de desarmonías territoriales Zona Norte del Departamento del Cauca, Colombia, 2020

39 <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-a-17-anos-de-prision-al-agente-del-esmad-que-disparo-contra-nicolas-neira/>

de una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional por educación pública y de calidad.<sup>40</sup>

MIGUEL ANGEL LINARES BARBOSA, de 23 años de edad perdió el ojo izquierdo por un disparo del ESMAD el 19 de diciembre del 2019 en la Universidad Pedagógica.<sup>41</sup>

GERMAN PUENTES VALERO, de 25 años de edad, muere por disparos de la policía el 8 de diciembre del 2020 en inmediaciones del CAI El Rincón, Bogotá. En la investigación se descubre que el policía ANDRES DIAZ MERCADO disparó en 21 oportunidades su arma de dotación impactando a GERMAN PUENTES.<sup>42</sup>

LORWAN MENDOZA AYA, de 30 años, murió el 9 de diciembre del 2020 por disparos de la policía nacional cerca de la estación de Ciudad Verde-Bogotá. Murió en el Hospital Cardiovascular del Niño en Soacha, junto con otras dos personas muertas en similares circunstancias.<sup>43</sup>

En San Mateo y Soacha se recibieron denuncias muy graves contra la policía nacional por hechos que aterrizaron y hoy indignan a sus pobladores, como el asesinato de al menos 13 personas en las movilizaciones contra la brutalidad policial en septiembre del 2020.

Uno de los casos que presenta más irregularidades ha sido el incendio del CAI de San Mateo en el que se encontraban 11 personas detenidas y que por la omisión criminal de los agentes en su deber de auxilio, sufrieron graves quemaduras que provocaron la muerte de 8 de ellos en los días sucesivos. Según los testimonios, los mismos agentes obstaculizaron los esfuerzos de familiares por rescatar del fuego a las víctimas.

Los familiares de las personas que murieron tras el incendio del CAI de San Mateo han sido amenazados de muerte por denunciar la negligencia criminal de la policía en su deber de auxiliar a las personas que estaban incinerándose en calabozos bajo su custodia, entre ellas:

JEISON CONDE RAMIREZ, estaba detenido desde el 23 de junio/20, había informado de golpizas y maltrato policial en los calabozos. Murió con el 80% del cuerpo quemado. Varios policías impidieron a patadas que sus familiares intentaran sacarlo del fuego: “Dejen que se quemen esas ratas hijueputas”.<sup>44</sup>

CRISTIAN RINCÓN, “Se quemó el 4 de septiembre en el CAI, murió el 8 de septiembre. Nuestros hijos menores lo vieron todo”.<sup>45</sup>

JUAN DAVID ROJAS, detenido y golpeado el 7 de enero del 2020, murió por quemaduras. Vimos mucho humo saliendo del CAI, llevamos una manguera, pero la policía no permitía acercarnos a apagar. Después de interponer la denuncia contra la policía sufrimos seguimientos de miembros de la SIJIN, inteligencia de la policía.<sup>46</sup>

ANTHONY ESTRADA ESPINOZA, ciudadano venezolano muerto el 9 de septiembre por disparos del policía OSCAR ALEXANDER MARQUEZ, según el informe de balística.<sup>47</sup>

JUAN GONZALEZ FORY, de 27 años, estudiante de último semestre de ingeniería industrial, falleció en el Hospital de Kennedy luego de recibir un balazo desde el CAI de Timiza-Bogotá. Minutos antes del crimen una persona le advirtió “Es-

40 Informe a la Delegación Asturiana. “Casos de violencia policial atendidos por la Fundación Lazos de Dignidad” Bogotá, marzo del 2021

41 Informe a la Delegación Asturiana. “Casos de violencia policial atendidos por la Fundación Lazos de Dignidad” Bogotá, marzo del 2021

42 Informe a la Delegación Asturiana. “Casos de violencia policial atendidos por la Fundación Lazos de Dignidad” Bogotá, marzo del 2021

43 Informe a la Delegación Asturiana. “Casos de violencia policial atendidos por la Fundación Lazos de Dignidad” Bogotá, marzo del 2021

44 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial. San Mateo/Soacha, 22 de marzo del 2021

45 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial. San Mateo/Soacha, 22 de marzo del 2021

46 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial. San Mateo/Soacha, 22 de marzo del 2021

47 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial. San Mateo/Soacha, 22 de marzo del 2021



tás en el barrio equivocado, aquí no aceptamos nada contra la policía, este es un barrio de policías pensionados y activos.<sup>48</sup>

OSCAR INFANTE GALINDO, murió el 7 de septiembre por quemaduras recibidas en el CAI de San Mateo.<sup>49</sup>

BERNARDO PINEDA GAVIRIA, 37 años de edad, desertó de la guerrilla el 13 de noviembre del 2013 y se reinsertó como microempresario y fue reconocido por la

comunidad como dirigente social por su activismo en la solución de los problemas del barrio. La policía lo hostigó en su casa en varias ocasiones con intenciones de llevárselo sin orden judicial, pero la comunidad no lo permitió, pero finalmente le hicieron un montaje judicial y lo detuvieron. Desde el CAI intentaron desaparecerlo luego de las golpizas. Murió por las quemaduras recibidas en el CAI. Medicina Legal detectó golpes y heridas en las piernas que hacen pensar en torturas antes y después del incendio.<sup>50</sup>

48 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial. San Mateo/Soacha, 22 de marzo del 2021

49 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial. San Mateo/Soacha, 22 de marzo del 2021

50 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial. San Mateo/Soacha, 22 de marzo del 2021



Las empresas tienen responsabilidad en la crisis de los derechos humanos. “El Banco de Colombia ejecuta despidos masivos de trabajadores, no respeta derechos laborales ni sindicales. Algo pasa en un país en el que la riqueza se concentra y la banca crece, pero la economía real disminuye”.<sup>51</sup>

“En Buenaventura la empresa SPB sobre explota sus trabajadores por horas estivando barcos, el SNTT fue a huelga y ya fueron declarados objetivo militar sus dirigentes, incluido el presidente del sindicato. También las perso-

nas que lideraron el paro cívico en Buenaventura han sido amenazadas de muerte”.<sup>52</sup>

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que se niega desde hace más de veinte años a ser parte del conflicto armado interno, continúa asediada por el paramilitarismo cuya existencia es negada por la Brigada XVII del Ejército. La alcaldía de Apartadó, a través de CESAR JARAMILLO, está dividiendo a las juntas de acción comunal y buscando enfrentar a la población. Ante la arremetida empresarial, militar y paramilitar, se ha usado la figura solidaria del *amicus curiae*

51 Audiencia en Cali, 21 de marzo del 2021

52 Audiencia en Cali, 21 de marzo del 2021



*Audiencia en Ciudad Bolívar-Bogotá D. C.*

dentro de la campaña europea a la que se sumaron los diputados asturianos ANGELA VALLINA y RAFAEL PALACIOS GARCIA. “Para nuestra Comunidad de Paz esta nueva campaña de exterminio no es una novedad. Tanto el Ejército y toda la fuerza pública, como alcaldes y gobernadores, se han propuesto exterminarnos. Durante muchos años los soldados que recorrían nuestras veredas repetían constantemente la fra-

se: “o los judicializamos o los matamos”, lo que se traducía en un mensaje genocida: *ustedes no caben en este país...* El libro “En las entrañas del Genocidio” resume los 1462 crímenes de lesa humanidad perpetrados contra nuestra Comunidad de Paz hasta mediados de 2018 hoy en manos de múltiples tribunales internacionales, señala minuciosamente las 7 estrategias de exterminio que el Estado Colombiano y su clase dirigente

se han inventado para exterminarnos. Aún no lo han logrado. Quizás lo logren. Nuestra decisión es resistir sin rendirnos”.<sup>53</sup>

El 20 de abril del 2021 fue asesinada SANDRA LILIANA PEÑA, gobernadora del Resguardo Indígena La Laguna Siberia, Territorio Ancestral Sat Thama Kiwe. Los asesinos fueron capturados por la Guardia Indígena y condenados por la Jurisdicción Indígena.

## I. ATAQUES A LA DIRIGENCIA SOCIAL, PERSISTENCIA DEL PARAMILITARISMO

*Colombia, país más peligroso del mundo para defender los derechos ambientales. Global Witness.*<sup>54</sup>

1. En el último año se agudizaron el conflicto armado interno y el conflicto social, ambos sin cauce de solución dialogada por decisión del gobierno.
2. Los primeros días del 2021 están siendo muy violentos “en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales... Según el tribunal, entre el 1 y el 24 de enero se presentaron 14 enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública, mientras que en el mismo periodo de 2020 se registraron nueve. Las amenazas de muerte a defensores de derechos humanos saltaron de cuatro a 13 y las masacres –o asesinatos de tres o más personas en un mismo evento– aumentaron de cinco a seis, además del homicidio de 14 líderes sociales, el asesinato de cinco excombatientes de las FARC y siete enfrentamientos entre grupos armados durante el periodo evaluado”.<sup>55</sup>
3. Los ataques a la dirigencia social colombiana tienen una de sus causas en la doctrina militar del enemigo interno, creada por los Estados Unidos para perseguir opositores políticos en América.
4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la influencia de la doctrina del “enemigo interno” y la “doctrina de seguridad nacional” en los manuales de formación en contraguerrilla y en la práctica de la violencia anti sindical por parte de las Fuerzas Armadas en Colombia.<sup>56</sup>
5. Colombia sigue encabezando el record mundial de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos con 133 casos documentados por la ONU –la cifra de las organizaciones sociales es mayor– de los cuales el 9% fueron mujeres, el 21% indígenas y el 4% afrodescendientes. El 72% de los casos ocurrieron en zonas rurales del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
6. El asesinato en el 2020 de 64 personas que defendían los derechos ambientales, convirtió a Colombia en el país del mundo más peligroso para quienes combaten en el terreno las causas del cambio climático.
7. “La Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’was (ASOU’WAS) denunció que el Ejército Nacional había matado a un líder indígena durante unas operaciones militares efectuadas en el municipio de Chitagá (departamento de Norte de Santander). La comunidad desmintió la declaración del Ejército Nacional de que la muerte se había producido en combate”.<sup>57</sup>

53 <https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/en-las-entranas-del-genocidio-el-estado-colombiano-en-plan-de-extermio-de-la-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado-antioquia-colombia/>

54 <https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/>

55 <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210127-colombia-registra-cifras-hist%C3%B3ricas-de-violencia-en-inicio-de-2021>

56 [https://www.coljuristas.org/nuestro\\_quehacer/item.php?id=176](https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=176)

57 AMNISTIA INTERNACIONAL Informe 2020/21. <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021SPANISH.PDF>

8. La persecución contra la dirigencia social reviste el carácter de sistemática, aunque la OACNDUH la califique de “persistente”.
9. No se ve voluntad en la justicia para identificar y capturar a los determinadores o autores intelectuales de estos crímenes contra la dirigencia social y sus redes delincuenciales.
10. El confinamiento convirtió a la dirigencia social en un objetivo localizado. “De vuelta al Cauca, a los líderes sociales y comunitarios los estaban matando en sus casas. El confinamiento les facilitó el trabajo a los sicarios, a quienes nunca les importaron las normas de emergencia para acabar con la vida de líderes de sustitución de cultivos, presidentes de las juntas de acción comunal, defensores de los derechos humanos. Ante esto, el gobierno nacional ofreció como solución un poquito más delo mismo de siempre: más militares y más plata para pagar recompensas”.<sup>58</sup>
11. Hay denuncias sobre el espionaje ilegal ejercido por agentes del Estado contra 130 personas opositoras del gobierno, jueces, dirigentes sociales, periodistas, hechos que dio a conocer la prensa y que obligó al retiro de algunos oficiales. El temor de las personas entrevistadas es que esas informaciones personales se usen para hacer montajes judiciales y para asesinar.
12. Es muy grave que la Sociedad Portuaria de Buenaventura, SPB, y el gobierno nacional no protejan la vida de los trabajadores encargados de la seguridad del puerto desde el que se embarcan cargamentos de drogas con destino a los Estados Unidos y Europa. Supervisores de seguridad de la SPB se encuentran amenazados por los narcotraficantes ante el silencio de la administración portuaria y la negligencia del gobierno para proteger la vida e integridad de trabajadores que cumplen su función de control.
13. Es el caso de OSCAR PATARROYO FONSECA, trabajador del área de seguridad de la SPB, sindicalista del SNTT-CUT, amenazado y perseguido por la mafia del narcotráfico por cumplir con su deber. Estuvo acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia en el 2020. Ni la empresa, ni el gobierno lo protegen.
14. Los ataques contra la dirigencia sindical continúan. Los ataques contra profesores-as por ejercer la libertad de cátedra y la educación pública son constantes según las denuncias de FECODE-CUT.
15. Hay subregistro de amenazas a personal docente “Esto porque a los maestros les da miedo denunciar, ya que en sus territorios conviven con toda clase de grupos armados; o ven inútil hacerlo porque el gobierno no les presta atención y la Unidad Nacional de Protección no los incluye en sus esquemas de seguridad. O prefieren aguantarse su situación y quedarse a riesgo propio, en muchos casos pagando extorsiones, porque una reubicación puede ser a un lugar igual o peor que el que dejan”.<sup>59</sup>
16. En el departamento del Valle del Cauca proliferan las amenazas de muerte como parte de una persecución que las organizaciones sociales tildan de sistemática contra personas que defienden los derechos humanos desde el CPDH, CSPP, CUT, y organizaciones de ambientalistas, estudiantiles, colectivos de personas LGBTI.
17. En Soacha se recibieron denuncias que dan cuenta de la presencia de grupos paramilitares y otras bandas que extorsionan, amenazan, asesinan y desaparecen personas que serían llevadas a un vertedero de escombros custodiado por personal armado. El alcalde municipal fue denunciado por conducta omisiva ante estas realidades que atemorizan a la población del casco urbano y del medio rural. “En Soacha hay paramilitares que atacan a la dirigencia social, como Las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Sayayines, Los

58 ACIN. Informe de desarmonías territoriales Zona Norte del Departamento del Cauca, Colombia, 2020

59 Entrevista con Martha Alfonso, FECODE. Bogotá, marzo del 2021



Paisas, las AGC, Clan del Golfo, y guerrillas como las disidencias de las FARC y células del ELN”.

18. En el Meta recibimos denuncias contra la fiscalía y contra el gobierno por un nuevo ciclo de despojo y desplazamiento “institucional”. “Campesinos de más de cincuenta años en el territorio y que fueron desplazados están siendo afectados ahora por amenazas de muerte combinadas con procesos de extinción del derecho de dominio para quitarles las tierras, como pasa en las veredas Candilejas, El Triunfo, Tierradentro, en La Argelia, El Diviso, San Carlos, Paraíso y La Unión. Son más de cinco mil hectáreas del campesinado en extinción de dominio.
19. “ASOAGRIJU trabajó para abandonar el cultivo de coca y sustituirlo por cacao, pero el proyecto se frustró porque el gobierno no cumple compromisos. Las Zonas Estratégicas de Intervención Integral en este territorio implicaron el desplazamiento de pobladores de El Diviso hacia abajo, a esconderse en la zona de reserva de la Amazonia, pero llegó la fiscalía con



tropas y judicializaron a los campesinos, no hacen lo mismo con los grandes taladores de selva. Quieren sacarlos también de ese territorio”.<sup>60</sup>

20. Cinco personas de la dirigencia social colombiana han sido acogidas en el 2021 por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia por el riesgo para sus vidas amenazadas por defender los derechos humanos:
21. MARIA J. ROJAS CASTAÑEDA, maestra popular, defensora de derechos humanos en la Fundación Co-

mité de Solidaridad con los Presos Políticos Seccional Santander. Por su labor como educadora popular y como defensora de los derechos humanos está siendo perseguida e intimidada, junto con su esposo que es dirigente sindical de los trabajadores del sector agroalimentario en SINALTRAINAL-CUT. Desde hace diez años es perseguida y obligada a desplazarse. Por su labor y por el riesgo que asume fue destaca con el Premio de la Unión Europea “Toda una Vida” otorgado a través de la coordinación DIAL versión 2012-2013. A finales del 2020, desconocidos hurtaron de su residencia información relacionada con violaciones de los derechos humanos al interior de las cárceles.

60 Audiencia en La Julia-La Uribe, departamento del Meta. 16 de marzo del 2021



22. CESAR USECHE LOSADA, es periodista, defensor de los derechos humanos y ambientales, fundador de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Es defensor del medio ambiente y opositor del megaproyecto Hidroeléctrica de El Quimbo, por sus impactos en el medioambiente y en las comunidades del centro del Huila, departamento del que fue desplazado por amenazas que se repitieron en su lugar de refugio.
23. JAIME MECHECHE CAISAMO, integrante del pueblo indígena Embera del que es docente en el resguardo Jagual del Río Chintadó. Es integrante de la ASOREWA de la Organización Nacional Indígena de

Colombia, ONIC, y de la Asociación de Autoridades Indígenas del Carmen del Darién. Ha sido amenazado de muerte de manera reiterada en la zona selvática de El Bajo Atrato que está militarizada y en la que ejercen control grupos guerrilleros y grupos de paramilitares. Su situación de riesgo ha sido reconocida como “extraordinaria” por el gobierno. Las comunidades indígenas del pueblo embera del Carmen del Darién se oponen a la guerra e impiden el acceso al territorio a los grupos armados sean legales o no, obstaculizan el reclutamiento de menores indígenas y el desplazamiento forzado. Las amenazas se agudizaron con su oposición a la minería en el Cerro Careperro y por la acción de la Guardia Am-



*Reunión con el Sr. Lars Bredal, Vice embajador de la Unión Europea en Colombia. Bogotá D.C.*

- biental Indígena que erradicó 165 hectáreas de coca del Resguardo Urada.
24. YUBITZA ROVIRA MONTALVO, es Licenciada en Ciencias Sociales, defensora de derechos humanos, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE Capítulo Atlántico. Por su labor en la veeduría de proyectos de desarrollo con enfoque territorial, por su defensa del derecho a la vida y de la cultura del Caribe, ha sido amenazada de muerte por el grupo paramilitar “Clan de Golfo” en un panfleto reciente. El 18 de enero del 2021 lograron retenerla con intenciones de asesinarla. Las autoridades conocen esta situación por las denuncias presentadas, pero no tiene esquema de protección ni garantías.
  25. VICTOR BELTRÁN ESCOBAR, es licenciado en Administración de Empresas y es defensor de derechos humanos como integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE Capítulo Cauca. Es líder social y ejerce como defensor de los derechos humanos en el Departamento del Cauca, municipios de Santander de Quilichao y Puerto Tejada, en los que participa en procesos de fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, procesos juveniles, de defensa del territorio de los pueblos indígenas y de las comunidades negras del Concejo Comunitario Zanjón de Garrapatero. Ha sido amenazado de muerte y estuvo a punto de ser asesinado, circunstancias conocidas por el gobierno colombiano que le asignó un esquema de protección que está siendo desmontado.

26. El uso abusivo de la fuerza y la respuesta militar a la movilización social por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD y del ejército nacional en el control de la protesta social, dejó decenas de personas muertas y centenares de heridas, como se aprecia en material audiovisual y en los testimonios recibidos.
27. Durante el año pasado se registraron casos de uso abusivo de la fuerza: 73 asesinatos atribuidos a la fuerza pública en contexto de operaciones que incluyen 13 muertos por acciones de la policía durante las protestas de septiembre del 2020 y 581 personas heridas.
28. La brutalidad policial fue condenada en septiembre por la Corte Suprema de Justicia dada la “intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas” violando el derecho a la reunión pacífica, por lo que ordenó al Ministerio de Defensa presentar disculpas por “los excesos de la fuerza cometidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía durante las manifestaciones que iniciaron el 21 de noviembre de 2019”.<sup>61</sup>
29. El uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de la guardia penitenciaria dentro de las cárceles dejó sin vida a 33 personas, 23 de ellas en la cárcel Nacional Modelo de Bogotá y ocho más tras el incendio de los calabozos de la policía de San Mateo en Soacha.
30. Las cárceles colombianas en estado de ilegalidad permanente, se convirtieron en depósitos de personas sin derechos, espacios oscuros a la mirada internacional de los derechos humanos. Por decisión política del gobierno y aprovechando el confinamiento, no se permite – desde hace más de un año– el ingreso de abogados y familiares a los centros de reclusión.
31. “En el Cauca se quiere reducir las causas de todos los asesinatos al narcotráfico. Sin distinción todas las muertes, desde el discurso institucional, las meten el
- mismo saco.... Así por arte de magia, con la máscara del narcotráfico pretenden camuflar la campaña de conquista y despojo, que ya no solo es de tierras, sino que se trata también de un despojo de autoridad, una suplantación sangrienta de la capacidad de decidir colectivamente... Publicaron algunos medios de comunicación lo que hemos observado por años: las alianzas estratégicas entre militares y disidencias para perpetuar, por un lado, un modelo de negocio sobre los productos derivados de la coca y la marihuana y, por otro lado, sembrar la semilla de la división en las comunidades y fragmentar, definitivamente, las posibilidades de resistir”.<sup>62</sup>
32. Para el gobierno “Los fenómenos de reclutamiento (forzoso de niñas y niños), de homicidios de defensores de derechos humanos, los desplazamientos, los homicidios colectivos, conocidos comúnmente como masacres, todos son ubicados en las mismas zonas geográficas de Colombia y coinciden con las rutas de narcotráfico y las zonas de extracción ilícita de minerales”.<sup>63</sup>
33. En el departamento del Cauca, tanto en el norte como en la zona de costa y del Macizo, la población está sometida a la violencia extrema aplicada por los paramilitares, las insurgencias y la fuerza pública.
34. Es notoria y pública la permisividad de la policía y del ejército nacional con los narcos en los retenes que debieran perseguir el tráfico de insumos y el transporte de coca y de marihuana en la vía entre Santander de Quilichao, Corinto y Toribío, entre otras.
35. Nuestra Delegación fue hostigada con disparos y ráfagas de fusil en el sector de El Palo. Lo rechazamos y lo entendemos como una demostración de su capacidad

61 <https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-su-prema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/>

62 ACIN. Informe de desarmonías territoriales Zona Norte del Departamento del Cauca, Colombia, 2020

63 Consejería Presidencial para los derechos Humanos. 22 feb/21. <https://www.dw.com/es/colombia-vincula-asesinatos-de-1%C3%ADderes-sociales-a-cultivos-il%C3%ADditos/a-56657761>



*Audiencia con campesinos-as en La Julia-La UribelMeta.*

de operar, violentar y amedrentar incluso cerca de re-  
tenes de la fuerza pública.

36. “Estamos en riesgo por los ataques constantes, y por las simulaciones de combates entre gente del ejército que aparentan matarse y luego llegan diciendo que oyeron tiros, que ellos no fueron y que no somos neutrales porque que hay grupos armados en nuestros territorios, cuando solo están ellos, entonces ¿Quién le dispara a quién?”<sup>64</sup>
37. “La persecución aumenta en Santander de Quilichao en zona urbana, en donde la policía maltrata a personas por llevar botas de caucho, o por portar el bastón de mando

indígena. El ejército niega la realidad de los enfrentamientos con las guerrillas y el hecho de que se meten a las casas. Quieren invisibilizar la guerra y seguir violando el DIH, ocultan el negocio del tráfico de coca y marihuana. En Corinto fuimos encañonados y nadie sabe por quiénes”.<sup>65</sup>

38. Los territorios que dejaron las FARC fueron copados por los grupos paramilitares que cuentan con la permisividad de la fuerza pública para traficar, amenazar, desplazar, desaparecer, torturar, asesinar y cometer masacres. Esta violencia profundiza la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos y con ella la inequidad y la exclu-

64 Audiencia en Popayán, 20 de marzo del 2021

65 Audiencia en Popayán, 20 de marzo del 2021



*Reunión con el Sr. Embajador de España en Colombia, Marcos Gómez Martínez, el Consejero Político Sr. Alvaro Borrega y la AECID.*

sión históricas del campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas, en el que es ya uno de los países más desiguales del mundo.

39. Las amenazas de muerte proferidas contra personas y colectivos sociales sumaron 795 casos que incluyen 152 periodistas.
40. El deber de proteger la vida de la dirigencia social colombiana corresponde a la Unidad Nacional de Protección que en el 2020 activó medidas de protección para 3.740 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, cuatro de estas personas fueron ase-

sinadas. La UNP aún no garantiza la protección con enfoques de género, étnico y territorial.

41. En Buenaventura los grupos armados controlan la ciudad y la zona rural que fueron “sectorizadas” y en las que se libran enfrentamientos con población civil en medio, sometida a disparos, desapariciones y reclutamientos forzados. En sectores de la ciudad te pueden detener por llevar camisilla o tener el cuerpo tatuado”.<sup>66</sup>
42. “En el Norte del Valle del Cauca y otras zonas resulta preocupante la presencia de los grupos paramilitares que inci-

<sup>66</sup> Audiencia con organizaciones sociales en Bogotá, 22 de marzo del 2021

den en Sevilla, Tuluá, Bugalagrande, Florida y San Pedro, pues llegan a las casas de los dirigentes sociales exigiendo el libro de personas afiliadas a las juntas de acción comunal para perseguirlas. En estas regiones ya hacen presencia carteles mexicanos y personas de ese país”.<sup>67</sup>

43. “No se respeta el derecho a la protesta de los estudiantes y profesores que reciben un trato brutal por la policía anti disturbios responsable de la muertes y heridas graves al punto que se convirtió en una práctica sistemática”.<sup>68</sup>
44. “La política antisindical en el Valle se refleja en que cuando fundamos CUT en 1987 iniciamos con 80 mil afiliados y 170 sindicatos, a la fecha nos quedan 45 mil afiliados y 100 sindicatos, diezmadados por despidos, contratación precaria, amenazas, asesinatos por lo que exigimos que la reparación colectiva del movimiento sindical”.<sup>69</sup>
45. IVAN ANTONIO LOPEZ CASTAÑEDA es integrante del CPDH denuncia amenazas de muerte en la ciudad de Cali por su acción de defensa de los derechos humanos y tras pasar varios años en la cárcel acusado falsamente de delitos políticos.
46. FABIO MARIN, dirigente de la Asociación de Unificación y Reorganización Agraria de Colombia, AURACOL, ha sido amenazado de muerte, está siendo sometido a seguimientos de la policía nacional según denuncia el CPDH Valle del Cauca.
47. ATHEMAY STERLING ACOSTA, defensor de derechos humanos, integrante del CPDH Valle del Cauca, viene siendo perseguido por el ejército nacional, perfilamientos, sabotajes y agresiones tras las amenazas de muerte por expresar el punto de vista del CPDH en un Consejo de Seguridad realizado tras la masacre del corregimiento Las Juntas del resguardo indígena Pepitas de Dagua/Valle ocurrida el 21 de marzo del 2019 por

67 Audiencia en Cali, 21 de marzo del 2021

68 Audiencia en Cali, 21 de marzo del 2021

69 Audiencia en Cali, 21 de marzo del 2021

la explosión de un artefacto que mató a ocho personas siete de ellas pertenecientes a la guardia indígena de las comunidades Nasa y Embera wounaan”.<sup>70</sup>

48. La dirigencia social colombiana sigue siendo atacada con impunidad sobre todo por los grupos paramilitares, con la complicidad de la fuerza pública.
49. JANI SILVA es defensora de los derechos humanos y del medio ambiente y ha sido amenazada de muerte por enfrentarse a las empresas petroleras como representante legal de la Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica, ADISPA, organización comunitaria que protege los derechos de las comunidades que viven en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.<sup>71</sup>

## 2. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y MASACRES, DIH

50. Colombia es uno de los países del mundo con más casos y denuncias por ejecuciones extrajudiciales en los últimos treinta años.
51. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, estableció que al menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Los departamentos priorizados dentro del Caso 03 por la Sala de Reconocimiento, son: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.<sup>72</sup>
52. A finales de abril del 2021 Colombia llegó a la masacre número 30 del año siendo los departamentos más

70 CPDH Valle del cauca. En grave riesgo derechos fundamentales de integrantes del CPDH Valle. Cali, marzo/21

71 <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/salva-una-vida/jani-silva-colombia-may20/>

72 <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx>



*Audiencia con sectores populares en Soacha/Cundinamarca.*

- afectados Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
53. Las masacres regresaron a los territorios y las cifras del gobierno colombiano no concuerdan con la de la OACNUDH: “En 2020, el ACNUDH documentó 76 masacres que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes. Otros cinco casos adicionales continúan siendo documentados.<sup>73</sup> En el 66% de los casos, los presuntos perpetradores eran miembros grupos criminales.
54. Desde el 2018 está creciendo el número de masacres, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014. Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62% de estos hechos. El Gobierno informó al ACNUDH que estableció una unidad espacial para coordinar la respuesta estatal a estos casos.<sup>74</sup>
55. El 23 de abril fueron asesinados tres menores de edad en el Buenos Aires de Quibdó-Chocó, departamento en el que operan el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Co-

73 [https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020\\_traduccion-no-oficial.pdf](https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf)

74 [https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020\\_traduccion-no-oficial.pdf](https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf)

lombia (AGC), las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM) y una banda conocida como “Los Locos Yam”.<sup>75</sup>

56. No son admisibles las declaraciones del Ministro de Defensa justificando el bombardeo del 2 de marzo del 2021 a un campamento de las FARC en la vereda Buenos Aires, municipio Calamar, del Guaviare. En la acción murieron al menos 10 menores según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero no proporcionó información sobre las identidades ni edades de las víctimas.
57. Las declaraciones del Ministro de Defensa de Colombia al justificar el ataque afirmando que la guerrilla “usa jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra” viola la Convención sobre los Derechos del Niño suscrita por Colombia y que obliga a los Estados Partes a adoptar “todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado”.<sup>76</sup>
58. “El 26 de septiembre fue asesinado nuestro hijo DANY ALEJANDRO OLIVERO PERZ de 19 años de edad por tres disparos a manos de dos agentes de la policía nacional con nombres JIMMI NUÑEZ VERGARA y DARIO YESID VERGARA URREA. Han pasado hasta la fecha siete años y medio esperando que se haga justicia. Con muchas trabas en el camino para favorecer a los policías. Fue una lucha conseguir que el caso pasara de la justicia penal militar a la justicia ordinaria pues se trató de una ejecución extrajudicial y no de un suicidio como lo afirmó el policía Núñez, pues según medicina Legal “Era imposible que él después de haber recibido uno de los disparos, uno en el abdomen, uno en el cuello y otro en la ca-



beza hubiese podido hablar, por eso hay una duda en contra de los policías”.<sup>77</sup>

### 3. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

59. Colombia, según la ACNUR, sigue siendo el país del mundo con más víctimas de desplazamiento forzado con nueve millones de personas. La Unidad para las Víctimas reconoce que desde 1985 el 16% de la población colombiana ha tenido que abandonar sus casas a causa de la violencia en los territorios.

75 <https://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-menos-cuatro-meses-20210423-0032.html>

76 [https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/04\\_dutli.pdf](https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/04_dutli.pdf)

77 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial. San Mateo/Soacha, 22 de marzo del 2021

60. Con el incremento del conflicto aumentaron en un 96,8% las cifras del desplazamiento forzado según la Defensoría del Pueblo en relación con el año 2019. Cada día se desplaza un promedio de 168 personas y ocurren cuatro desplazamientos masivos cada semana.
61. En el 2020 la Defensoría del Pueblo registró 28 mil 509 víctimas del desplazamiento forzado, de los cuales 9 mil personas de las comunidades afro y 7 mil indígenas, las demás son familias campesinas revictimizadas.<sup>78</sup>
62. Continúa el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas. “Los indígenas llegan provenientes de municipios como Bagadó, Riosucio, Carmen de Atrato, Quibdó y Murindó. En todo el 2020 la Personería de Medellín registró un total de 161 indígenas desplazados que llegaron a la capital de Antioquia. En apenas 69 días de 2021 ya se presentaron poco más de la mitad de todos los casos del año pasado”.<sup>79</sup>
63. Las regiones con más desplazamiento son el sur del departamento del Cauca, el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y chocono, Buenaventura, el Catatumbo (Norte de Santander) y la zona del Alto Baudó (Chocó).
64. “Las élites se preparan para sustituir por desplazamiento a la población del Meta y traer a las multinacionales que rechazamos y no tenemos una organización fuerte para protegernos”.<sup>80</sup>
65. La llegada de casi dos millones de migrantes venezolanos desde 2015 plantea un reto adicional para el gobierno colombiano en una sociedad en la que los medios de comunicación han exacerbado la xenofobia

culpando a la reciente inmigración venezolana de viejos problemas colombianos como la inseguridad, el desempleo y los bajos salarios.

### Minas antipersonales

66. Según la Cruz Roja, después de Afganistán, Colombia es el país con más víctimas de minas antipersona en el mundo.
67. Al menos 389 personas fueron víctimas de artefactos explosivos como minas antipersonales, restos explosivos de guerra y artefactos con detonación controlada.
68. “Desafortunadamente, las cifras que recogimos de víctimas de artefactos explosivos en 2020 son las más altas de los últimos 4 años, se explica con la disputa por el control territorial que los diferentes actores armados están teniendo”.<sup>81</sup>
69. Según Descontamina Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para la paz (OACP), las minas ha dejado en el país 9.653 personas heridas y 2.322 fallecimientos, es decir que una de cada cinco víctimas muere.
70. Recibimos denuncias de la parálisis del desminado humanitario en varias regiones del país argumentando alteraciones del orden público.
71. Las minas se siguen instalando con el recrudecimiento del conflicto: “Se alerta sobre la instalación de minas antipersonal sembradas por actores armados ilegales en los límites entre Alto Nunalbí y Pipalta Palví Yaguapí, exponiendo y dejando en riesgo no solo a comunidades indígenas, sino a nuestros compañeros de comunidades negras que habitan estas zonas; por estos hechos se alerta sobre la posibilidad de otros desplazamientos masivos de la comunidad de Alto Nunalbí, Pipalta Palví Yaguapí y aledañas”.<sup>82</sup>

78 <https://codhes.wordpress.com/2021/02/16/desplazamiento-forzado-en-colombia-que-paso-en-2020/>

79 William Vivas, Personero de Medellín. 10 de marzo del 2021. <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/medellin-ha-recibido-89-indigenas-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-lo-que-va-de-2021/>

80 Audiencia en La Julia-La Uribe, departamento del Meta. 16 de marzo del 2021

81 CICR. El conflicto armado en Colombia un dolor que no se va. <https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-DIH-balance-humanitario>

82 <https://www.mpdl.org/sites/default/files/2010015-comunicado-awa.pdf>

#### 4. PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. TORTURA, TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE

72. A la población recluida en las cárceles colombianas –cerca de 120 mil personas– se le violan de manera masiva y sistemática los derechos humanos pues están sometidas a condiciones que violan los derechos humanos y la Constitución Política por constituir trato cruel, inhumano y degradante.
73. Hay suficiente evidencia para afirmar que la tortura y los malos tratos son una práctica sistemática que hace parte de los manuales de formación para la fuerza pública y es usada para perseguir opositores políticos, como medio para obtener información o confesiones, como método de control de la población encarcelada, como mecanismo de discriminación, como forma de control social y de generar terror en las comunidades, como instrumento para reprimir la protesta social, como método para someter a personas secuestradas.
74. Las cárceles colombianas han sido calificadas como “depósitos” de personas sometidas a golpizas, falta de agua potable, alimentos en mal estado, aislamiento agravado por la pandemia, falta de servicios de salud. Motines exigiendo prevención contra el virus por ser población vulnerable y pidiendo atención médica para los enfermos del virus COVID 19, acabaron con 23 prisioneros asesinados por la guardia penitenciaria y 83 heridos en la cárcel nacional La Modelo, de Bogotá.<sup>83</sup>
75. “En las cárceles del Valle del Cauca continúan detenidos 150 prisioneros políticos de las FARC que están

aislados y no han recibido el beneficio de la amnistía-indulto”.<sup>84</sup>

76. La mayoría de los hechos de tortura quedan impunes porque la jurisdicción penal militar –que tiene la competencia para investigarlos– no aplica sanciones disciplinarias, ni penales y el gobierno está más interesado en invisibilizar lo que pasa en las cárceles que en resolver los problemas, como lo vienen exigiendo los tribunales colombianos y los sistemas de derechos humanos de la OEA y la ONU.

#### 5. MUJERES, INFANCIA, JUVENTUD, VÍCTIMAS, POBLACIÓN LGBTI

77. Durante el 2020 aumentaron los casos de embarazos de adolescentes y a finales del año se presentó el proyecto de ley 008/20 para obstaculizar el derecho de aborto, lo que constituye una amenaza para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
78. Según la a Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el confinamiento bajó el número de denuncias por violencia basada en género, pero se duplicaron las llamadas telefónicas por la misma causa debido al cierre de servicios en la fiscalía y de registros médico-legales.
79. El incremento de las agresiones en el ámbito doméstico contra personas LGBTI dejó 76 víctimas mortales durante el año.
80. “Los paramilitares tienen redes de captación de mujeres migrantes procedentes de Venezuela que son sometidas a la prostitución y muchos niños-as son obligados a trabajar en redes de microtráfico de drogas”.<sup>85</sup>

83 <https://www.lavanguardia.com/internacional/20200322/4835371710/coronavirus-motin-bogota-muertos-heridos.html>

84 Audiencia en Cali, 21 de marzo del 2021

85 Audiencia en Cali, 21 de marzo del 2021



*Panorámica de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.*

81. La violencia policial afecta de forma específica a las mujeres y a la población LGTBI, especialmente a las mujeres trans. Se denuncia la falta de personal femenino en procesos de detención y custodia, así como violencia sexual y actos vejatorios por parte de los agentes.
82. En Soacha se persigue a las personas del colectivo LGBTI. “Las personas transgénero somos víctimas de abusos de la policía, señalamientos, exclusión, falta de interés de las autoridades para proteger, investigar, dialogar. Hay denuncias graves por agresiones contra nosotros, pero el alcalde no atiende nuestros llamados”.<sup>86</sup>
83. Las asociaciones del Magdalena y del Cesar denuncian que las mujeres sufren los rigores del conflicto y de la descomposición social, como la trata de personas y la prostitución infantil, que califican de pandemias ocultas. En todas las regiones visitadas recibimos denuncias de reclutamientos forzados y masivos de jóvenes y niños para la guerra.
84. Recibimos denuncias que dan cuenta del aumento del reclutamiento forzado de niñas y niños por los grupos paramilitares y las guerrillas en departamentos como Cauca, Meta, Valle del Cauca y Antioquia.
85. “En el norte del Cauca sigue el reclutamiento de menores, en algunos casos en las mismas instituciones educativas. No hay una respuesta institucional efectiva.

<sup>86</sup> Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial. San Mateo/Soacha, 22 de marzo del 2021



*Audiencia con campesinos-as. La Julia - La Uribe/Meta.*

va. Las familias no denuncian por miedo, como pasa en Toribío, Caloto, Miranda, Lópezadentro y Tacueyó, se llevan a los niños fuera del territorio para evitar rescates. La columna Dagoberto Ramos se llevó tres niños de Corinto en medio de enfrentamientos; después aparecieron muertos, como dados de baja en combate. Hay tolerancias extrañas que permiten la convivencia en el mismo territorio de la fuerza pública, los paramilitares y las guerrillas. La guerrilla recorre carreteras controladas por la fuerza pública en camionetas de alta gama y sin placas, no se enfrentan. Si matan a un comunero a un kilómetro de distancia, tardan veinte minutos en llegar. Trabajan de la mano para sacarnos de los territorios indígenas”<sup>87</sup>

86. El gobierno colombiano violó el DIH al bombardear, el 29 de agosto del 2019, un campamento de las disidencias de las FARC en el que murieron ocho niños. El presidente Iván Duque reconoció “a los héroes de la patria, en particular a los altos mandos de la Fuerza Pública, por los resultados de la operación en la que cayeron 9 integrantes de las disidencias de las extintas Farc, en el Caquetá”.
87. El presidente consideró que “Gracias a una labor estratégica, meticulosa, impecable y con todo el rigor, cayó ‘Gildardo Cucho’, cabecilla de esa organización”. El presidente Duque y el ministro de Defensa Guillermo Botero ocultaron que ocho de las personas muertas eran menores de edad.<sup>88</sup>

87 Audiencia en Popayán, 20 de marzo del 2021

88 <https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Presidente-Duque-anuncio-cayo-alias-Gildardo-Cucho-pretendia-ser-parte-banda-narcoterrorista-alias-Ivan-Marquez-190830.aspx>

88. “Con el confinamiento se incrementaron los ataques contra las mujeres en el ámbito doméstico en Cali, pero la policía no recibe las denuncias y remite a las víctimas a “arreglar eso en la casa”.<sup>89</sup>
89. Hay graves denuncias por violencia sexual contra niñas de los pueblos indígenas contra militares y policías de los departamentos del Cauca, Nariño, Valle y Risaralda.

## 6. IMPUNIDAD

90. La impunidad estimula la escalada de las violencias que sacuden a Colombia.
91. Atenta contra el estado de derecho y genera impunidad la creciente influencia del gobierno en los órganos de control y de justicia.
92. Según las organizaciones sociales, la Fiscalía General, la Contraloría, la Procuraduría y otras instituciones estarían bajo la influencia del gobierno, lo que hace temer por la independencia de los poderes públicos y por calidad de la democracia colombiana.
93. El acceso a la justicia no es posible para la población que vive en zonas rurales. No hay fiscalías, ni policía técnica, ni medios. En muchas regiones del país los levantamientos de los cuerpos los hacen los familiares.
94. Ante la gravedad de los ataques contra la dirigencia social y la impunidad en la que, según las organizaciones sociales, queda el 96% de las muertes, el gobierno a través de la consejera presidencial destacó el trabajo de la Fiscalía: “En el “esclarecimiento” de casi 63 por ciento de los homicidios –donde la mayoría de personas detenidas fueron cargos medios y no los altos mandos que ordenaron el asesinato– así como la creación, por parte



- del Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, de 11 juzgados penales especializados”.<sup>90</sup>
95. Centenares de asesinatos y miles de amenazas de muerte quedan en su mayoría en la impunidad, sin embargo el ACNUDH “acoge con satisfacción las 20 condenas dictadas en 2020 contra quienes asesinaron a personas defensoras de derechos humanos; mientras que otros 97 casos están en espera de decisiones judiciales a diciembre de 2020”.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Audiencia en La Julia-La Uribe, departamento del Meta. 16 de marzo del 2021

<sup>90</sup> Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. <https://www.dw.com/es/colombia-vincula-asesinatos-de-1%C3%ADderes-sociales-a-cultivos-il%C3%ADditos/a-56657761>

<sup>91</sup> [https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020\\_traduccion-no-oficial.pdf](https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf)

96. Hace un año comenzaron a regresar a Colombia jefes paramilitares que fueron extraditados a los EUA. Estas personas tienen delitos graves por los cuales deben responder para garantizar los derechos de las víctimas.
97. “Nuestra organización FENSUAGRO ha sufrido desde su fundación hace 45 años el asesinato de 624 de sus afiliados y dirigentes. Casi la totalidad de estos casos están en la impunidad. En el año 2020 13 miembros de FENSUAGRO fueron asesinados, en lo corrido del 2021 ya son cuatro las víctimas. Al menos 13 dirigentes de la federación se encuentran amenazados y están reduciendo los esquemas de protección otorgados por la UNP. Las amenazas ya no se están denunciando en varias regiones del país porque la fiscalía no las investiga y generan represalias. ASINTRACAMPIC es una organización estigmatizada y relacionada con grupos al margen de la ley. Sus afiliados vienen siendo víctimas de montajes judiciales, hostigamientos, amenazas y asesinatos. En abril del 2019 dirigentes de la organización fueron amenazados de muerte por personas identificadas como disidencias del as FARC y el cartel de Sinaloa. En marzo del 2020 fueron nuevamente amenazados con orden de salir del territorio. En abril del 2020 hombres armados llegaron a la casa de MARIA JOSE ARROYO y asesinaron a su esposo y a sus dos hijos de 11 y 14 años. El 13 de octubre del 2020 hombres armados obligaron a la comunidad a reunirse en el polideportivo y asesinaron al joven NELSON RAMOS enfrente de su familia y de la comunidad, mientras esto ocurría un helicóptero sobrevolaba la zona sin hacer nada al respecto. Se sabe que “Comandos de Frontera tiene una lista de personas para asesinar”.<sup>92</sup>
98. “La calma en La Uribe es aparente. De aquí se llevaron sesenta personas presas acusadas de rebelión, dos años presos y nada de pruebas; fue un falso positivo judicial, lo hacían para perseguirnos entre el 2001 y el 2003, lo
- perdimos todo, volvimos a empezar. Ahora nos persiguen otra vez dizque por auxiliares de la guerrilla, daño ambiental, testaferrato, hay amenazas de muerte. El 14 de diciembre del 2016 ordenaron medidas cautelares contra nuestras propiedades dentro de procesos de extinción del derecho de dominio. Dicen que nuestras parcelas y animales son de las FARC. Temo que me conviertan en un falso positivo. El gobierno está ordenando el robo, el despojo contra el campesinado del Meta. El desplazamiento ahora es institucional”.<sup>93</sup>
99. “Hay un pacto de silencio para ocultar mediante la justicia penal militar, la responsabilidad de los altos mandos del ejército nacional que dieron ordenes de matar civiles y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate: Montoya, Carreño, Mora Rangel, Ospina, Castellanos, Trujillo...están impunes, ocultos por un manto de silencio por la justicia penal militar”.<sup>94</sup>
100. “En Toribío vivimos la violencia desde 1995 cruzada entre guerrillas, paramilitares, fuerza pública, con la destrucción total del casco urbano en un atentado con carro bomba. Hubo un desplazamiento masivo del casco urbano a la zona rural”.<sup>95</sup>
101. Durante el paro nacional de noviembre del 2020 “La policía influyó decididamente en la noche del terror del 22 de noviembre, en donde copropietarios de conjuntos residenciales y pequeños comerciantes, alarmados por los uniformados, hirieron a por lo menos cinco manifestantes pacíficos que habían sido víctimas de una trampa de la misma policía”.<sup>96</sup>

92 Informe Situación de los Derechos Humanos FENSUAGRO. Bogotá, marzo del 2021

93 Audiencia en La Julia-La Uribe, departamento del Meta. 16 de marzo del 2021

94 Reunión con organizaciones sociales del Meta y rueda de prensa. Villavicencio, 17 de marzo del 2021

95 Audiencia con autoridades indígenas en Toribío - Cauca, 19 de marzo del 2021

96 Audiencia en Soacha. Concejal HEINER GAITAN PARRA. Soacha, 22 de marzo del 2021



102. “Las denuncias sobre la práctica de tortura física y psicológica hacia población retenida en los Centros de Permanencia Temporal (CTP) de Cazucá, San Mateo y Chicó han sido denunciadas por la Mesa Esperanza, la Campaña Vida y la Ong Temblores sin que las autoridades inicien las investigaciones en materia penal y disciplinaria”.<sup>97</sup>

## 7. PUEBLOS INDÍGENAS

103. Los pueblos indígenas de Colombia están siendo sometidos al exterminio físico y cultural.
104. El gobierno sigue sin cumplir el Plan de Salvaguarda de los pueblos indígenas en riesgo de extinción ordenado por la Corte Constitucional y por la CIDH.

<sup>97</sup> Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial. San Mateo/Soacha, 22 de marzo del 2021

105. Los pueblos indígenas y las comunidades afros están muy afectados por la violencia en casi todo el país y de manera especial en los departamentos del Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.
106. El despojo violento y la destrucción de sus territorios tienen al borde del exterminio físico y cultural a pueblos indígenas de Amazonas, Guainía, Norte de Santander, Putumayo y Vaupés y de la Sierra Nevada de Santa Martha, en la que sobreviven los pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa.
107. “Las afectaciones contra los indígenas se incrementaron desde el Acuerdo de Paz. En el 2019 se conocieron las órdenes directas de muerte contra la dirigencia y la guardia indígena en medio de las disputas territoriales de la gente armada. Los asesinatos en el 2020 disminuyeron por la acción preventiva de la guardia indígena, la guardia cimarrona y la guardia campesina en una articulación interétnica positiva. Los puntos de control en las carretas los usan para hacer inteligencia sobre todo entre El Palo y El Tierrero entre Caloto y Toribío. Entre el 2011 y el 2014 vivos el terror de los enfrentamientos, las víctimas, los táticos... eso volvió. Entre Corinto-Toribío y Caloto está el triángulo de mayor afectación a la población, de mayores desarmonías territoriales”.<sup>98</sup>
108. “Los asesinatos contra la guardia indígena buscan destruir parte del tejido de protección de la vida. Los asesinos del guardia indígena de San Francisco, DANIEL SESCOUÉ, fueron detenidos por la guardia indígena y entregados a las autoridades para su juzgamiento, quienes se oponen a la justicia indígena, ¿Prefieren la justicia de cada grupo?”<sup>99</sup>
109. El asesinato de la autoridad indígena CRISTINA BAUTISTA pocos días después de anunciar que había

<sup>98</sup> Audiencia con autoridades indígenas en Toribío - Cauca, 19 de marzo del 2021

<sup>99</sup> Audiencia con autoridades indígenas en Toribío - Cauca, 19 de marzo del 2021

sido amenazada de muerte, afectó al trabajo de mujeres indígenas y demostró que no hay garantías ni teniendo esquema de protección oficial de la UNP”.<sup>100</sup>

110. Los pueblos indígenas del norte del Cauca continúan firmes en sus propósitos de construir organización para la paz, la vida, la unidad, la autonomía y la armonía territorial. Objetivos que estorban a los intereses de las mafias del narcotráfico, empresas mineras e ingenios azucareros.
111. Particularmente en el norte del Cauca denuncian el asesinato de sus autoridades, comuneros e integrantes de la Guardia Indígena. Estos ataques se agravaron el año pasado y en el presente, y se mantienen en la impunidad. Tal es el caso del asesinato de la dirigente Cristina Bautista y cuatro kiwe thegnas (guardianes de la Tierra) en octubre de 2019. Estos hechos demostraron que los paramilitares y la fuerza pública trabajan juntos”.<sup>101</sup>
112. La erradicación forzada de los cultivos ilegales y el incumplimiento de más de mil acuerdos y compromisos de compra de tierras firmados por el gobierno con los pueblos indígenas son caldo de cultivo para el conflicto social y para la violencia de los grupos que protegen la narco economía y el latifundio. “Camiones con diez toneladas de coca pasan por controles viales de la fuerza pública entre Toribío-Jambaló, y por las vías hacia el Pacífico hacia Buenaventura. La gente sabe que hay esos acuerdos por plata y no cree en las autoridades”.<sup>102</sup>
113. Los conflictos por tierras en predios de La Emperatriz y Los Mangos en Caloto/Cauca, exigen una intervención decidida del gobierno nacional para adquirir estas fincas y avanzar en la construcción de paz con equidad,

antes de que haya nuevos hechos de violencia contra los indígenas. En Los Mangos, hay cincuenta familias indígenas de diferentes sitios, Lópezadentro, Corinto, Toribío, Tacueyó. El conflicto por esas tierras es en principio con el ingenio azucarero Central Castilla. Hay peligros y amenazas pero no hay muertos y si los hubiera no nos vamos de la liberación de la madre tierra”.<sup>103</sup>

114. La alcaldía de Bogotá tiene en situación de abandono a miles de personas sometidas excluidas del derecho a la vivienda, muchas de ellas víctimas del desplazamiento forzado, como las que malviven en barrios sin legalizar en Ciudad Bolívar-Bogotá.
115. Maldiciente es la situación de abandono de la población indígena del pueblo embera chamí y katío, desplazada de sus territorios ancestrales en el Chocó y abandonados por el gobierno nacional y distrital en Bogotá. Malviven de artesanías y limosnas en barrios de ciudad Bolívar sin atención social, ni posibilidades de retorno con garantías a sus territorios de los que les siguen desplazando forzosamente.
116. “Hasta octubre del 2020 éramos 325 familias del pueblo embera desplazadas del territorio del Chocó, de zonas como el Alto Andágueda y Bagadó por las amenazas de muerte y encontramos más amenazas aquí en Bogotá. Hemos pedido retorno con garantías o reubicación pero no hay soluciones del gobierno. La alcaldía de Bogotá quedó de pagar el arriendo y ya debemos dos meses. Hemos sufrido persecuciones de las FARC, del ELN, del ERG, del ejército, y la policía no nos deja vender pulseiras en la calles de Bogotá para poder comer y otros pueblos como el embera deL Risaralda también está siendo desplazado de la zona de Pueblo Rico”.<sup>104</sup>
117. Los pueblos indígenas del Parque Tayrona sufren las consecuencias del conflicto armado y del incumpli-

100 Audiencia con autoridades indígenas en Toribío - Cauca, 19 de marzo del 2021

101 Audiencia con autoridades indígenas en Toribío - Cauca, 19 de marzo del 2021

102 Audiencia con autoridades indígenas en Toribío - Cauca, 19 de marzo del 2021

103 Audiencia con autoridades indígenas en Toribío - Cauca, 19 de marzo del 2021

104 Audiencia en Bogotá, 22 de marzo del 2021

miento de los acuerdos de paz. El parque está siendo entregado a empresarios de la industria hotelera que son ajenos a ese entorno natural. El pueblo arhuaco denuncia la falta de voluntad del gobierno para generar dinámicas productivas y de permanencia lo que se agrava con la falta de titularidad de sus territorios ancestrales lo que hace que su situación sea de extrema vulnerabilidad y su supervivencia es incierta.<sup>105</sup>

## 8. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES, Y AMBIENTALES

118. Para el DANE “En 2019, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza multidimensional fue 2,8 veces más alto en las zonas rurales que en las zonas urbanas; el porcentaje de hogares sin acceso a agua potable en zonas rurales fue 14,7 veces más alto que en zonas urbanas. Mientras que la tasa de analfabetismo se redujo en un 2,1 por ciento a nivel nacional, en áreas rurales fue 3,4 veces más alto que en las urbanas. La incidencia de la pobreza multidimensional para los hogares con jefatura femenina es del 18,9 por ciento mientras que para los hogares con jefatura masculina es del 16,6 por ciento.<sup>106</sup>
119. La tasa de desempleo nacional entre septiembre y noviembre de 2020 fue de 14,6 por ciento, aumentando 4,8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año 2019.<sup>107</sup>

105 Visita al Magdalena, Guajira y Cesar. Marzo del 2021

106 [Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2019 \(dane.gov.co\)](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf)

107 [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol\\_empleo\\_nov\\_20.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf)



*Emblema de la ONIC en la puerta de su sede en Bogotá.*

120. La tasa de desempleo de los hombres en el mismo trimestre fue de 10,9 por ciento, mientras que para las mujeres fue de 19,6 por ciento.<sup>108</sup>
121. En 2020, la tasa de desempleo y el nivel de desigualdad por género fueron los más altos de los últimos 10 años.<sup>109</sup>
122. “El problema de la tenencia y la propiedad de las tierras es el pilar número uno de la guerra en toda Colombia, en donde los campesinos son vistos como enemigos y opositores. Nos tocó tumbar monte para sembrar alimentos, nos oponemos a la explotación petrolera, al despojo, y nos dicen de todo. El paramilitarismo se reactivó con toda la tecnología adquirida por el gobierno para la fuerza pública. No hay garantías. Nos tocó echar de nuevo el machete al hombro y volver a abrir trocha ante

108 [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol\\_empleo\\_nov\\_20.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf)

109 [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol\\_empleo\\_nov\\_20.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf)

este incumplimiento total con la gente desmovilizada, y esta arremetida contra el campesinado”.<sup>110</sup>

123. El campesinado del Meta denuncia amenazas de muerte y persecución contra las organizaciones sociales movilizadas por inversión social del Estado y contra la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Las mismas están agravadas por las declaraciones señaladoras del gobernador JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA.

124. La aplicación perversa de la extinción del derecho de dominio a las propiedades y ganados del campesinado, acusadas de testaferrato está generando malestar en el Meta. “Estamos intentando contener la siembra de coca, necesitamos apoyo pero el gobierno le quitó los bienes a la asociación campesina de La Julia y sin fallo judicial los vendieron que para indemnizar a las víctimas de las FARC creando otras víctimas”.<sup>111</sup>

125. “Soy Eduardo Trujillo, el 14 de diciembre del 2016 me decomisaron los bienes que estaban protegidos por ser patrimonio de familiar. Somos 39 propietarios acusados por la Fiscalía 30 especializada en Extinción de Dominio de Bogotá, de ser testaferreros de las FARC. Después se llevaron siete mil cabezas de ganado de los fundadores de la región. A una familia le ordenaron desocupar en tres días su casa del Fondo Nacional del Ahorro porque ya venían los nuevos dueños. El gobierno nos está robando”.<sup>112</sup>

126. “En el Meta hay colonos que están siendo despojados de las tierras por otros colonos usando la política de restitución. Hay reclamantes con escrituras de tierras de 1924 como la finca Las Margaritas. El gobierno impone dejar-

nos sin economía y sustituir la población actual por otra usando la presión política y el orden público”.

127. “Al parque Tinigua llegaron campesinos desplazados y están siendo perseguidos, hay varios muertos, violaciones de niñas menores, no hay salud, vías, educación, los líderes sociales no tienen apoyo ni garantías. Hay temor. Gracias por venir y difundir en donde seamos escuchados”.<sup>113</sup>

128. “Están judicializando para despojar de sus tierras a campesinos de Puerto Rico, Chiribiquete, La Macarena para detener la deforestación, pero no los reubican. En Chiribiquete con el Plan Artemisa detuvieron a diez campesinos, dos fueron judicializados y los otros obligados a firmar documentos de salida voluntaria de la tierra bajo amenaza de irse a la cárcel por delitos ambientales y políticos. El ejército forzó el desplazamiento de las comunidades del Alto Raudal”.

129. La justicia está dejando sin aplicar la causal del interés social para extinguir las propiedades de los grandes terratenientes ociosos y/o ligados al narcotráfico y al despojo de tierras. Para el campesinado estamos frente a un “desplazamiento forzado institucional” promovido desde el gobierno del presidente Duque en favor de los latifundistas del Meta.

130. El municipio de Soacha tiene más de medio millón de habitantes en 347 barrios de los cuales 180 son asentamientos subnormales, sin título de propiedad. Esa población no cuenta con acceso a servicios públicos domiciliarios y la situación se agrava por ser uno de los municipios del país al que más llegan víctimas del conflicto interno de las cuales hay registradas 54 mil.

131. Al menos 1.400 personas, unas 300 familias viven sometidas a las inclemencias del tiempo, obligadas a la autogestión comunitaria ante la ausencia del gobierno distrital de Bogotá para resolver problemas urgentes

110 Audiencia en La Julia-La Uribe, departamento del Meta. 16 de marzo del 2021

111 Audiencia en La Julia-La Uribe, departamento del Meta. 16 de marzo del 2021

112 Audiencia en La Julia-La Uribe, departamento del Meta. 16 de marzo del 2021

113 Audiencia en La Julia-La Uribe, departamento del Meta. 16 de marzo del 2021



de legalización de tierras-escrituras, construcción de vivienda, construcción y arreglo de vías, educación, salud, agua, energía, alimentos, seguridad y alcantarillado en barrios como Ensueños, Maravillas de Dios, Tabor, Primavera, Alta Loma y Los Alpes en Ciudad Bolívar-Bogotá. “Son siete años que llevamos aquí, con un terreno en ocupación no legalizada, sin acceso a servicios públicos, no hay sitio para hacer las necesidades,

nos toca en ramadas, los niños no pueden estudiar porque las clases son por internet y no tenemos conexión, ni electricidad”.<sup>114</sup>

132. En la costa Caribe las comunidades negras también siguen sometidas a procesos de violencia, exclusión y despojo territorial hasta del 80% de sus posesiones,

114 Visita a asentamientos de Ciudad Bolívar-Soacha. 23 de marzo del 2021

como en el caso del Palenque Rincón Guapo. Los niños-as no tienen acceso a educación por las enormes distancias que deben recorrer a pie y por la falta de redes públicas gratuitas de acceso a internet para recibir clases durante el confinamiento. Temen nuevos despojos territoriales y más desplazamiento forzado.

133. Los campesinos de Lengüeta, municipio de Santa Martha, ubicado en zona del parque nacional Tayrona, son más de 2 mil personas que reclaman con urgencia que el Estado formalice la propiedad de sus tierras o que se les reubique, pues no han podido desarrollar sus proyectos de Vida ni tienen acceso a servicios básicos, ni siquiera a luz agua y desagües. La situación de abandono desde el gobierno genera que una niña casi pierda la vida ante la imposibilidad de encontrar un servicio médico que la atendiera, y una bebé de 11 días murió por negligencia en la prestación de servicios asistenciales pues no hay insumos, equipos médicos, ni ambulancia.
134. En Valledupar los sindicatos denunciaron a las empresas mineras, sobre todo del carbón, que violan derechos laborales y sindicales y que se benefician de la represión oficial y del terror paramilitar para silenciar la protesta sindical y social por violaciones de derechos laborales y por los graves impactos sociales y ambientales de la minería a gran escala.

## CONCLUSIONES

Colombia no está en paz, el Acuerdo de Paz y los derechos básicos de la población están en peligro.

El gobierno de Colombia evidencia su falta de voluntad política para cumplir el Acuerdo de Paz, no tiene voluntad de combatir el paramilitarismo, la corrupción, la inequidad, la impunidad.

El conflicto interno de Colombia se convirtió en una amenaza para la seguridad de países como Venezuela, Estado Apure, en el que se presentan enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos de las disidencias de las FARC.

El gobierno es responsable del genocidio en curso contra la dirigencia social, los firmantes farianos del Acuerdo de Paz y los pueblos indígenas, así como de los graves retrocesos en derechos humanos durante el último año.

Esta violencia tiene raíces en la simulación de cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del gobierno, en la continuidad de la guerra por la falta de voluntad de para dialogar con el ELN, en el abandono por el Estado de los territorios, haciendo presencia armada y nula inversión social, en la corrupción, en el efecto perverso de la política antidrogas de los Estados Unidos centrada en combatir al campesinado cultivador en Colombia, en la doctrina militar del enemigo interno que sirve de base a la brutalidad policial y militar en un gobierno cuya consigna es “Paz con legalidad”.

La población sufre la convivencia de la fuerza pública con los despojadores de tierras y con el paramilitarismo que hacen causa común para perseguir opositores y para mantener abiertas las rutas del tráfico de drogas y el ingreso a los territorios de interés para los inversionistas criollos y foráneos, incluidas las empresas multinacionales.

## RECOMENDACIONES

Cumplir integralmente el Acuerdo de Paz suscrito con las FARC.

Continuar los diálogos de paz con el ELN.

Adoptar y ejecutar una política pública de persecución a las bandas criminales, al paramilitarismo y a sus redes de apoyo político, militar y económico.

Otorgar garantías efectivas para proteger la vida de la dirigencia social y de quienes defienden los derechos humanos.

Acabar con la impunidad estructural, identificar, capturar y sancionar a los autores intelectuales del genocidio contra la dirigencia social y contra quienes firmaron el acuerdo de paz.

Respetar el derecho a la protesta social. Desmontar el ESMAD.

Sanción penal a los policías responsables de los asesinatos de manifestantes durante las protestas de septiembre del 2020 y 2021.

Arropar la presentación en noviembre del 2021 del Informe de la Comisión de la Verdad.

Respetar la división y la independencia de los poderes públicos, la autonomía y la independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición.

Fortalecer los sistemas de salud y de educación públicos.

Cumplimiento por la fuerza pública del respeto a los derechos humanos y al DIH y castigo a los militares y policías responsables de actos de violencia sexual.

Cumplir con los acuerdos firmados con los pueblos indígenas de respetar y ampliar sus territorios; hacer acciones de protección efectiva de los pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural. Garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Ratificar e Implementar el Acuerdo de Escazú o Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Instar a los empresarios, a los altos mandos de la fuerza pública y a quienes han gobernado a Colombia en las últimas décadas, a comparecer ante la JEP para dar su versión del conflicto armado interno ante la Comisión de la Verdad.

## ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS

ACIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, organizaciones de Toribío, Toez, Timbío, Canoas, Corinto

Asociación campesina San Juan del Meta

Asociación Colectivos de Afros de Mesetas y La Uribe

Asociación de Ambientalistas de La Uribe

Asociación de Pequeños Agricultores de La Julia

Asociación de Servidores Públicos

Asociación Nacional de Zonas de reserva Campesina AN-ZORC

ASOCOMUNAL, Asociación de Juntas de Acción Comunal

ASONALCA La Uribe, Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro

Bloque de Víctimas

Cabildo San José de Julumito

Cabildos Indígenas de Totoró

Chocolate entre Amigas

CIMA, Comité de Integración del Macizo Colombiano

CNA, Coordinador Nacional Agrario

COCCAM Cauca, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana

Colectivo 9 de Septiembre

Colectivo Rosa Negra

Comité de Derechos Humanos vereda Gaviotas de La Uribe

Congreso de Los Pueblos

Consejo Comunitario y Guardia Campesina de El Guayvero

Consejo Departamental de Los Comunes, Meta

CPDH, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Junta Nacional y Seccional Valle

CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca

CUT Cauca, Central Unitaria de Trabajadores, Ejecutivo Nacional, Seccionales Valle, Cauca, Meta, Cundinamarca y Bogotá

DHOC, Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia

DIGNIDAD Popular PSUOC

ETCR, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez, Simón Trinidad

Excalde de El Castillo-Meta, Sr. Miguel Antonio Rubio

Familiares de las personas asesinadas en las movilizaciones contra la brutalidad policial en San Mateo-Soacha

FCSP, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSP Nacional, Seccionales Tolima, Valle y Cundinamarca

FECODE-CUT, Federación Colombiana de Educadores

FENSUAGRO: Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria

Frente Amplio por la Paz, Santander de Quilichao

Fundación Contra el Abuso Policial

Fundación Lazos de Dignidad

Fundación Misión Pacífico

Guardia Campesina Guayabero.

Integrantes de la Mesa Territorial de Garantías

Integrantes del Consejo Nacional de Paz

Juntas de Acción Comunal de La Uribe, Veredas Buenos Aires, El Placer, La Julia, La Espalda

Juntas de Acción Comunal veredas Puerto Nariño-Mesetas, Buenavista, Piñal, Nueva Esperanza

Liberación Madre Tierra, Los Mangos

Madres de Soacha

Marcha Patriótica

MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Junta Nacional, seccionales Meta, Bogotá

Movimiento estudiantil de Soacha

Observatorio DDHH y Paz Cundinamarca

ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia

Organización de Discapacitados de La Julia

Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino

PENIS Meta, Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

Primera Línea

Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

Sinrabancol, Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de Colombia

SINTRAGRIM, Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta

Sinramunicipio de Yumbo

SINTRAUNICOL, Sindicato Nacional de Trabajadores de las Universidades Públicas de Colombia seccional Cali, Comité de Género

SUTEV-CUT, Sindicato único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca

UNEB, Unión Nacional de Empleados Bancarios

UNIR Costa Pacífica, Unión Nacional de Integración Rural

UP, Unión Patriótica de La Julia

## INSTITUCIONES ENTREVISTADAS

Embajada de España en Bogotá, Sr. Embajador Marcos Gómez Martínez, el Consejero Político Sr. Alvaro Borrega y la AECID

Embajada de la Unión Europea en Colombia, Sr vice embajador Lars Bredal

OACNDUH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

Ministerio de Defensa Nacional. Coronel Jhon Arango

Congreso de la República de Colombia, senadores,as: AIDA ABELLA, IVAN CEPEDA, GUSTAVO BOLIVAR, MARIA JOSE PIZARRO, ALBERTO CASTILLA, ANTONIO SANGUINO

Gobernador del Magdalena, Sr. Carlos Caicedo

Gobernación del Meta, Oficina de Derechos Humanos y Víctimas

Personero municipal de Toribío  
 Procuraduría municipal de Mesetas-Meta  
 Consejo de Víctimas de Mesetas  
 Alcaldesa encargada de Mesetas  
 Consejo municipal de Soacha  
 Consejería de Paz de Soacha  
 Concejala Heidi Sánchez y equipo Bogotá.

## MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Blu radio

CODOPA, [https://www.codopa.org/cooperacion-desarrollo-comunidades-empobrecidas/notas-de-prensa-y-comunicados/una-delegacion-asturiana-verificara-por-17-ano-consecutivo-el-estado-de-los-derechos-humanos-en-colombia\\_5602\\_151\\_5776\\_0\\_1\\_in.html](https://www.codopa.org/cooperacion-desarrollo-comunidades-empobrecidas/notas-de-prensa-y-comunicados/una-delegacion-asturiana-verificara-por-17-ano-consecutivo-el-estado-de-los-derechos-humanos-en-colombia_5602_151_5776_0_1_in.html)

EL COMERCIO DE GIJON, <https://www.elcomercio.es/gijon/delegacion-asturiana-verificara-20210312161016-nt.html>

<https://www.lne.es/gijon/2021/03/13/despedita-delegacion-derechos-humanos-colombia-41704109.html>

El Cuarto Mosquetero

El Llano Siete Días

INFOBAE, <https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/12/colombia-una-delegacion-asturiana-verificara-el-estado-de-los-derechos-humanos-en-colombia-2/>

La FM radio, <https://www.lafm.com.co/colombia/delegacion-asturiana-de-verificacion-dice-que-gobierno-no-cumple-el-acuerdo-de-paz>

La Portada

NORTES, <https://www.nortes.me/2021/03/13/una-nueva-delegacion-de-derechos-humanos-visitara-colombia-este-mes/>

ONIC: <https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4175-declaracion-final-de-la-xvii-delegacion-asturiana-de-verificacion-de-los-ddhh-en-colombia>

<https://eldiariosolidario.com/delegacion-asturiana-ddhh-colombia>

PACOCOL, <https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14668-declaracion-final-de-la-xvii-delegacion-asturiana-de-verificacion-de-los-ddhh-en-colombia>

PRENSA INDIGENA, [https://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com\\_content&view=article&id=40817:espana-17-delegacion-asturiana-de-verificacion-a-los-ddhh-en-colombia&catid=86&Itemid=820](https://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=40817:espana-17-delegacion-asturiana-de-verificacion-a-los-ddhh-en-colombia&catid=86&Itemid=820)

Programa Solidaridad RNE: <https://www.mixcloud.com/solidaridad/solidaridad-delegaci%C3%B3n-asturiana-de-verificaci%C3%B3n-de-ddhh-en-colombia-10042021/>

RADIO NACIONAL DE COLOMBIA, <https://www.radionacional.co/noticia/derechos-humanos-colombia-han-desmejorado-delegacion-espanola>

Radio Voces del Guayavero

RCN Radio, <https://www.rcnradio.com/colombia/situacion-de-ddhh-en-colombia-va-de-mal-peor-delegacion-asturiana-de-verificacion>

REVISTA SUR

RTVE. <https://www.rtve.es/alacarta/audios/solidaridad/delegacion-asturiana-verificacion-ddhh-colombia/5838047/>

SPUTNIK MUNDO, <https://mundo.sputniknews.com/20210326/delegacion-asturiana-colombia-presenta-deterioro-en-ddhh-1110498168.html>

Villavicencio al Aire

<https://rebelion.org/la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia-va-de-mal-a-peor/>

<https://www.sur.org.co/xvii-visita-de-delegacion-asturiana-colombia-no-esta-en-paz-ni-en-posconflicto/z/30042021-1>

**CON EL APOYO DE:**

Ayuntamiento  de Langreo

GUE/NGL  
**THE LEFT**   
IN THE EUROPEAN PARLIAMENT

 PROTECT DEFENDERS.EU

  
**PROYECTO**  
Asurias

  
*Soldepaz Pachakuti*



**2021**

**XVII VISITA ASTURIANA PA PESCUJAR  
L'ESTÁU DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EN COLOMBIA**



**XVII VISITA ASTURIANA PA PESCUJAR  
L'ESTÁU DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EN COLOMBIA**



# XVII VISITA ASTURIANA PA PESCUJAR L'ESTÁU DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. 2021

**Visita realizada ente'l 14 y el 27 de marzu del 2021**

*"Tamos ente la pandemia y la guerra."* **Conseyu Rexonal Indíxena del Cauca CRIC.**

*"La oficina de la Organización de Naciones Xunies en Colombia ta en muera de reemplazar nos sos informes la pallabra 'persistentes' al referise a les agresiones escontra la dirixencia social y usar la espresión 'ataques sistemáticos' vistos los patrones de conducta que se repiten en cerca de mil asesinatos dende la firma del alcuertu de paz."*<sup>1</sup>

*"La presencia de les instituciones internacionales de drechos humanos menguó significativamente nos territorios del Norte del Cauca. Esto dificultó la visibilización oportuna de les repercusiones territoriales. Les aiciones de los grupos armaos tamién se dirixeron escontra los observadores internacionales, lo que demuestra'l respetu inesistente de les normes del drehu internacional humanitariu, en contradicción col calter políticu que s'atribúin a sí mesmos los grupos armaos."* **ACIN. Informe de desharmonías territoriales Zona Norte del departamentu del Cauca, Colombia, 2020.**

*"Gracies por venir a Colombia, un país nel que se degrada la vida, nel que nun hai un proyeutu de paz sinón comisionaos de guerra, nel qu'hai políticos lladrones con grupu armáu como n'Orocúe (Casanare) y nel que cada día masacren muyeres nes cases y nes cais. Ye mui valiosu l'esfuerciu del Programa Asturianu al mantener la solidaridá y acoyemos a la dirixencia persiguío a muerte per tantos años."* **AIDA AVELLA**, senadora de la República.

*"En Colombia pa la oposición l'añu electoral ye un añu mortal y l'añu 2022 yelo. Llegamos ensin que s'organicen les midies en polítiques de xéneru contenies nel alcuertu de paz, ensin polítiques de protección a les organizaciones sociales y a los sos dirixentes. Coles víctimes del conflictu tampoco tán cumpliendo. La fuercia pública protexe la producción, non la vida de la población, por exemplu nel puertu de Buenaventura, nel que se masacra a la xente y hai munchu dineru español invertío."* **MARÍA JOSÉ PIZARRO**, diputada na Cámara de Representantes.

*"Gracies por visitar Colombia. Reciban un gran reconocimientu pol esfuerciu de protexer la vida d'activistes sociales y políticos."* **IVÁN CEPEDA**, senador de la República.

*"Resaltamos l'acompañamientu de la delegación asturiana nel terrenu y los sos esfuercios por construyir n'Europa una visión diferente de la del gobiernu colombianu nel tema de los drechos humanos."* **ALBERTO CASTILLA**, senador de la República.

*"El Programa Asturianu va ser cada vegada más necesariu, porque nun hai garantías pa la oposición social, nin pa quien defenden los drechos humanos."* **ANTONIO SANGUINO**, senador de la República.

Faemos constar el nuesu refugu al actu d'acosu con ráfagues de fusil escontra la delegación asturiana y escontra les autoridaes y la guardia indíxenes cuando cruciábamos el sector d'El Palo, conceyu de Caloto (Cauca), el 19 de marzu del 2021, a menos d'un quilómetru d'un control de la fuercia pública, nuna demostración de la facilidá y la impunidá cola que los grupos armaos, llegalos o non, puen atacar a civiles que defenden los drechos humanos. **XVII Delegación Asturiana en Colombia.**

1 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimes de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.

**Semeyes:** XVII Delegación Asturiana

**Edita:** XVII Delegación Asturiana pa Pescudar l'Estáu de los Drechos Humanos en Colombia, col apoyu del Conceyu Llangréu +GUE/NGL + ProtectDefenders.eu + CMPA

**Traduz:** Xosé Firmu García Cosío

**Imprime:** Gráfiqes Ápel

## **La XVII Delegación Asturiana pa Pescudar l'Estáu de los Drechos Humanos en Colombia tevo integrada por:**

**Lucía Muñoz Dalda**, diputada d'Unidas Podemos / Xunies Podemos nel Congresu d'España.

**Manu Pineda**, europarlamentariu español d'Izquierda Unida-Unidas Podemos, integrante de la Comisión d'Asuntos Esteriores, integrante de la Comisión de Drechos Humanos y de la Delegación de Rellaciones de la Xunión Europea-América Llatina.

**Javier Arjona Muñoz**, de Soldepaz Pachakuti.

**Beatriz Merás Colunga**, de la Asamblea Moza d'Asturies.

**Nathalia Gamarra Syniuk**, d'Inxeniería Ensin Fronteres Asturies, y de la Coordinadora Asturiana d'ONG.

**Marta Mosquera Guimeráns**, asesora nel Parllamentu Européu.

**Javier Orozco Peñaranda**, coordinador del Programa Asturianu d'Atención a Víctimes de la Violencia en Colombia. Técnicu de la XVII Delegación Asturiana en Colombia.

### **Territorios percorriós**

La delegación asturiana tevo entrevistes con pobladores, organizaciones sociales y de víctimes en territorios de los departamentos del Meta, Cauca, Valle del Cauca, Magdalena, Guajira y Cesar. Tamién visitó asentamientos deprimíos de Ciudad Bolívar y del conceyu de Soacha y San Mateo en Bogotá.



TOXICOMANÍA

En Colombia hay más  
de 83.000 desaparecidos

LA ANSIEDAD

NO ME DEJA DORMIR

#AQUÍ FALTA ALGUIEN

I

**Presentación** ..... 9

**Estáu de los alcuerdos de L'Habana y del procesu de paz coles FARC** ..... 10

**La Xusticia Especial pa la Paz, XEP** ..... 12

**Unidá de Busca de Persones daes por Desapaecíes** ..... 14

**Comisión de la Verdá** ..... 14

**Aplicación de la Llei d'Amnistía** ..... 15

**Situación col ELN** ..... 15

**Los drechos humanos nel 2020 y primer trimestre del 2021** ..... 17

**1. Ataques a la dirixencia social, persistencia del paramilitarismu** ..... 23

**2. Execuciones estraxudiciales y masacres** ..... 33

**3. Población en situación d'esllarigamientu. Mines antipersona** ..... 34

**4. Persones privaes de la llibertá. Tortura, tratu cruel, inhumanu o degradante** ..... 36

**5. Muyeres, infancia, mocedá, víctimes, población LGBTI** ..... 37

**6. Impunidá** ..... 38

**7. Puelos indíxenes** ..... 40

**8. Drechos económicos, sociales, culturales y ambientales** ..... 44

**Conclusiones y recomendaciones** ..... 48

**Organizaciones ya instituciones entrevistaes** ..... 49

N

D

I

Z



*La Delegación Asturiana con autoridades y comuneros-as del pueblo nasa. Resguardo de San Francisco, Toribío/Cauca.*

## PRESENTACIÓN

Pasaron cinco años dende la firma d'unos alcuertos de paz que xeneraron ilusión nun puelu que llevaba más de medio sieglu en guerra abierta, ilusión convertida en frustración cuando'l gobiernu de Duque, herederu políticu d'Alvaro Uribe, tomó la decisión de sabotialos abiertamente.

Viendo esto, y a pesar de la situación de pandemia qu'asuela'l mundiu, decidimos que la XVII Delegación Asturiana pa Pescudar los Drechos Humanos en Colombia nun podía dexar d'entamase.

Colombia nun s'alcuentra nuna situación de posconflictu, sinón nun ciclu nuevu de violencia que ta xenerando mieu na población a un añu de les elecciones presidenciales de mayu del 2022.

Hemos siguir denunciando con firmeza que nun se desarrollen los alcuertos firmaos nel 2016, y denunciar el xenocidiu, la represión y l'acosu que sufren los cabezaleros y cabezaleres sociales y los puelos indíxenes, como una demostración **más del gobiernu autoritariu d'Iván Duque.**

Nel momentu de la espublicación d'esti informe acabamos de presenciar cómo, el 28 d'abril, el puelu colombianu dixo basta y entamó un paru nacional masivu, que tien como primer oxetivu refugar la reforma tributaria, pero como tresfóndu la situación insostenible que lleva viviendo Colombia dende hai **años.**

Colombia sufre un déficit de 25 billones de pesos y, en llinia cola política de dreches y neolliberal, el gobiernu de Duque intentó solventalo estrumiendo a les clases populares con una reforma tributaria regresiva qu'afectaría de manera nefasta a les necesidaes básiques y a los recursos sociales en Colombia.

Énte esta situación, la población decidió salir a la cai, onde alcontró la desproporcionada represión policial y militar cola que'l gobiernu colombianu respondió a les protestes. Viemos con horror la represión cruenta de la policía escontra manifestantes, les innumerables detenciones y los asesinatos estraxudiciales nun intentu vanu del gobiernu d'acallar les protestes. Son yá 58 persones asesinaes, 208 firies, 18 con mutilación por lesiones oculares, 18 casos de violencia sexual y polo menos 503 deteníos consecuencia direuta de la decisión del presidente Duque de militarizar la respuesta a les protestes sociales.

Esiximos una misión europea a Colombia que garantice que los drechos humanos de les colombianes y los colombia-

nos nun se vulneren y que, amás, compruebe'l cumplimientu de los alcuertos de paz. El gobiernu de Duque lleva inorando y malogrando esti alcuertu de paz dende la so llegada al gobiernu.

El mandar una misión pa comprobar los alcuertos de paz y los drechos humanos nun pue esperar. La Xunión Europea nun pue siguir evitando oyer el clamor de desesperación y rabia que'l puelu colombianu lleva díes llanzando al mundiu.

La situación de los drechos humanos en Colombia va de mal a peor: l'incumplimientu del alcuertu de paz, la re-paramilitarización, les guerrilles, la brutalidá policial, l'abandonu de los territorios, la corrupción, la impunidá, el modelu económicu, la pandemia, el confinamientu y el desgobiernu agraven la crisis de los drechos humanos en Colombia.

La delegación asturiana constató regresiones graves en materia de drechos, como les masacres, los asesinatos selectivos, l'esllarigamientu y l'allistamientu forciaos, les restricciones a les llibertaes básiques, la persistencia de la impunidá, del paramilitarismu y el despliegue del pavor funcional a los intereses del agro-empresariáu y de les multinacionales.

La nueva delegación encamienta comparecer delante la Comisión de la Verdá de la Xusticia Especial pa la Paz a los empresarios, los altos mandos militares y los dirixentes políticos, pa que dean la so versión sobre'l paramilitarismu, l'esllarigamientu forciáu y l'espoliu de tierres, les masacres, los asesinatos selectivos y otros ataques graves y masivos a los drechos humanos, como lo tán haciendo los ex-guerrilleros de les FARC.

Faemos un llamáu públicu al gobiernu de Colombia pa que cese la represión y dexen de matar. Demandamos del gobiernu d'España que, en defensa de los drechos humanos y la democracia, aplique les cláusules de drechos humanos previstes nos trataos de llibre comerciu y trabaye decididamente pol acabu de la represión y la violencia, impidiendo a empreses españoles la venta d'armes a Colombia nun contestu nel que los graves ataques a los drechos humanos que se tán cometiendo erosionen la paz y la democracia.

**Lucía Muñoz Dalda**, diputada d'Unidas Podemos / Xuntes Podemos nel Congresu d'España.

**Manu Pineda**, europarlamentariu español d'Izquierda Unida – Unidas Podemos, integrante de la Comisión d'Asuntos Esteriores, integrante de la Comisión de Drechos Humanos y de la Delegación de Rellaciones de la Xunión Europea-América Llatina.

## ESTÁU DE LOS ALCUERDOS Y DEL PROCESU DE PAZ COLES FARC

L'hestóricu alcuertu de paz coles FARC ta en peligru y les organizaciones sociales esixen el so cumplimientu en movilizaciones como la del 28 d'abril d'esti añu baxo l'eslogan: "Pola vida, la paz, la democracia y escontra'l nuevu paquetazu de Duque."

A pesar de la importancia hestórica y de la voluntá contenida nos alcuertos de paz soscritos pol Estáu y les FARC va más de cuatro años, Colombia nun ta en paz nin vive en posconflictu.

L'alcuerdu ta incumplíndolu'l gobiernu d'Iván Duque, que simula'l cumplimientu énte l'esterior, lo que ta propiciando un ciclu nuevu de violencia que resulta mortíferu pa la dirixencia social y pa les comunidaes del campu y de la ciudá.

La Misión de Comprobación de les Naciones Xunies en Colombia (UNMVC) certificó l'asesinatu de 73 antiguos integrantes de les FARC-EP, pa un total de 248 homicidios d'esti tipu dende la firma del alcuertu de paz en payares del 2016.<sup>1</sup>

A los firmantes de la paz tán asesinándolos con impunidad, 273 dende la firma del alcuertu, según les FARC. "L'asesinatu de Juan de Jesús Monroy Ayala n'ochobre del añu pasáu tevo gran impautu porque encabezaba la incorporación de ex-guerrilleros nel Meta. Esi crime recordámos que nun hai garantíes pa la vida, nin hai control nel usu de les perres pa la paz. Hai perda de los recursos pa la paz, una gadaña por exemplu llega con un sobrepreciu de tres vegaes el so valor; los 'operadores' del gobiernu aumenten el valor de les coses, o quédense con elles"<sup>2</sup>.

"Hai problemes de seguranza, los escoltes nun tienen dietes y nun puen acompañanos nos desplazamientos fuera de los espacios territoriales de reincorporación, entós quedamos a pie faciendo xestiónes ensin seguridá y tando mui amenazaos. De fechu impunxéronmos restricciones de movilidad a Los Comunes. Tán creando condiciones pa cincuenta años más de guerra por culpa del gobiernu si nun cumple lo acordao."<sup>3</sup>

El gobiernu colombianu tien otra opinión. Según Emilio Archila, Conseyeru Presidencial pa la Estabilización y la Consolidación: "Como diz el presidente Duque, recibimos col alcuertu un 'rompecabeces' de 10.000 fiches, ensin borde y ensin la imaxe que debíamos construyir. Y agora vamos a entregalu planiáu, ordenáu, estructuráu, financiáu, pa que la tresformación territorial sía irreversible... Dexar les armes y sumase como firmante del alcuertu foi pa los 13.999 ex-combatientes de les FARC un desafíu"<sup>4</sup>.

El conflictu cambió. Nel Norte del Cauca hai polo menos ocho grupos armaos, lo que da una idea de la fragmentación, la persistencia y la gravedá del conflictu como consecuencia del incumplimientu del alcuertu de paz.

Nesa rexón operen el Comandu Coordinador d'Occidente, les columnes móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, el Frente Ismael Ruiz, l'Exércitu de Lliberación Nacional ELN, les Autodefenses Gaitanistes de Colombia AGC, la Segunda Marquetalia, arriendes de la fuercia pública con presencia en tolos conceyos del Cauca col Exércitu Nacional (tercer brigada, brigada móvil número 16, batallón de monte altu n<sup>o</sup> 8, batallón José Hilario López, fuercia de despliegue rápidu 4), la policía nacional, los grupos d'intelixencia y l'escuadrón móvil antialborotos ESMAD.

Metanes esti despliegue de tropes del Estáu asoceden ataques graves a los drechos humanos nos que los responsables busquen confundir no referente a l'autoría, p'aumentar l'axorizu de la población y de los ex-combatientes farianos.

1 [https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020\\_traduccion-no-oficial.pdf](https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf)

2 Audiencia en La Julia (La Uribe, departamentu del Meta), 16 de marzu del 2021.

3 Entrevista nel ETRC Simón Trinidad, 16 de marzu del 2021.

4 <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/los-cinco-avances-del-acuerdo-de-paz-con-farc-581863>



*Visita en Ciudad Bolívar a la comunidad desplazada del pueblo indígena embera chamí y embera katio. Bogotá D.C.*

El gobierno distorsiona el objeto del acuerdo no que se refiere a los pueblos indígenas según las denuncias del CRIC: “El gobierno nacional, pese a la su postura poco disimulada de no cumplimiento de los acuerdos de L’Havana, logró centralizar gran parte de los recursos de cooperación internacional destinados al tema de la paz sin que dea las garantías necesarias para el desarrollo del acuerdo que garantice el cumplimiento efectivo de lo pactado. Entre otras partes de la agenda política gubernamental, se aprovechando de manera encubierta en supuestas iniciativas de paz y desarrollo, para usurpar el concepto de territorialidad desarrollada desde las comunidades indígenas, afrodescendientes y llabriegues en sus planes de vida, y redefinió en función de la explotación económica de

los territorios y los sus recursos. Eso agrava aún más los riesgos para la pervivencia y existencia de la población rural, además de no tener en cuenta las necesidades ni de los territorios mismos como seres con vida propia ni de las poblaciones que los moren ancestralmente”<sup>5</sup>.

“Sin la comunidad internacional sentimosnos huérfanos, si el acuerdo se acaba a pesar de ‘los blindajes’, no volvemos a los tiros, pero hebo gente que volvió al monte a la lucha armada viendo estos incumplimientos, por eso hay y habrá guerra por más años.”<sup>6</sup>

5 CRIC: “Entre la pandemia y la guerra”, informe año 2020.

6 Entrevista en ETRC Simón Trinidad, 16 de marzo del 2021.

Los cuestionamientos a la política de simulación de cumplimiento qu'aplica'l gobiernu, salen de la cotidianidá de les persones que dexaron les armes: “Nun hai l'atención acordada pa los adultos mayores, nin pa les persones toyíes de guerra. La salú ye un caos nel ETCR [Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación], la educación ye mui deficiente, la validación del bachilleratu nun da los conocimientos básicos pa seguir una carrera universitaria, dalgunos estudiaron y nun consiguen trabayu por ser ex-guerrilleros”<sup>7</sup>.

“Equí crecieron les amenaces de muerte escontra ex-guerrilleros, nun tenemos seguridad, a esti llugar lleguen ex-guerrilleros de les FARC que salieron de les alcárceles. La UNP [Unidá Nacional de Protección] tien militares y ex-policíes como escoltes nuevos, eso da mieu.”<sup>8</sup>

“La situación de les comunidaes empeoró más que cuando taben cola guerrilla nel territoriu; namás callaron los fusiles per un momentu, pero la razón de la confrontación afondó más. Al nun haber desarrollu humanu l'alcuerdu ta quedando nun cese'l fueu y otres insurrecciones crecen de nuevo. Énte'l problema d'inseguridá marchamos dende los ETCR hacia Bogotá esixendo de la UNP la protección, pero nun cumplen.”<sup>9</sup>

L'alcaldesa encargada del conceyu de Mesetas precisó: “Nun tenemos recursos pa inversión, namás pal pagu de nómines y poco más, tenemos l'ETCR más grande de Colombia y los gobiernos nacional y departamental déxenmos solos col problema d'estos espacios”<sup>10</sup>.

**La Reforma Rural Integral nun avanza.** El gobiernu anunció l'ingresu de más d'ocho millones de dólares de gües (un millón d'hectárees) al Fondu Nacional de Tierras, pero nos últimos tres años namás entregó 507.840 dólares de gües (63.480 hectárees) a 4.750 families.

7 Entrevista nel ETRC Simón Trinidad, 16 de marzu del 2021.

8 Entrevista nel ETRC Simón Trinidad, 16 de marzu del 2021.

9 Entrevista nel ETRC Simón Trinidad, 16 de marzu del 2021.

10 Entrevista cola alcaldesa de Mesetas (Meta), 17 de marzu del 2021.

Nos espacios territoriales visitaos (Mariana Páez y Simón Trinidad nel Meta, y Pondores en La Guajira) evidénciase la falta d'interés del gobiernu por adelantar los proyeutos productivos pa ex-combatientes; los recursos provienen en bona parte de la Xunión Europea y que, según les denuncies, piérdense pel camín nel enguedeyu burocráticu y d'intermediarios entamáu pol gobiernu, que centralizó'l manexu de los recursos de la cooperación internacional pa la paz nes sos redes clientelares.

Nel departamentu del Meta la paz ta siendo saboteada pol gobiernu nacional que nun cumple cola inversión pa la reincorporación d'ex-combatientes, frenada pola falta de tierras en propiedá, pola falta de proyeutos productivos y pol asinatu de los firmantes del alcuerdu. Ye la opinión unánime de les organizaciones sociales del Meta.

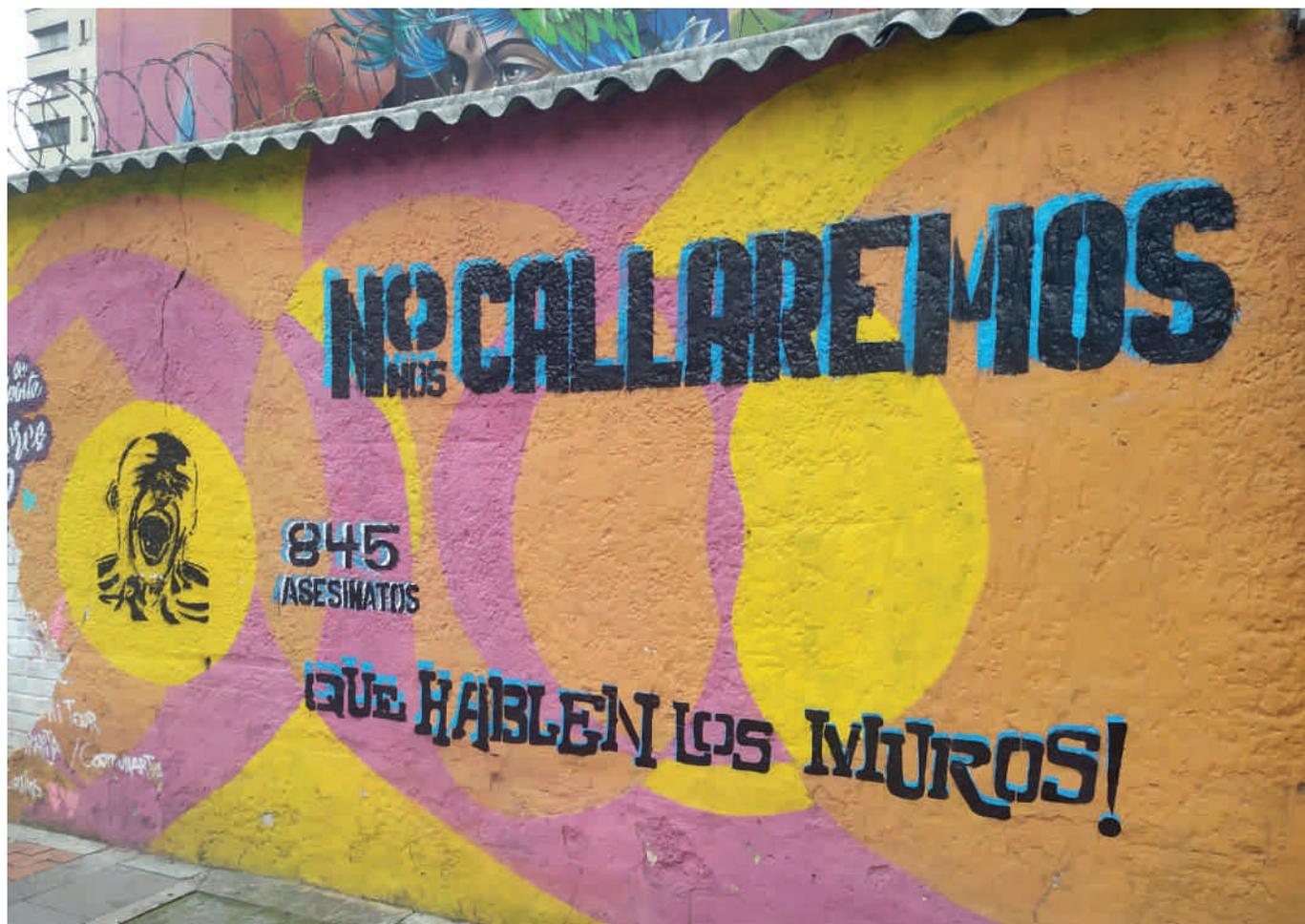
“De seis puntos del alcuerdu nun cumplieron nin el 18%. El programa de sustitución voluntaria de coca sabotiáu'l gobiernu, que nun cumple a quien yá lo desafió.”<sup>11</sup>

“Los nuevos proyeutos productivos nun son viables porque nun tenemos tierras en propiedá, namás un terrenu arrendáu por 20 millones de pesos al añu, tenemos más gastos qu'ingresos; organicemos una asociación de cuatro collaciones llabriegues con ex-guerrilleros y creamos un espaciu nuevu en 80 días de gües (diez hectárees) que llamamos Nueva Área de Reincorporación; yá se compraron, pero'l Conceyu tovía nun mos titula les tierras y el gobiernu tien la estratexa d'incumplir y echa-y la culpa a les disidencies de les FARC.”<sup>12</sup>

**LA XUSTICIA ESPECIAL PA LA PAZ, XEP,** sigue col so llabor y escomienza a dar resultaos en medio de dificultaes presupuestaries, de riesgos pa los xueces y comparecientes. Los avances concretense na re-

11 Audiencia ETCR Simón Trinidad, 16 de marzu del 2020.

12 Audiencia en La Julia (La Uribe, departamentu del Meta), 16 de marzu del 2021.



coyida de declaraciones, las investigaciones de los siete macrocasos abiertos y la participación de las víctimas –que son 380.000 registraes– y nes 36.000 decisiones xudiciales tomaes.<sup>13</sup>

Les personas que se sometieron a la XEP son 12.705, de les que 9.795 formaron parte de les FARC, 2.795, de la

fuercia pública, 125 yeren axentes del Estáu y otros 12 personas llegaron por casos relacionaos cola protesta social.<sup>14</sup>

Hai l'amenaza d'un proyeutu de llei que cursa nel Congresu pa desmontar parte sustancial del alcuertu de paz no referente a drechos de les víctimes a conocer la verdá y acceder a xusticia, especialmente en casos de violencia se-

13 <https://www.eltiempo.com/amp/justicia/ano-nuevo-como-avanzo-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz-en-2020-y-que-se-espera-en-2021-557972>

14 <https://www.eltiempo.com/amp/justicia/ano-nuevo-como-avanzo-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz-en-2020-y-que-se-espera-en-2021-557972>

xual, la desapaición forciada y l'esllarigamientu forciáu. Les víctimes qu'acuden a la XEP nun cunten con garantías pa protexer de manera efectiva'l so drechu a la vida al acudir al sistema integral previstu na XEP.

El maxistráu de la XEP Eduardo Cifuentes mandó un mensaxe'l 30 d'avientu del 2020: "Nun hai que pone-y más torques al alcuertu de paz. Los colombianos sensatos nun podemos cayer na trampa de volver a la guerra. El sistema integral ta dando frutos. Hai que dexalu trabayar y nun sabotialu"<sup>15</sup>.

**COMISIÓN DE LA VERDÁ.** Les persones qu'integraben les FARC, dalgunos paramilitares y militares accedieron a la XEP y reconocieron responsabilidá en secuestros, asesinatos, allistamientu y esllarigamientu forciáu, pero siguen roceanos pa comparecer a dar les sos aportaciones a la verdá los empresarios, los altos mandos militares y los dirixentes políticos. La comisión de la verdá acaba la so misión esti añu.

La comisión recibió informes hasta'l 31 de marzu del 2021, que va ser l'últimu añu de funcionamientu de la Comisión pal Esclaramientu de la Verdá, entidá creada dempués del alcuertu de paz pa sigui-y el rastu a lo qu'hebo tres de los principales fechos del conflictu armáu nel país, y qu'en payares entregará un informe final, esponiendo los sos afayos.

FRANCISCO DE ROUX, presidente de la Comisión de la Verdá, espresó: "Proponemos un diálogu pa tresformar la seguranza. A nun reversar los pasos daos poles fuercies militares cuando intentaron cambiar l'oxetivu de la guerra por un exércitu al serviciu de la paz, a pesar de que tovía hai guerrilla y grupos criminales. Invitamos a la seguridá dada pola confianza: cuando los ciudadanos creen los unos nos otros y confíen nes sos instituciones. La esal-

tación de les armes de tolos llaos da desconfianza y provoca la guerra, nun da seguranza"<sup>16</sup>.

**LA UNIDÁ DE BUSCA DE PERSONES DAES POR DESAPAEÍCIES** avanza nos sos trabayos, informa de busques de restos en 63 sitios del país y adelanta pautos rexonales pola busca de persones desapaecies nel Meta, Magdalena, Antioquia, Puerto Berrió y Bogotá.

"D'alcuertu col Centru Nacional de Memoria Hestórica, na fecha rexistráronse 113.442 persones que siguen desapaecies, de les que'l 63,9% son víctimes de desapaición forciada, al 20,7% secuestráronles y el 15,3% allistáronles de manera illegal. Esto ensin cuntar col altu subreixtru que pue haber de persones desapaecies non consignaes, como, por exemplu, persones que participaron nes hostilidaes que s'alcuentren desapaecies."<sup>17</sup>

En nueve de los 32 departamentos del país concéntrase'l 60% de les desapaiciones rexistraes en Colombia; estos departamentos son: Antioquia, Meta, Magdalena, Valle del Cauca, Cesar, Santander, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo. Esti ye un fechu qu'afectó a miles de families y comunidaes en múltiples conceyos del país. La desapaición produz angustia y esmolecimientu de manera prrollongada y altera los proyeutos de vida de families completes; causa dañu trexeneracional y afecta non solo los núcleos primarios, sinón tamién los procesos comunitarios y sociales, que perdieron día tres día a los sos cabezales y cabezales, ocasionando la resquebra del texíu social. Pese a los grandes impautos de la desapaición, les persones que busquen nun desistieron na llucha por consiguir respuestes"<sup>18</sup>.

15 <https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/ano-nuevo-2021-entrevista-con-eduardo-cifuentes-presidente-de-la-jep-balance-del-2020-557975>

16 <https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/fin-de-ano-2020-el-mensaje-del-padre-de-roux-presidente-de-la-comision-de-la-verdad-para-2021-557875>

17 <https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/conozca-los-pactos-regionales-por-la-busqueda-de-las-personas-desaparecidas-en-colombia/>

18 <https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/conozca-los-pactos-regionales-por-la-busqueda-de-las-personas-desaparecidas-en-colombia/>

## APLICACIÓN DE LA LEI D'AMNISTÍA;

alredor de 1.400 ex-combatientes que deberíen tar abellugaos baxo les figures d'amnistía- ndultu siguen encarcelaos.

**La Lei de víctimes y restitución de tierras.** El conflictu armáu dexa en más de mediu sieglu y hasta'l momentu nueve millones de víctimes, ente persones muertes, desaparecíes y oaes que tienen drechos reconocíos.

La Lei de Víctimes programóse, lo qu' abre una oportunidá p' avanzar na restitución de les tierras que fueron desapolinaes con violencia. “A finales del 2020 había 6.153 sentencies xudiciales –incluyendo 19 pa puelos étnicos– que respunden a 11.786 solicitúes alministratives presentaes dende'l 2012 por parte de les víctimes, que beneficiaron a 74.812 persones”<sup>19</sup>.

La fuercia pública sigue ñegándose a cumplir les órdenes de los xueces de la república d'acompañar y protexer la entrega material de tierras despolinaes a los llexítimos propietarios, les comunidaes, como asocede na rexón d'Urabá.

Pa les comunidaes de la rexón d'Urabá'l mayor enzanca pa la restitución de les tierras usurpaes a les comunidaes llabriegues y afros, ye l'ex-presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ y el so entornu empresarial, políticu y paramilitar.

## SITUACIÓN COL ELN

La falta de continuidá del diálogu del gobiernu col ELN somete a Colombia a la continuación del conflictu armáu internu y a los pobladores de les árees de la so influyencia a los rigores d'una guerra na que la fuercia pública persiste n'atacar el drechu internacional humanitariu, DIH, y n'aliase colos grupos paramilitares p'agredir a la población civil, que ven como el “enemigu internu.”

L'ELN, a través de los sos representantes na mesa de diálogu de L'Habana reconoció que tienen contactos col

gobiernu colombianu y mantienen la esperanza de reactivar la mesa de diálogos pa la paz: “Pese al estáu de conxelamientu de los acercamientos dende los últimos dos años, en tou esti tiempu de dalguna manera hebo contactos, la mayoría d'ellos indireutos y toos confidenciales. El propósitu ye esperar y volver a instalar una nueva mesa”<sup>20</sup>.

La mesa de diálogos col ELN instalóse en L'Habana en febreru del 2017 pol gobiernu de JUAN MANUEL SANTOS. El gobiernu d'IVÁN DUQUE, dende la so toma de posesión, el 7 d'agostu del 2018, ñegóse a mandar delegaos y suspendió los diálogos en xineru del 2019 tres l'atentáu del ELN nel que morrieron 22 cadetes de policía.

El gobiernu colombianu esixó del gobiernu cubanu la captura y estradición de la delegación del ELN. “Tengo ordenáu'l levantamientu de la suspensión d'órdenes de captura a los 10 componentes del ELN y revocao condiciones que permitan la permanencia nel país cubanu, tamién pido qu'esti país faiga efectives eses captures”<sup>21</sup>.

Pal ELN el gobiernu colombianu actúa lladinamente frente a la insurrección, inora los compromisos adquiríos énte los países garantes del diálogu y sigue un guion de los Estaos Xuníos pa que'l Departamentu d'Estáu incluya a Cuba na llista de países que nun combaten el terrorismu. “Ye de máxima falsura calificar a Cuba como atentadora del drechu internacional y faelo como pagu polos sos servicios a la paz, cuando los atentadores son Trump y Duque”<sup>22</sup>.

El 27 de payares del 2020 personalidaes de varios países escribieron una carta al Secretariu Xeneral de la Organización de Naciones Xuníes na qu'espresen: “Nun podemos permanecer agora pasivos énte un desafío descomanáu que

20 <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/20/eln-confirma-que-ha-seguido-en-contacto-con-el-gobierno-con-miras-a-reactivar-una-mesa-de-dialogo/>

21 <https://www.telesur tv.net/news/colombia-ivan-duque-ruptura-mesa-dialogo-eln-20190118-0034.html>

22 <https://www.efe.com/efe/america/politica/la-guerrilla-del-eln-rechaza-inclusion-de-cuba-en-lista-terrorista-ee-uu/20000035-4249363>



*Audiencia en el ETCR Simón Trinidad.*

conciene a la República de Cuba, nación que ta siendo inxustamente atacada por cuenta de la so coherencia y compromisu cola paz de Colombia. Apoyu que reconoció vusté, Sr. Secretariu Xeneral, como lo espresó'l so voceru, el Sr. Stéphane Dujarric, el 8 de mayu del 2018, día que Cuba recibió nel so territoriu a la Delegación de Diálogos del Exércitu de Lliberación Nacional, ELN<sup>23</sup>.

“Como comunidaes del Pacíficu que padecemos a diario l'absurdu conflictu armáu nos nuestos territorios y qu'apostemos pola salida negociada porque ye l'únicu camín dempués de más de 50 años de confrontación armada, espresamos: 1. Refugu a la falcatrúa del gobiernu nacional énte'l desconocimientu del drechu internacional. Compartimos el conceptu xurídicu que se-y entregó al presidente Duque por

Federico Mayor Zaragoza, ex-Director Xeneral de la Unesco, en xunetu del 2019, que xunto con otros xuristes internacionales sostién que Cuba nun pue estraditar a los componentes del ELN porque ta obligada a cumplir el drechu internacional, lo mesmo que'l gobiernu nacional ha garantizar el retornu d'esta delegación cumpliendo colos protocolos que firmó l'Estáu colombianu col ELN, nel 2016, col respaldu de los países garantes. 2. Convocamos al presidente Iván Duque al cumplimientu de los protocolos na so integridá pa lliberar a Cuba de tan inxusta ya inmerecida conderga, y a retomar con sinceridá la Constitución y la llei, rompiendo los vínculos colos grupos paramilitares que tovía persisten en componentes de la fuerca pública, como senderu pa la salida negociada a esi conflictu que sigue prrollongándose y degradándose.”<sup>24</sup>

23 <https://www.justiciaypazcolombia.com/carta-secretario-general-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas/>

24 <https://verdadpacifico.org/rechazamos-a-la-perfidia-del-estado-colombiano/>

## LOS DERECHOS HUMANOS NEL 2020 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

Sectores amplios de la población siguen sometidos a las acciones violentas de los actores armados, legales ya ilegales, que atacan a los derechos humanos y las reglas de la guerra en Colombia.

Las élites colombianas son las responsables de unas dinámicas de exclusión y violencia que dexen consecuencias sociales graves: Colombia es el país más desigual de América latina y uno de los más desiguales del mundo, según la revista FORBES.<sup>25</sup>

Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos ambientales, afirma Global Witness.<sup>26</sup> En abril del 2021 entró en vigor el acuerdo de Escazú para proteger la vida de quienes defienden el medio ambiente. El gobierno de Colombia no lo robó a pesar de ser el país más peligroso del mundo para los ambientalistas. Al contrario, decretó el retomar las fumigaciones con glifosato.

Colombia, según el ACNUR, sigue siendo el país del mundo con más víctimas de desplazamiento forzado, con nueve millones de personas.<sup>27</sup>

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, después de Afganistán, Colombia es el país con más víctimas de minas antipersona en el mundo.<sup>28</sup>

Colombia es uno de los países del mundo con más casos y denuncias por ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de personas en los últimos treinta años.

El crecimiento de las economías de coca, el narcotráfico, la especulación, la corrupción, la minería y la agroindustria —protegidos por los grupos paramilitares— están generando el espaldamiento de grupos armados que atacan a la dirigencia social y a los habitantes de los territorios abocados a marchar o a morir masacrados.

El paramilitarismo sigue. A pesar de que es un compromiso del Estado contenido en el acuerdo de paz, no hay política pública para esmantelar a los grupos paramilitares, perseguir a los socios enguizadores y romper sus redes de apoyo, incluyendo a los que tienen dentro del gobierno y de la fuerza pública, responsables de gran parte de la violencia actual.

Los ataques a la dirigencia social son muy graves e impunes. No hay garantías para representar a las comunidades para defender los derechos humanos.

El panorama general de inseguridad y graves ataques a los derechos humanos en Colombia es preocupante; con todo y con eso el gobierno —por mediación del Ministerio de Defensa— muestra optimismo: “Cola política de estabilización ‘Paz con Legalidad’, presentada al país en noviembre del 2018, el presidente Iván Duque honra la responsabilidad histórica que tiene el país y cola so gente. Garantiza que se repare a las víctimas, sabe sobre la trascendencia de cumplir con quien está en proceso de reincorporación y con las familias en proceso de sustitución de cultivos ilegales que cumplan y se mantengan fieles a la legalidad. Además, empobina a que los territorios más afectados por la violencia se garren el camino hacia la estabilización definitiva. Con ello, da un paso sin precedentes, no ve en qué territorio se pueda, en el mediano plazo, gozar de un futuro en el que se cumpla la legalidad, se promueva el emprendimiento y, a la fin, haya equidad...”<sup>29</sup>

25 <https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-america-latina/>

26 <https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/>

27 El Tiempo, <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/colombia-es-el-pais-con-mas-desplazados-internos-informe-acnur-378716>

28 CICR. Informe trimestral. Abril/21, <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/05/cicr-presento-balance-trimestral-de-victimas-de-minas-antipersonal-en-colombia/>

29 Informe Paz con Legalidad. Agosto 2018 - Enero 2021\_2.pdf

Tamién xubieron los casos de secuestro y los “actos de terrorismu”, definíos como l'aición de provocar o mantener n'estáu d'esmolición o axorizu a la población con actos que pongan en peligru la vida, la integridá física o la llibertá de les persones, edificaciones o medios de comunicación, tresporte, procesamientu o conducción de fluyíos o fuerces motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Estos actos pasaron de 209 nel 2019 a 403 aiciones nel 2020 afectando oleoductos, torres de conducción llétrica, carreteras y pontes.<sup>30</sup>

El gobiernu informa que desañiciaron manualmente 756.848 díes de gües (94.606 hectárees) de coca nel añu 2019 y 1.041.176 díes de gües (130.147 hectárees) nel 2020<sup>31</sup>, pero los cultivos siguen estendiéndose porque se semen más árees en parques naturales y nos frentes de colonización. Esta migración de los cultivos d'usu illegal va agravase coles asperxones aérees con glifosatu anunciaes pa esti añu.

La emerxencia sanitaria pol COVID-19 punxo n'evidencia la precariedá del sistema de salú pública y la imposibilidá d'accesu de la mayoría de la población a la sanidá privada. Amás, afecta l'asistencia de neños y neñes a les escuelas y al so drechu a la educación, yá que'l 72% de les cases rurales nun tienen accesu a internet pa recibir les clases virtuales.

La pandemia y el confinamientu agravaron les desigualdaes hestóriques del país. La CEPAL (Comisión Económica p'América Llatina) rexistró pa Colombia un aumentu del desemplegu, del trabayu informal, de la vulnerabilidá de les muyeres y de la concentración de la propiedá y de la riqueza en poques manes. Esto afecta de manera particular a les poblaciones que yá s'alcontraben en condiciones de vulnerabilidá, como les muyeres y la población rural, afrodescendiente ya indíxena, agudizando les desigualdaes sociales.

30 Logros de la Política de Defensa y Seguridad Diciembre 2020 (1).pdf

31 Logros de la Política de Defensa y Seguridad Diciembre 2020 (1).pdf

Creció la prohibitú monetaria y la prohibitú estrema: “El país zarró'l 2020 con 21 millones de persones en situación de prohibitú monetaria, mientras qu'en prohibitú estrema la situación foi **más pronunciada**, yá que d'esta cifra total de persones, 7,47 millones d'habitantes tán agora nesta situación crítica, frente a 4,68 millones de persones nel 2019, pa un aumentu añal de 2,79 millones de persones”<sup>32</sup>.

Los sindicatos del profesoraú del Valle del Cauca denunciaron: “Dende'l sindicatu del maxisteriu denunciemos la presión pa volver a clases apertiguñaes y col profesoraú ensin vacunar, amás de los ataques constantes a la llibertá de cátedra”<sup>33</sup>.

El confinamientu úsenlu los grupos armaos pa bloquiar rexones, aumentar el control territorial y social sobre les comunidaes llabriegues y afros y sobre los puelos indíxenes. Al respetive Amnistía Internacional informó que: “A consecuencia de los enfrentamientos armaos, 23.128 persones pertenecientes a comunidaes indíxenes y afrodescendientes nel departamentu del Chocó viéronse confinaes durante tol 2020”<sup>34</sup>.

“Una de les razones pa esti recrudecimientu d'ataques y amenaces son los intentos de los grupos armaos d'aprovechar ya instrumentalizar la pandemia p'ampliar les sos esferes d'influyencia, tratando d'auto-representase como garantes del orde públicu o xustificar agresiones y asesinatos con supuestos ataques a midíes sanitaries. Estes pretensiones chocaron inmediateamente colos esfuerzos de les comunidaes de reforzar los llabores de control territorial como parte de la so estratexa de prevención frente a la pandemia. Ye por eso que gran parte de los ataques y amenaces

32 DANE Colombia. <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/dane-publico-cifras-de-la-pobreza-monetaria-en-colombia-584732>

33 Audiencia en Cali, 21 de marzu del 2021.

34 AMNISTIA INETRACIONAL, informe 2020/21, <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021SPANISH.PDF>



*Audiencia con organizaciones populares en Villavicencio/Meta.*

adicionales dirixéronse escontra la guardia indíxena, como actor más visible del control territorial.”<sup>35</sup>

Les organizaciones de víctimes reiteren les denuncias escontra'l gobiernu pola falta d'una política que-yos garantice l'accesu a la verdá, a la xusticia, a la reparación y garantías de non repetición.

Según el gobiernu les víctimes tán siendo atendíes. “Dende agostu del 2018 desarrolláronse 1.079 aiciones reparadores beneficiando a 159 suxetos de reparación colectiva. Nesi mesmu periodu, entregáronse bienes d'usu colectivu y dióse apoyu a proyeutos productivos y d'infraestructura social y comunitaria en beneficiu de 131

suxetos de reparación colectiva, con 44.853 millones de pesos. 8.776 llares fueron acompañaos nel procesu de retornos nesti gobiernu. De la mesma manera, entregáronse 1.979.703 xiros d'atención humanitaria p'atender a 917.631 llares víctimes d'esllarigamientu forciáu n'etapes d'emergencia, por 1'26 billones de pesos”<sup>36</sup>.

Nel Valle del Cauca tiende a agravase la violencia escontra los pobladores de zones marxinales de Buenaventura y Tumaco como resultáu de los proyeutos d'ampliación de les infraestructures pal comerciu marítimu y el narcotráficu.

35 CRIC: “Entre la pandemia y la guerra”, informe añal 2020.

36 <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/los-cinco-avances-del-acuerdo-de-paz-con-farc-581863>



La corrupción mata al reducir los recursos destinaos a facilitar l'accesu de la población más vulnerable a drechos como'l de l'alimentación, la salú, la educación y los drechos económicos, sociales y culturales. Amás, la corrupción ye una fonte de peligru (persecuciones, amenazas, atentaos, asesinatos) pa la dirixencia social que la enfrenta con denuncies.

L'allistamientu forciáu nun paró nos territorios, anque tevo un incrementu significativu dende'l 2018 según l'ACIN: “Les estratexes d'allistamientu de menores inclúin: 1) Recompenses o dineru por recaos o favores de compra pa los componentes d'estos grupos. 2) Namoramientu de neños/es, adolescentes y xóvenes cola fin de suministrar información. 3) Presuntes xeneraciones d'amistaes que tienen como oxetivu causar dalgún tipu d'empatía con estos grupos. 4) Casos de xóvenes que son usaos pa comercializar y consumir sustancias psicoactivas. 5) Familiares de

neños, neñes y adolescentes con dalgún grau de familiaridá con componentes de los grupos armaos usaos pa reclutar neños”<sup>37</sup>.

La fuercia pública y en particular l'escuadrón móvil antialborotos, ESMAD, ta usando de manera habitual armes de fueu de curtiu y llargu algame escontra los manifestantes.

Usen armes non convencionales como armes contundentes. Armes de lletalidá reducida úsense intencionalmente como armes d'alta peligrosidá y lletalidá, amás l'ESMAD usa armes non protocolaries (machetes, flondes, gomeros) y munición recalzada y con metralla, amás d'usar les armes de dotación y fueu real. Esta aición ye la más peligrosa y mortífera que realiza l'ESMAD de la policía nacional y l'exércitu colombianu y lo más grave ye que se convirtió nuna práctica regular escontra movilizaciones, especialmente les movilizaciones indíxenes.<sup>38</sup>

Nel procesu pol asinatu del rapaz de quince años NICOLÁS NEIRA, qu'asocedió'l 1<sup>u</sup> de mayu del 2005, quedó demostrao que l'axente del ESMAD NÉSTOR RODRÍGUEZ RÚA disparó l'arma de dotación a la cabeza del menor, polo que lu condergaron a 17 años de prisión pol xulgáu 18 penal de Bogotá.<sup>39</sup>

L'ESMAD dispara a matar o a dexar tuertes a les persones como actu represivu énte l'usu del drechu a la protesta.

YURI MAYERLY CAMARGO CASTAÑO, de 19 años d'edá, perdió'l güeyu esquierdu pol estallíu d'un disparu de gas llacrimóxenu, fechu impune cometíu'l 29 de payares del 2019 pola policía durante la represión d'una

37 ACIN. Informe de desarmonías territoriales Zona Norte del Departamento del Cauca, Colombia, 2020

38 ACIN. Informe de desarmonías territoriales Zona Norte del Departamento del Cauca, Colombia, 2020

39 <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-a-17-anos-de-prision-al-agente-del-esmad-que-disparo-contra-nicolas-neira/>

manifestación d'estudiantes de la Universidad Nacional por educación pública y de calidad.<sup>40</sup>

MIGUEL ÁNGEL LINARES BARBOSA, de 23 años d'edá perdió'l güeyu esquierdu por un disparu del ES-MAD el 19 d'avientu del 2019 na Universidad Pedagógica.<sup>41</sup>

GERMÁN PUENTES VALERO, de 25 años d'edá, morrió por disparos de la policía'l 8 d'avientu del 2020 nos alrededores del CAI (Comandu d'Atención Inmediata) El Rincón, Bogotá. Na investigación descubrióse que'l policía ANDRÉS DÍAZ MERCADO disparó en 21 oportunitadaes l'arma de dotación impautando a GERMÁN PUENTES.<sup>42</sup>

LORWAN MENDOZA AYA, de 30 años, morrió'l 9 d'avientu del 2020 por disparos de la policía nacional cerca de la estación de Ciudad Verde (Bogotá). Morrió nel Hospital Cardiovascular del Neñu en Soacha, xunto con otros dos persones muertes en circunstancias asemeyaes.<sup>43</sup>

En San Mateo y Soacha recibieronse denuncias mui graves escontra la policía nacional por fechos qu'amedranaron y güei indignen a los pobladores, como l'asesinatu de polo menos 13 persones nes movilizaciones escontra la brutalidá policial en setiembre del 2020.

Ún de los casos que presenta más irregularidades foi la quema del CAI de San Mateo, nel que s'alcontraben 11 persones detenies y que, pola omisión criminal de los axentes nel so deber d'auxiliu, sufrieron quemadures graves que provocaron la muerte de 8 d'ellos nos díes sucesivos. Según los testimonios, los mesmos axentes estorbaron los esfuerzos de familiares por rescatar del fueu a les víctimes.

Los familiares de les persones que morrieron tres la quema del CAI de San Mateo recibieron amenazas de muerte por denunciar la negligencia criminal de la policía nel so deber d'auxiliar a les persones que taben quemando en calabozos baxo la so custodia, ente ellos:

JEISON CONDE RAMÍREZ, taba deteníu dende'l 23 de xunu del 2020, informara de palices y maltratu policial nos calabozos. Morrió col 80% del cuerpu quemáu. Varios policíes impidieron a pataes que los familiares intentaren sacalu del fueu: "Dexen que se quemem eses rates fíes de puta."<sup>44</sup>

CRISTIAN RINCÓN, "quemóse'l 4 de setiembre nel CAI, morrió'l 8 de setiembre. Los nuegos fíos menores viéronlo too."<sup>45</sup>

JUAN DAVID ROJAS, deteníu y golpiáu'l 7 de xineru del 2020, morrió por quemadures. Vimos munchu fumu saliendo del CAI, llevemos una manguera, pero la policía nun permitía acercamos a apagar. Dempués d'interponer la denuncia escontra la policía sufrimos siguimientos d'integrantes de la SIJIN, intelixencia de la policía.<sup>46</sup>

ANTHONY ESTRADA ESPINOZA, ciudadanu venezolanu muertu'l 9 de setiembre por disparos del policía ÓSCAR ALEXANDER MÁRQUEZ, según l'informe de balística.<sup>47</sup>

JUAN GONZÁLEZ FORY, de 27 años, estudiante d'últimu semestre d'inxeniería industrial, finó nel hospital de Kennedy dempués de recibir un balazu dende'l CAI de Timiza (Bogotá). Minutos antes del crime una persona avi-

40 Informe a la delegación asturiana: "Casos de violencia policial atendidos por la Fundación Lazos de Dignidad" Bogotá, marzu del 2021.

41 Informe a la delegación asturiana: "Casos de violencia policial atendidos por la Fundación Lazos de Dignidad" Bogotá, marzu del 2021.

42 Informe a la delegación asturiana: "Casos de violencia policial atendidos por la Fundación Lazos de Dignidad" Bogotá, marzu del 2021.

43 Informe a la delegación asturiana: "Casos de violencia policial atendidos por la Fundación Lazos de Dignidad" Bogotá, marzu del 2021.

44 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.

45 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.

46 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.

47 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.



*Sitio en el que asesinaron a la gobernadora indígena Cristina Bautista y a cinco integrantes de la Guardia Indígena en octubre del 2019. Tacueyó/Cauca.*

sólu: “Tas nel barriu enquivocáu, equí nun aceptamos nada escontra la policía, esti ye un barriu de policíes pensionaos y activos.”<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.

ÓSCAR INFANTE GALINDO, morrió'l 7 de setiembre por quemadures recibíes nel CAI de San Mateo.<sup>49</sup>  
BERNARDO PINEDA GAVIRIA, 37 años d'edá, desertó de la guerrilla'l 13 de payares del 2013 y reinser-

<sup>49</sup> Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.

tóse como microempresariu y foi reconocíu pola comunidá como dirixente social pol so activismu na solución de los problemes del barriu. La policía acosólu na so casa en varies ocasiones con intenciones de llevalu ensin orde xudicial, pero la comunidá nun lo permitió, pero finalmente fixéron-y un amagüestu xudicial y detuviéronlu. Dende'l CAI intentaron desaparecelu dempués de les cuendes. Morrió poles quemadures recibíes nel CAI. Medicina Llegal detectó güelpes y mancadures nes piernes que faen pensar en tortures antes y dempués de la quema.<sup>50</sup>

Les empreses tienen responsabilidá na crisis de los derechos humanos. “El Bancu de Colombia executa despidos masivos de trabayadores, nun respeta derechos llaborales nin sindicales. Dalgo pasa nun país nel que la riqueza concéntrase y la banca crez, pero la economía real disminúi”<sup>51</sup>.

“En Buenaventura la empresa SPB (Sociedá Portuaria de Buenaventura) sobre-esplota a los trabayadores per hores estivando barcos, el SNTT foi a huelga y yá declararon oxetivu militar a los sos dirixentes, incluyíu'l presidente del sindicatu. Tamién les persones qu'encabezaron el paru cívicu en Buenaventura fueron amenazaes de muerte.”<sup>52</sup>

La Comunidá de Paz de San José de Apartadó, que se ñega dende hai más de venti años a formar parte del conflictu armáu internu, sigue asediada pol paramilitarismu, existencia que ñega la brigada XVII del exércitu. L'alcaldía d'Apartadó, a través de CÉSAR JARAMILLO, ta dividiendo a les xuntes d'aición comunal y buscando enfrentar a la población. Énte l'arremetida empresarial, militar y paramilitar, usóse la figura solidaria del *amicus curiae* dentro de la campaña europea a la que se sumaron los diputaos asturianos ÁNGELA VALLINA y RAFAEL PALACIOS GARCÍA. “Pa la nuesa comunidá de paz esta nueva campaña d'esterminiu nun ye una novedá. Lo mesmo l'exércitu

que tola fuerca pública, qu'alcaldes y gobernadores, propunxéronse esterminamos. Per munchos años los soldaos que percorríen la nuesa collación repetíen de cutiu la fras: “o los xudicializamos o los matamos”, lo que se traducía nun mensaxe xenocida: vustedes nun caben nesti país... El llibru *En las entrañas del genocidio* resume los 1.462 crímenes escontra la humanidá perpetrados escontra la nuesa comunidá de paz hasta mediaos del 2018, güei en manes de múltiples tribunales internacionales, señala minuciosamente les 7 estratexes d'esterminiu que l'Estáu colombianu y la so clas dirixente inventaron pa esterminamos. Tovía nun lo llograron. Quiciabes lo llogren. La nuesa decisión ye resistir ensin rindimos”<sup>53</sup>.

El 20 d'abril del 2021 asesinaron a SANDRA LILIANA PEÑA, gobernadora del resguardu indíxena La Laguna Siberia, Territoriu Ancestral Sat Thama Kiwe. Los asesininos capturólos la guardia indíxena y condergólos la xurisdicción indíxena.

## I. ATAQUES A LA DIRIXENCIA SOCIAL, PERSISTENCIA DEL PARAMILITARISMO

*“Colombia, país más peligrosu del mundiu pa defender los derechos ambientales.” Global Witness.*<sup>54</sup>

1. Nel últimu añu agudizáronse'l conflictu armáu internu y el conflictu social, dambos ensin calce de solución dialogada por decisión del gobiernu.
2. Los primeros díes del 2021 tán siendo mui violentos “en términos de masacres, enfrentamientos armaos y amenaces de muerte a cabezaleros sociales... Según el

50 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimes de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.

51 Audiencia en Cali, 21 de marzu del 2021.

52 Audiencia en Cali, 21 de marzu del 2021.

53 <https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/en-las-entrañas-del-genocidio-el-estado-colombiano-en-plan-de-extermínio-de-la-comunidad-de-paz-de-san-josé-de-apartado-antioquia-colombia/>

54 <https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/>

tribunal, ente'l 1 y el 24 de xineru presentáronse 14 enfrentamientos ente grupos armaos y la fuercia pública, mientres que nel mesmu periodu del 2020 rexistráronse nueve. Les amenaces de muerte a defensores de drechos humanos saltaron de cuatro a trece y les masacres o asesinatos de tres o más persones nun mesmu eventu aumentaron de cinco a seis, amás del homicidiu de catorce dirixentes sociales, l'asesinatu de cinco excombatientes de les FARC y siete enfrentamientos ente grupos armaos nel periodu evaluáu<sup>55</sup>.

3. Los ataques a la dirixencia social colombiano tien una de les causes na doctrina militar del enemigu internu creada polos Estaos Xuníos pa persiguir opositores políticos n'América.
4. La Corte Interamericana de Drechos Humanos reconoció la influencia de la doctrina del “enemigu internu” y la “doctrina de seguridá nacional” nos manuales de formación en contraguerrilla y na práctica de la violencia antisindical por parte de les fuercies armaes en Colombia.<sup>56</sup>
5. Colombia sigue encabezando'l récor mundial d'asesinatos de persones defensores de los drechos humanos con 133 casos documentaos pola ONX –la cifra de les organizaciones sociales ye mayor–, de los que'l 9% fueron muyeres, el 21% indíxenes y el 4% afrodescendientes. El 72% de los casos asocedieron en zones rurales del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
6. L'asesinatu nel 2020 de 64 persones que defendíen los drechos ambientales, convirtió a Colombia nel país del mundiu más peligrosu pa quien combaten nel terrenu les causes del cambéu climáticu.
7. “L'Asociación d'Autoridaes Tradicionales y Cabildros U'was (ASOU'WAS) denunció que l'exércitu nacional

matara a un cabezaleru indíxena nunes operaciones militares efectuaes nel conceyu de Chitagá (departamentu de Norte de Santander). La comunidá desmintió la declaración del exércitu nacional de que la muerte se produxera en combate.”<sup>57</sup>

8. La persecución escontra la dirixencia social reviste calter de sistemática, anque la OACNDUH la califique de “persistente.”
9. Nun se ve voluntá na xusticia pa identificar y capturar a los determinadores o autores intelectuales d'estos crímenes escontra la dirixencia social y a les sos redes delincuenciales.
10. El confinamientu convirtió a la dirixencia social nun oxetivu identificáu. “De vuelta al Cauca, a los cabezaleros sociales y comunitarios taben matándolos nes sos cases. El confinamientu facilitó-yos el trabayu a los sicarios, a quien nunca-yos importaron les normes d'emergencia p'acabar cola vida de dirixentes de sustitución de cultivos, presidentes de les xuntes d'aición comunal, defensores de los drechos humanos. Énte esto, el gobiernu nacional ofreció como solución un poquitín más de lo mesmo de siempre: más militares y más perres pa pagar recompenses”<sup>58</sup>.
11. Hai denuncies sobre l'espionaxe illegal exercíu por axentes del Estáu escontra 130 persones opositores del gobiernu, xueces, dirixentes sociales, periodistes, fechos que dio a conocer la prensa y qu'obligó al retiru de dalgunos oficiales. El mieu de les persones entrevistaes ye qu'eses informaciones personales s'usen pa faer montaxes xudiciales y p'asesinar.
12. Ye mui grave que la Sociedá Portuaria de Buenaventura, SPB, y el gobiernu nacional nun protexan la vida

55 <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210127-colombia-registra-cifras-hist%C3%B3ricas-de-violencia-en-inicio-de-2021>

56 [https://www.coljuristas.org/nuestro\\_quehacer/item.php?id=176](https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=176)

57 AMNISTIA INTERNACIONAL, Informe 2020/21. <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021SPANISH.PDF>

58 ACIN: Informe de desharmonías territoriales Zona Norte del Departamentu del Cauca, Colombia, 2020.



*Mural en la carrera séptima de Bogotá D.C.*

- de los trabajadores encargaos de la seguridad del puertu dende'l que s'embarquen cargamentos de droga con destín a los Estaos Xuníos y Europa. Supervisores de seguridad de la SPB tán amenazaos polos narcotraficantes col silenciu de l'administración portuaria y la inoperancia del gobiernu pa protexer la vida ya integridá de trabayadores que cumplen la so función de control.
13. Ye'l casu d'ÓSCAR PATARROYO FONSECA, trabayador del área de seguridad de la SPB, sindicalista del SNTT-CUT (Sindicatu Nacional de Trabayadores de Rama, Servicios de la Industria del Trespote y Loxística-Central Unitaria de Trabayadores), amenazaú y persiguíu pola mafia del narcotráficu por cumplir col so deber. Tevo acoyíu pol Programa Asturianu d'Atención a Víctimes de la Violencia en Colombia nel 2020. Nin la empresa, nin el gobiernu lu protexen.
  14. Los ataques escontra la dirixencia sindical siguen. Los ataques escontra profesores por exercer la llibertá de cátedra y la educación pública son constantes según les denuncies de FECODE-CUT.
  15. Hai subrexistru d'amenaces a personal docente: "Esto porque a los maestros da-yos mieu denunciar, yá que nos sos territorios conviven con toa clas de grupos armaos; o ven inútil faelo porque'l gobiernu nun los atiende y la Unidá Nacional de Protección nun los inclúi nos sos programes de seguridad. O prefieren aguantar la situación y quedar a riesgu propiu, en munchos casos pagando estorsiones, porque un rea-



*Delegación Asturiana y el Presidente de la ONIC. Rueda de prensa en Bogotá D.C.*

llugamientu pue ser a un llugar igual o peor que'l que dexen"<sup>59</sup>.

16. Nel departamentu del Valle del Cauca proliferen les amenaces de muerte como parte d'una persecución que les organizaciones sociales califiquen de sistemática escontra persones que defenden los drechos humanos dende'l CPDH, CSPP, CUT, y organizaciones d'ambientalistas, estudiantiles, coleutivos de persones LGBTI.
17. En Soacha recibieronse denuncies que dan cuenta de la presencia de grupos paramilitares y otros bandes qu'estorsionen, amenacen, asesinen y desaparecen persones que sedrían llevaes a un vertederu d'escombru custodiáu por personal armáu. L'alcalde del conceyu

ta denunciáu por conducta omisiva énte estes realidaes qu'axoricen a la población del cascu urbanu y del mediu rural. "En Soacha hai paramilitares qu'ataquen a la dirixencia social, como Les Águiles Negres, Los Rastroxos, Los Sayayines, Los Paisas, les AGC, Clan del Golfo, y guerrilles como les disidencies de les FARC y células del ELN."

18. Nel Meta recibimos denuncies escontra la fiscalía y escontra'l gobiernu por un ciclu nuevu d'espoliu y esllarigamientu "institucional." Llabradores de más de cincuenta años nel territoriu y que tuvieron que se treslladar tán siendo afectaos agora por amenaces de muerte combinaes con procesos d'estinción del drechu de dominiu pa quita-yos les tierres, como pasa nes collaciones Candilejas, El Triunfo, Tierradentro, en La Argelia, El Diviso, San Carlos,

59 Entrevista con Martha Alfonso, FECODE. Bogotá, marzo del 2021



*Pancarta en San Mateo-Soacha/Cundinamarca.*

- Paraíso y La Unión. Son más de 40.000 días de gües (5.000 hectárees) del campesináu n'estinción de dominiu.
19. “ASOAGRIJU (Asociación d’Agricultores de la Inspección de La Julia) trabajó p’abandonar el cultivu de coca y sustituyilu por cacáu, pero’l proyeutu frustróse porque’l gobiernu nun cumple compromisos. Les Zonas Estratéxiques d’Intervención Integral nesti territoriu implicaron el treslláu de pobladores d’El Diviso hacia abaxo, a escondese na zona de reserva de l’Amazonia, pero llegó la fiscalía con tropes y xudicializaron a los llabradores, nun faen lo mesmo colos grandes afaradores de selva. Quieren sacalos tamién d’esi territoriu.”<sup>60</sup>
  20. Cinco persones de la dirixencia social colombiano acoyéronse nel 2021 al Programa Asturianu d’Atención a Víctimes de la Violencia en Colombia pol riesgu pa les sos vides amenazaes por defender los drechos humanos:
  21. MARÍA J. ROJAS CASTAÑEDA, maestra popular, defensora de drechos humanos na Fundación Comité de Solidaridá colos Presos Políticos sección Santander.
- 
- 60 Audiencia en La Julia (La Uribe, departamentu del Meta), 16 de marzu del 2021.

Pol so llabor como educadora popular y como defensora de los drechos humanos ta siendo persiguida ya intimidada, xunto col so esposu, que ye dirixente sindical de los trabayadores del sector agroalimentariu en SINALTRAINAL-CUT (Sindicatu Nacional de la Industria d'Alimentos – Central Unitaria de Trabayadores). Dende hai diez años ta persiguida y obligada a treslladase. Pol so llabor y pol riesgu qu'assume destacóse cola Premiu de la Xunión Europea 'Toa una Vida' otorgáu a través de la coordinación DIAL versión 2012-2013. A finales del 2020 desconoció furtiaron de la so residencia información rellacionada con ataques a los drechos humanos nel interior de les alcárceles.

22. CÉSAR USECHE LOSADA, ye periodista, defensor de los drechos humanos y ambientales, fundador de l'Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Ye defensor del mediu ambiente y opositor del megaproyeutu Hidroeléctrica d'El Quimbo, polos sos impautos nel medioambiente y nes comunidaes del centru del Huila, departamentu del que lu sacaron con amenaces que se repitieron nel so llugar de refuxu.
23. JAIME MECHECHE CAISAMO, integrante del puelu indíxena embera, del que ye docente nel resguardu Jagual del Río Chintadó. Ye integrante de l'ASOREWA de la Organización Nacional Indíxena de Colombia, ONIC, y de l'Asociación d'Autoridaes Indíxenes del Carmen del Darién. Amenazáronlu de muerte de manera reiterada na zona selvática del baxu Atrato, que ta militarizada y na qu'exercen control grupos guerrilleros y grupos de paramilitares. La so situación de riesgu reconocíola como "estraordinaria" el gobiernu. Les comunidaes indíxenes del puelu embera del Carmen del Darién opónense a la guerra y torguen l'accesu al territoriu a los grupos armaos, sían llegalos o non, enzanquen l'allistamientu de menores indíxenes y l'esllarigamientu forciáu. Les amenaces agudizáronse cola so oposición a la minería nel Cerro Carepero y pola aición de la Guardia Ambiental Indíxena que desañició 1.320 díes de gües (165 hectárees) de coca del resguardu Urada.
24. YUBITZA ROVIRA MONTALVO, ye llicenciada en Ciencies Sociales, defensora de drechos humanos, integrante del Movimientu de Víctimes de Crímenes d'Estáu MOVICE capítulo Atlánticu. Pol so llabor na revisión de proyeutos de desarrollu con enfoque territorial, pola so defensa del drechu a la vida y de la cultura del Caribe, amenazóla de muerte'l grupu paramilitar "Clan de Golfo" nun panfletu reciente. El 18 de xineru del 2021 llograron retenela con intenciones d'asesinala. Les autoridaes conocen esta situación poles denuncies presentaes, pero nun tien programa de protección nin garantías.
25. VÍCTOR BELTRÁN ESCOBAR, ye llicenciáu n'Alministración d'Empreses y ye defensor de drechos humanos como integrante del Movimientu de Víctimes de Crímenes d'Estáu MOVICE capítulo Cauca. Ye cabezaleru social y exerce como defensor de los drechos humanos nel departamentu del Cauca, conceyos de Santander de Quilichao y Puerto Tejada, nos que participa en procesos de fortalecimientu de les xuntes d'aición comunal, procesos xuveniles, de defensa del territoriu de los puelos indíxenes y de les comunidaes negres del Conceyu Comunitariu Zanjón de Garrapatero. Amenazáronlu de muerte y tevo a puntu de ser asesinau, circunstancies conocíes pol gobiernu colombianu, que-y asignó un programa de protección que ta siendo desmontáu.
26. L'usu abusivu de la fuercia y la respuesta militar a la movilización social por parte del escuadrón móvil antialborotos, ESMAD, y del exércitu nacional nel control de la protesta social dexó decenes de persones



muertes y centenares de mancaes, como s'aprecia en material audiovisual y nos testimonios recibíos.

27. L'año pasáu rexistráronse casos d'usu abusivu de la fuerzia: 73 asesinatos atribuyíos a la fuerzia pública en contestu d'operaciones qu'inclúin 13 muertos por aiciones de la policía durante les protestes de setiembre del 2020 y 581 persones mancaes.
28. La brutalidá policial condergóla en setiembre la Corte Suprema de Xusticia dada la "intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerzia pública en manifestaciones y protestes" atacando'l drechu a la reunión pacífica, polo qu'ordenó al Ministeriu de Defensa presentar disculpes por "los excesos de la fuerzia cometíos pol escuadrón móvil antialborotos de la policía nes manifestaciones que s'entamaron el 21 de payares del 2019"<sup>61</sup>.
29. L'usu abusivu de la fuerzia por parte d'axentes de la guardia penitenciaria dentro de les alcárceles dexó ensin vida a 33 persones, 23 d'elles na Alcárcel Nacional Modelu de Bogotá y ocho más tres la quema de los calabozos de la policía de San Mateo en Soacha.
30. Les alcárceles colombianas, n'estáu de ilegalidad permanente, convirtiéronse en depósitos de persones ensin drechos, espacios oscuros a la mirada internacional de los drechos humanos. Por decisión política del gobiernu, y aprovechando'l confinamientu, nun se permite—dende va más d'un añu—l'ingresu d'abogaos y familiares a los centros de reclusión.
31. "Nel Cauca quieren reducirse les causes de tolos asesinatos al narcotráficu. Ensin distinción toles muertes, dende'l discursu institucional, métense nel mesmu sacu.... Asina, por arte de maxa, cola mázcara del narcotráficu pretenden camuflar la campaña de conquista y espoliu, que yá non solo ye de tierras, sinón que se trata tamién d'un espoliu d'autoridá, una suplantación sangrienta de la capacidá de decidir colectivamente... Espublizaron dalgunos medios de comunicación, lo qu'observemos per años: les aliances estratéxiques ente militares y disidencies pa perpetuar, per un llau, un modelu de negociu sobre los productos derivaos de la coca y la mariguana y, per otro llau, semar la semiente de la división nes comunidaes y estrizar, definitivamente, les posibilidaes de resistir."<sup>62</sup>
32. Pal gobiernu: "Los fenómenos d'allistamientu (forciosu de neñes y neños), d'homicidios de defensores de dre-

61 <https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/>

62 ACIN: Informe de desharmonías territoriales Zona Norte del departamentu del Cauca, Colombia, 2020.



*Reunión en Santa Martha con la gobernación del departamento del Magdalena.*

chos humanos, los treslaos, los homicidios colectivos, conocíos comúnmente como masacres, toos s'alluguen nes mesmes zones xeográfiques de Colombia y concasen coles rutes de narcotráficu y les zones d'extracción ilegal de minerales”<sup>63</sup>.

33. Nel departamentu del Cauca, tanto nel norte como na zona de costa y del macizu, la población ta sometió a la violencia extrema aplicada polos paramilitares, les insurrecciones y la fuerca pública.
34. Ye notoria y pública la permisividá de la policía y del exércitu nacional colos narcos nos retenes que debieren persiguir el tráficu de suministros y el tresporte de coca y

de marihuana na vía ente Santander de Quilichao, Corinto y Toribío, ente otros.

35. La nuesa delegación viose acosada con disparos y ráfagues de fusil nel sector d'El Palo. Refugámoslo y entendémoslo como una demostración de la so capacidá d'operar, violentar y amedranar incluso cerca de retenes de la fuerca pública.
36. “Tamos en riesgu polos ataques de cutiu, y poles simulaciones de combates ente xente del exércitu qu'aparenten matase y dempués lleguen diciendo qu'oyeron tiros, qu'ellos nun fueron y que nun somos neutrales, qu'hai grupos armaos nos nuestos territorios, cuando namás tán ellos, entós ¿quién-y dispara a quién?”.<sup>64</sup>

63 Conseyería Presidencial pa los Drechos Humanos, 22 de febreru del 2021. <https://www.dw.com/es/colombia-vincula-asesinatos-de-l%C3%ADderes-sociales-a-cultivos-il%C3%ADcitos/a-56657761>

64 Audiencia en Popayán, 20 de marzu del 2021.

37. “La persecución aumenta en Santander de Quilichao en zona urbana, n’onde la policía maltrata a personas por llevar botes de caucho, o por llevar el bastón de mandu indíxena. L’exércitu ñega la realidá de los enfrentamientos coles guerrilles y el fechu de que se meten a les cases. Quieren invisibilizar la guerra y seguir atacando’l drechu internacional humanitariu, escuenden el negociu del tráficu de coca y mariguana. En Corinto encañonáronmos y nadie sabe por quién.”<sup>65</sup>
38. Los territorios que dexaron les FARC ocupáronlos los grupos paramilitares que cunten cola permisividá de la fuercia pública pa traficar, amenazar, treslladar, desapaecer, torturar, asesinar y cometer masacres. Esta violencia afonda la concentración de la propiedá de la tierra en poques manes y la inequidá y la esclusión hestóriques del campesináu, los puelos indíxenes y les comunidaes afrocolombianas, nel que ye yá ún de los países más desiguales del mundiu.
39. Les amenazas de muerte llanzaes escontra personas y colectivos sociales sumaron 795 casos qu’inclúin 152 periodistas.
40. El deber de protexer la vida de la dirixencia social colombiano correspuende a la Unidá Nacional de Protección, que nel 2020 activó midies de protección pa 3.740 personas defensores de drechos humanos y cabezaleros sociales, a cuatro d’estes personas asesináronles. La UNP tovía nun garantiza la protección con enfoques de xéneru, étnicu y territorial.
41. En Buenaventura los grupos armaos controlen la ciudá y la zona rural, que fueron “sectorizaes” y nes que se llibren enfrentamientos con población civil en medio, sometió a disparos, desapaiciones y allistamientos forciaos. “En sectores de la ciudá puen detenete por llevar camiseta o tener el cuerpu tatuáu”<sup>66</sup>.
42. “Nel Norte del Valle del Cauca y otres zones resulta preocupante la presencia de los grupos paramilitares qu’actúen en Sevilla, Tuluá, Bugalagrande, Florida y San Pedro, pues lleguen a les cases de los dirixentes sociales esixendo’l llibru de personas afiliaes a les xuntes d’aición comunal pa persiguiles. Nestes rexones yá hai presencia de carteles mexicanos y de personas d’esi país.”<sup>67</sup>
43. “Nun se respeta’l drechu a la protesta de los estudiantes y profesores, que reciben un tratu brutal de la policía antialborotos responsable de les muertes y firies graves, tanto que se convirtió nuna práctica sistemática.”<sup>68</sup>
44. “La política antisindical nel Valle refléxase en que cuando fundamos CUT nel 1987 arrinquemos con 80.000 afiliaos y 170 sindicatos, na fecha actual queden 45.000 afiliaos y 100 sindicatos, diezmaos por despidos, contratación precaria, amenazas, asesinatos, polo qu’esiximos la reparación colectiva del movimientu sindical.”<sup>69</sup>
45. IVÁN ANTONIO LÓPEZ CASTAÑEDA ye integrante del CPDH, denuncia amenazas de muerte na ciudá de Cali pola so aición de defensa de los drechos humanos y tres pasar varios años na alcárcel acusáu falsamente de delitos políticos.
46. FABIO MARÍN, dirixente de l’Asociación d’Unificación y Reorganización Agraria de Colombia, AURACOL, amenazárenlu de muerte, ta siendo sometíu a siguímentos de la policía nacional según denuncia’l CPDH Valle del Cauca.
47. ATHEMAY STERLING ACOSTA, defensor de drechos humanos, integrante del CPDH Valle del Cauca, vien siendo persiguiú pol exércitu nacional, siguímentos, sabotaxes y agresiones tres les amenazas

65 Audiencia en Popayán, 20 de marzu del 2021.

66 Audiencia con organizaciones sociales en Bogotá, 22 de marzu del 2021.

67 Audiencia en Cali, 21 de marzu del 2021.

68 Audiencia en Cali, 21 de marzu del 2021.

69 Audiencia en Cali, 21 de marzu del 2021.



de muerte por espresar el puntu vista del CPDH nun Conseyu de Seguridá realizáu tres la masacre del correximientu Las Juntas del resguardu indíxena Pepitas de Dagua (Valle) ocurrida'l 21 de marzu del 2019 pola esplosión d'un artefactu que mató a ocho persones, siete d'elles pertenecientes a la guardia indíxena de les comunidaes nasa y embera wounaan.<sup>70</sup>

48. La dirixencia social colombiano sigue atacándolo con impunidá, sobre too los grupos paramilitares, cola complicidá de la fuerca pública.

70 CPDH Valle del cauca: En grave riesgu drechos fundamentales d'integrantes del CPDH Valle, Cali, marzu del 2021.

49. JANI SILVA ye defensora de los drechos humanos y del mediu ambiente y amenazáronla de muerte por enfrentase a les empreses petroleres como representante llegal de l'Asociación pal Desarrollu Integral Sostenible de la Perlla Amazónica, ADISPA, organización comunitaria que protexe los drechos de les comunidaes que viven na Zona de Reserva Llabriega Perlla Amazónica.<sup>71</sup>

71 <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/salva-una-vida/jani-silva-colombia-may20/>

## 2. EXECUCIONES ESTRAJUDICIALES Y MASACRES, DRECHU INTERNACIONAL HUMANITARIU

50. Colombia ye ún de los países del mundiu con más casos y denuncias por execuciones estrajudiciales nos últimos trenta años.
51. La Xurisdicción Especial pa la Paz, XEP, estableció que polo menos a 6.402 persones matáronles illexítimamente pa presentales como baxes en combate en tol territoriu nacional ente'l 2002 y el 2008. Los departamentos priorizaos dientro del casu 03 pola sala de reconocimientu son: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.<sup>72</sup>
52. A finales d'abril del 2021 Colombia llegó a la masacre númeru 30 del añu; los departamentos más afectaos son Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
53. Les masacres regresaron a los territorios y les cifras del gobiernu colombianu nun concuerden cola de la OACNXDH: “Nel 2020, l'ACNXDH documentó 76 masacres qu'implicaron la muerte de 292 persones, incluyendo 23 muyeres, 6 neñes, 18 neños, siete indíxenes y 10 afrodescendientes. Otros cinco casos adicionales siguen documentándose.<sup>73</sup> Nel 66% de los casos, los presuntos perpetradores yeren integrantes de grupos criminales.
54. Dende'l 2018 ta creciendo'l númeru de masacres, siendo'l 2020 l'añu cola cifra más alta rexistrada dende'l 2014. Los departamentos más afectaos son Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander,
- col 62% d'estos fechos. El gobiernu informó al ACNXDH, qu'estableció una unidá especial pa coordinar la respuesta estatal a estos casos.<sup>74</sup>
55. El 23 d'abril asesinaron a tres menores d'edá en Buenos Aires de Quibdó (Chocó), departamentu nel qu'operen l'ELN, les Autodefenses Gaitanistes de Colombia (AGC), les Fuercies Armaes Mexicanes (FAM) y una banda conocida como “Los Llocos Yam.”<sup>75</sup>
56. Nun son almisibles les declaraciones del ministru de Defensa xustificando'l bombardéu del 2 de marzu del 2021 a un campamentu de les FARC na colación Buenos Aires, conceyu Calamar, del Guaviare. Na aición morrieron polo menos 10 menores según l'Institutu Nacional de Medicina Llegal y Ciencias Forenses, pero nun proporcionó información sobre les identidaes nin edaes de les víctimes.
57. Les declaraciones del ministru de Defensa de Colombia al xustificar l'ataque afirmando que la guerrilla “usa xóvenes pa convertirlos en máquines de guerra” ataca la Convención sobre los Drechos del Neñu suscrita por Colombia y qu'obliga a los Estaos parte a adoptar “toles midíes posibles p'asegurar la protección y el cuidáu de los neños afectaos por un conflictu armáu”<sup>76</sup>.
58. “El 26 de setiembre asesinaron al nuesu fiu DANY ALEJANDRO OLIVERO PÉREZ, de 19 años d'edá, con tres disparos a manes de dos axentes de la policía nacional con nomes JIMMI NÚÑEZ VERGARA y DARÍO YESID VERGARA URREA. Pasaron hasta la fecha siete años y mediu esperando que se faiga xusticia. Con munchos pilancos en camín pa favore-

72 <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx>

73 [https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020\\_traduccin-no-oficial.pdf](https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccin-no-oficial.pdf)

74 [https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020\\_traduccin-no-oficial.pdf](https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccin-no-oficial.pdf)

75 <https://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-menos-cuatro-meses-20210423-0032.html>

76 [https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/04\\_dutli.pdf](https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/04_dutli.pdf)



cer a los policíes. Foi una llucha consiguir que'l casu pasare de la xusticia penal militar a la xusticia ordinaria pues tratóse d'una execución estraxudicial y non d'un suicidiu como afirmó'l policia Núñez, pues según Medicina Llegal “yera imposible qu'él, dempués de recibir ún de los disparos, ún nel abdome, ún nel pescuezu y otru na cabeza, pudiere falar, por eso hai una dulda escontra los policíes.”<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimes de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.

### 3. POBLACIÓN EN SITUACIÓN D'ESLLARIGAMIENTU

59. Colombia, según la ACNUR, sigue siendo'l país del mundiu con más víctimes d'esllarigamientu forciáu, con nueve millones de persones. La Unidá pa les Víctimes reconoz que dende'l 1985 el 16% de la población colombiano tevo qu'abandonar les sos cases a causa de la violencia nos territorios.
60. Col incrementu del conflictu aumentaron nun 96,8% les cifres del esllarigamientu forciáu según la Defensoría del Puelu en rellación col añu 2019. Cada día muévese

un promediu de 168 persones y asoceden cuatro movi- mientos masivos cada selmana.

61. Nel 2020 la Defensoría del Puelu rexistró 28.000.509 víctimes del esllarigamentu forciáu, de los que 9.000 son persones de les comunidaes afro y 7.000 indíxenes, les demás son families llabradores revictimizaes.<sup>78</sup>
62. Sigue l'esllarigamentu forciáu de los puelos indíxenes. “Los indíxenes lleguen provenientes de conceyos como Bagadó, Riosucio, Carmen de Atrato, Quibdó y Murindó. En tol 2020 la Personería de Medellín rexistró un total de 161 indíxenes treslladaos que llegaron a la capital d'Antioquia. En malapenes 69 díes del 2021 yá se presentaron poco más de la metá de tolos casos del añu pasáu.”<sup>79</sup>
63. Les rexones con más tresllaos son el sur del departamen- tu del Cauca, el baxu Cauca, l'Urabá antioqueñu y cho- coanu, Buenaventura, el Catatumbo (Norte de Santan- der) y la zona del altu Baudó (Chocó).
64. “Les élites preparéense pa sustituyir por treslláu a la población del Meta y traer a les multinacionales que refugamos y nun tenemos una organización fuerte pa protexemos.”<sup>80</sup>
65. La llegada de cuasi dos millones de migrantes venezolanos dende'l 2015 plantea un retu adicional pal go- biernu colombianu nuna sociedá na que los medios de comunicación asoliviaron la xenofobia culpando a la reciente inmigración venezolano de problemes colombianos vieyos como la inseguridá, el desemplegu y los salarios baxos.

78 <https://codhes.wordpress.com/2021/02/16/desplazamiento-forzado-en-colombia-que-paso-en-2020/>

79 William Vivas, personeru de Medellín, 10 de marzu del 2021. <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/medellin-ha-recibido-89-indigenas-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-lo-que-va-de-2021/>

80 Audiencia en La Julia (La Uribe, departamentu del Meta), 16 de marzu del 2021.

## Mines antipersona

66. Según la Cruz Bermeya, dempués d'Afganistán, Colom- bia ye'l país con más víctimes de mines antipersona nel mundiu.
67. Polo menos 389 persones fueron víctimes d'artefactos esplosivos como mines antipersona, restos esplosivos de guerra y artefactos con detonación controlada.
68. “Desafortunadamente, les cifres que recoyimos de víc- times d'artefactos esplosivos nel 2020 son les más altes de los últimos 4 años; esplicase pola disputa pol con- trol territorial que los diferentes actores armaos tán teniendo.”<sup>81</sup>
69. Según Descontamina Colombia de la Oficina del Altu Comisionáu pa la Paz (OACP), les mines dexaron nel país 9.653 persones firies y 2.322 fallecimientos, esto ye: una de cada cinco víctimes muere.
70. Recibimos denuncies de la parálisis del desmináu huma- nitariu en varias rexones del país argumentando altera- ciones del orde públicu.
71. Les mines siguen instalándose col recrudecimentu del conflictu: “Alértase sobre la instalación de mines anti- persona semaes por actores armaos ilegales nos límites ente l'altu Nunalbí y Pipalta Palví Yaguapí, esponiendo y dexando en riesgu non solo a comunidaes indíxenes, sinón a los nuestos compañeros de comunidaes negres que moren nestes; por estos fechos alértase sobre la po- sibilidá d'otros tresllaos masivos de la comunidá del altu Nunalbí, Pipalta Palví Yaguapi y vecinos.”<sup>82</sup>

81 CICR. El conflictu armáu en Colombia un dolor que nun se va. <https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-DIH-balance-humanitario>

82 <https://www.mpdl.org/sites/default/files/2010015-comunicado-awa.pdf>

#### 4. PERSONES PRIVAES DE LA LLIBERTÁ. TORTURA, TRATU CRUEL, INHUMANU O DEGRADANTE

72. A la población recluyó nes alcárceles colombianes –cerca de 120.000 persones– privaselo de manera masiva y sistemática los drechos humanos pues ta sometió a condiciones qu'incumplen los drechos humanos y la Constitución Política por constituyir tratu cruel, inhumanu y degradante.
73. Hai evidencia abondo p'afirmar que la tortura y los malos tratos son una práctica sistemática que forma parte de los manuales de formación pa la fuerza pública y ye usada pa perseguir opositores políticos, como mediu pa conseguir información o confesiones, como métodu de control de la población encarcelao, como mecanismu de discriminación, como forma de control social y de xenerar axorizu nes comunidaes, como ferramienta pa reprimir la protesta social, como métodu pa someter a persones secuestraes.
74. Les alcárceles colombianes fueron calificaes como “depósitos” de persones sometíos a cuermos, falta d'agua potable, alimentos en mal estáu, aisllamientu agraváu pola pandemia, falta de servicios de salú. Motines esixendo prevención escontra'l virus por ser población vulnerable y pidiendo atención médica pa los enfermos del virus COVID-19, acabaron con 23 prisioneros asesinaos pola guardia penitenciaria y 83 firíos na cárcel nacional La Modelo, de Bogotá.<sup>83</sup>



75. “Nes alcárceles del Valle del Cauca siguen deteníos 150 prisioneros políticos de les FARC que tán aisllaos y nun recibieron el beneficiu de l'amnistía-indultu.”<sup>84</sup>
76. La mayoría de los fechos de tortura queden impunes porque la xurisdicción penal militar –que tien la competencia pa investigalos– nun aplica sanciones disciplinaries, nin penales y el gobiernu ta más interesáu n'invisibilizar lo que pasa nes alcárceles qu'en resolver los problemes, como lo vienen esixendo los tribunales colombianos y los sistemas de drechos humanos de la OEA y la ONX.

83 <https://www.lavanguardia.com/internacional/20200322/4835371710/coronavirus-motin-bogota-muertos-heridos.html>

84 Audiencia en Cali, 21 de marzu del 2021.

## 5. MUJERES, INFANCIA, MOCEDÁ, VÍCTIMES, POBLACIÓN LGBTI

77. Nel 2020 aumentaron los casos d'embaranzos d'adolescentes y a finales del año presentóse'l proyeutu de llei 008/20 pa emparamentar el drechu d'albuertu, lo que constitúi una amenaza pa los derechos sexuales y reproductivos de les muyeres.
78. Según la Consejería Presidencial pa la Equidá de la Muyer, col confinamientu baxó'l númberu de denuncies por violencia basada en xéneru, pero duplicáronse les llamaes telefóniques pola mesma causa por mor del piesllu de servicios na fiscalía y de rexistros médico-ilegales.
79. L'incrementu de les agresiones nel ámbitu domésticu escontra persones LGBTI dexó 76 víctimes mortales nel añu.
80. "Los paramilitares tienen redes de captación de muyeres migrantes procedentes de Venezuela, que son sometíes a la prostitución y a muchos neños/es obliguenlos a trabayar en redes de microtráfico de drogues."<sup>85</sup>
81. La violencia policial afecta de forma específica a les muyeres y a la población LGTBI, especialmente a les muyeres trans. Denúnciase la falta de personal feminín en procesos de detención y custodia, asina como violencia sexual y actos vexatorios por parte de los axentes.
82. En Soacha persíguese a les persones del coleutivu LGBTI. "Les persones trexéneru somos víctimes d'abusos de la policía, señalamientos, esclusión, falta d'interés de les autoridaes pa protexer, investigar, dialogar. Hai denuncies graves por agresiones escontra nós, pero l'alcalde nun atiende los nuestos llamaos"<sup>86</sup>.
83. Les asociaciones del Magdalena y del Cesar denuncien que les muyeres sufren los rigores del conflictu y de la descomposición social, como la trata de persones y la prostitución infantil, que califiquen de pandemies ocultas. En toles rexones visitaes recibimos denuncies d'allistamientos forciaos y masivos de xóvenes y neños pa la guerra.
84. Recibimos denuncies que dan cuenta del aumentu del allistamientu forciáu de neños y neños polos grupos paramilitares y les guerrilles en departamentos como Cauca, Meta, Valle del Cauca y Antioquia.
85. "Nel norte del Cauca sigue l'allistamientu de menores, en dellos casos nes mesmes instituciones educativas. Nun hai una respuesta institucional efectiva. Les families nun denuncien por mieu, como pasa en Toribío, Caloto, Miranda, Lópezadentro y Tacueyó, lleven a los neños fuera del territoriu pa evitar rescates. La columna Dagoberto Ramos llevó a tres neños de Corinto en medio d'enfrentamientos; dempués aparecieron muertos, como daos de baxa en combate. Hai tolerancias estrañas que permiten la convivencia nel mesmu territoriu de la fuercia pública, los paramilitares y les guerrilles. La guerrilla percuerre carreteres controlaes pola fuercia pública en camionetes d'alta gama y ensin plaques, nun s'enfrenten. Si maten a un comuneru a un quilómetru de distancia, tarden venti minutos en llegar. Trabayen de la mano pa sacamos de los territorios indíxenes."<sup>87</sup>
86. El gobiernu colombianu incumplió'l drechu internacional humanitariu al bombardiar, el 29 d'agostu del 2019, un campamentu de les disidencies de les FARC nel que morrieron ocho neños. El presidente Iván Duque reconoció "a los héroes de la patria, en particular a los altos mandos de la fuercia pública, polos resultaos de la operación na que cayeron 9 integrantes de les disidencies de les estintes FARC, nel Caquetá."

85 Audiencia en Cali, 21 de marzu del 2021.

86 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimes de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.

87 Audiencia en Popayán, 20 de marzu del 2021.



87. El presidente consideró que “gracies a un llabor estratéxicu, meticulosu, impecable y con tol rigor, cayó ‘Gildardo Cucho’, dirixente d’esa organización.” El presidente Duque y el ministru de Defensa, Guillermo Botero, ocultaron qu’ocho de les persones muertes yeren menores d’edá.<sup>88</sup>

88 <https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Presidente-Duque-anuncio-cayo-alias-Gildardo-Cucho-pretendia-ser-parte-banda-narcoterrorista-alias-Ivan-Marquez-190830.aspx>

88. “Col confinamientu aumentaron los ataques escontra les muyeres nel ámbitu domésticu en Cali, pero la policía nun recibe les denuncies y remite a les víctimes a “iguar eso en casa.”<sup>89</sup>

89. Hai denuncies graves por violencia sexual escontra neñes de los pueblos indíxenes escontra militares y policíaes de los departamentos del Cauca, Nariño, Valle y Risaralda.

## 6. IMPUNIDÁ

90. La impunidá estimula la escalada de les violencies que secuden Colombia.

91. Atenta escontra l’estáu de drechu y xenera impunidá la creciente influencia del gobiernu nos órganos de control y de xusticia.

92. Según les organizaciones sociales, la Fiscalía Xeneral, la Contraloría, la Procuraduría y otres instituciones taríen baxo la influencia del gobiernu, lo que fai temer pola independencia de los poderes públicos y pola calidá de la democracia colombiana.

93. L’accesu a la xusticia nun ye posible pa la población que vive en zones rurales. Nun hai fiscalíes, nin policía técnica, nin medios. En munches rexones del país los levantamientos de los cuerpos faenlos los familiares.

94. Dada la gravedá de los ataques escontra la dirixencia social y la impunidá na que, según les organizaciones sociales, queda’l 96% de les muertes, el gobiernu a traviés de la consejera presidencial destacó’l trabayu de la Fiscalía: “Nel ‘esclariamientu’ de cuasi 63 per cientu de los homicidios –onde la mayoría de persones deteníes fueron cargos medios y non los altos

89 Audiencia en La Julia (La Uribe, departamentu del Meta), 16 de marzu del 2021.

mandos qu'ordenaron l'asesinatu— asina como la creación, por parte del Ministeriu de Xusticia y el Conseyu Superior de la Xudicatura, de 11 xulgaos penales especializaos”<sup>90</sup>.

95. Centenares d'asesinatos y miles d'amenaces de muerte queden na so mayoría na impunidad; con too y con eso l'ACNXDH “acueye con satisfacción les 20 condergues dictaes nel 2020 escontra quien asesinaron a persones defensores de drechos humanos; mientras qu'otros 97 casos tán n'espera de decisiones xudiciales n'avientu del 2020”<sup>91</sup>.
96. Hai un añu escomenzaron a regresar a Colombia xefes paramilitares que fueron estraditaos a los Estaos Xuníos. Estes persones tienen delitos graves polos que deben responder pa garantizar los drechos de les víctimes.
97. “La nuesa organización, FENSUAGRO, sufrió dende la so fundación hai 45 años l'asesinatu de 624 de los sos afiliaos y dirixentes. Cuasi la totalidá d'estos casos tán na impunidad. Nel añu 2020 13 integrantes de FENSUAGRO fueron asesinaos; no que llevamos del 2021 yá son cuatro les víctimes. Polo menos 13 dirixentes de la federación alcuéntense amenazaos y tán reduciendo los programes de protección otorgaos pola UNP. Les amenaces yá nun se tán denunciando en varies rexones del país porque la fiscalía nun les investiga y xeneren represalies. ASINTRACAMPIC [Asociación de Trabayadores Llabriegos de Piamente Cauca] ye una organización estigmatizada y rrellacionada con grupos al marxe de la llei. Los sos afiliaos vienen siendo víctimes d'amagüestos xudiciales, acosos, amenaces y asesinatos. N'abril del 2019

90 Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial pa los Drechos Humanos. <https://www.dw.com/es/colombia-vincula-asesinatos-de-l%C3%ADderes-sociales-a-cultivos-il%C3%ADditos/a-56657761>

91 [https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020\\_traduccion-no-oficial.pdf](https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf)



dirixentes de la organización fueron amenazaos de muerte por persones identificaes como disidencies de les FARC y el cartel de Sinaloa. En marzu del 2020 fueron nuevamente amenazaos con orde de salir del territoriu. N'abril del 2020 homes armaos llegaron a la casa de MARÍA JOSÉ ARROYO y asesinaron al esposu y a los dos fíos, de 11 y 14 años. El 13 d'ochobre del 2020 homes armaos obligaron a la comunidá a reunise nel polideportivu y asesinaron al xoven NELSON RAMOS delante la so familia y de la comunidá; mientras asocedía esto un helicópteru

sobrevolaba la zona ensin faer nada al respetive. Sábase que “Comandos de Frontera tien una llista de persones p’asesinar.”<sup>92</sup>

98. “La calma en La Uribe ye aparente. D’equí llevaron a sesenta persones preses acusaes de rebelión; dos años presos y nada de pruebas; foi un falsu positivu xudicial, faciéndolo pa persiguimos; ente’l 2001 y el 2003 perdímoslo too, volvimos a empecipiar. Agora persíguenmos otra vegada, diz que por auxiliadores de la guerrilla, dañu ambiental, ser testaferros, hai amenaces de muerte. El 14 d’avientu del 2016 ordenaron midíes precautelares escontra les nuses propiedades dentro de procesos d’estinción del drechu de dominiu. Dicen que les nuses parceles y animales son de les FARC. Temo que me conviertan nun falsu positivu. El gobiernu ta ordenando’l robu, l’espoliu escontra’l campesináu del Meta. L’esllarigamientu agora ye institucional.”<sup>93</sup>
99. “Hai un pautu de silenciu pa ocultar, per mediación de la xusticia penal militar, la responsabilidá de los altos mandos del exércitu nacional que dieron órdenes de matar civiles y presentalos como guerrilleros daos de baxa en combate: Montoya, Carreño, Mora Rangel, Ospina, Castellanos, Trujillo... tán impunes, ocultos por un mantu de silenciu pola xusticia penal militar.”<sup>94</sup>
100. “En Toribío vivimos la violencia dende’l 1995 cruciada ente guerrilles, paramilitares, fuercia pública, cola destrucción total del cascu urbanu nun atentáu con

coche bomba. Hebo un movimientu masivu del cascu urbanu a la zona rural.”<sup>95</sup>

101. Nel paru nacional de payares del 2020 “la policía influyó decididamente na nueche de pavor del 22 de payares, n’onde copropietarios de conxuntos residenciales y pequeños comerciantes, alarmaos polos uniformaos, mancaron a polo menos cinco manifestantes pacíficos que fueron víctimes d’una trampa de la mesma policía”<sup>96</sup>.
102. “Les denuncies sobre la práctica de tortura física y psicolóxica hacia población retenío nos Centros de Permanencia Temporal (CTP) de Cazucá, San Mateo y Chicó denuncióles la Mesa Esperanza, la Campaña Vida y la ONG Temblores ensin que les autoridaes inicien les investigaciones en materia penal y disciplinaria.”<sup>97</sup>

## 7. PUELOS INDÍXENES

103. Los pueblos indíxenes de Colombia tán siendo sometíos al esterminiu físicu y cultural.
104. El gobiernu sigue ensin cumplir el plan de salvaguarda de los pueblos indíxenes en riesgu d’estinción ordenáu pola Corte Constitucional y pola CIDH (Corte Interamericana de Drechos Humanos).
105. Los pueblos indíxenes y les comunidaes afros tán mui afectaos pola violencia en cuasi tol país y de manera especial nos departamentos del Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.

92 Informe Situación de los Drechos Humanos FENSUAGRO, Bogotá, marzu del 2021.

93 Audiencia en La Julia (La Uribe, departamentu del Meta), 16 de marzu del 2021.

94 Reunión con organizaciones sociales del Meta y rueda de prensa, Villavicencio, 17 de marzu del 2021.

95 Audiencia con autoridaes indíxenes en Toribío (Cauca), 19 de marzu del 2021.

96 Audiencia en Soacha, conceyal HEINER GAITÁN PARRA, Soacha, 22 de marzu del 2021.

97 Audiencia con organizaciones sociales y familiares de víctimes de la violencia policial, San Mateo (Soacha), 22 de marzu del 2021.



*Salón comunal en La Julia-la Uribe/Meta.*

106. El desaposiar violentu y la destrucción de los sos territorios tienen al borde del esterminiu físico y cultural a pueblos indígenas d'Amazones, Guainía, Norte de Santander, Putumayo y Vaupés y de la Sierra Nevada de Santa Martha, na que sobreviven los pueblos indígenas arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa.

107. “Las repercusiones escontra los indígenas aumentaron desde l'alcuerdu de paz. Nel 2019 conociéronse los órdenes directos de muerte escontra la dirigencia y la guardia indígena en medio de les disputes territoriales de la xente armao. Los asesinatos nel 2020 disminuyeron pola acción preventiva de la guardia indígena, la guardia cimarrona y la guardia llabriegua nuna articulación interétnica positiva. Los puntos de control nes carreteras úsennos pa faer intelixencia sobre too ente El Palo y El Tierrero ente Caloto y Toribío. Ente'l

2011 y el 2014 vimos el pavor de los enfrentamientos, les víctimas, los táticos [cilindros bomba]... eso volvió. Ente Corinto (Toribío) y Caloto ta'l triángulu de mayor repercusión na población, de mayores desarmonías territoriales.”<sup>98</sup>

108. “Los asesinatos escontra la guardia indígena busquen destruir parte del texíu de protección de la vida. Los asesinatos del guardia indígena de San Francisco, DANIEL SESCOUÉ, detúvolos la guardia indígena y entrególos a les autoridades pa que los xulgaren; los que s'oponen a la xusticia indígena, ¿prefieren la xusticia de cada grupu?”<sup>99</sup>

98 Audiencia con autoridades indígenas en Toribío (Cauca), 19 de marzo del 2021.

99 Audiencia con autoridades indígenas en Toribío (Cauca), 19 de marzo del 2021.



*Murales en las casas del ETCR Libertad Simón Trinidad.*

109. “L’asesinatu de l’autoridá indíxena CRISTINA BAUTISTA pocos díes dempués d’anunciar que la amenazaren de muerte, afectó al trabayu de muyeres indíxenes y demostró que nun hai garantíes nin teniendo programa de protección oficial de la UNP.”<sup>100</sup>

100 Audiencia con autoridaes indíxenes en Toribío (Cauca), 19 de marzu del 2021.

110. Los pueblos indíxenes del norte del Cauca siguen firmes nos sos propósitos de construyir organización pa la paz, la vida, la unidá, l’autonomía y l’harmonía territorial. Oxetivos qu’estorben a los intereses de les mafies del narcotráficu, empreses mineres ya inxenios azucareros.

111. Particularmente nel norte del Cauca denuncien l’asesinatu de les sos autoridaes, comuneros ya inte-

grantes de la guardia indíxena. “Estos ataques agravaron l’añu pasáu y nel presente, y mantiénense na impunidad. Talu ye’l casu del asenatu de la dirixente Cristina Bautista y cuatro *kiwe thegnas* (guardianes de la Tierra) n’ochobre del 2019. Estos fechos demostraron que los paramilitares y la fuerzia pública trabayen xuntos”<sup>101</sup>.

112. El desañiciu forciáu de los cultivos ilegales y l’incumplimentu de más de mil alcuertos y compromisos de compra de tierras firmaos pol gobiernu colos puelos indíxenes son caldu de cultivu pal conflictu social y pa la violencia de los grupos que protexen la narcoeconomía y el llatifundiu. “Camiones con diez tonelae de coca pasen per controles viales de la fuerzia pública ente Toribío – Jambaló, y peles vías hacia’l Pacíficu hacia Buenaventura. La xente sabe qu’hai esos alcuertos por perres y nun cree nes autoridaes”<sup>102</sup>.
113. Los conflictos por tierras en haciendas de La Emperatriz y Los Mangos en Caloto (Cauca) esixen una intervención decidida del gobiernu nacional p’adquirir estes finques y avanzar na construcción de paz con equidá, antes de qu’ haya nuevos fechos de violencia escontra los indíxenes. En Los Mangos hai cincuenta families indíxenes de diferentes sitios, Lópezadentro, Corinto, Toribío, Tacueyó. El conflictu por eses tierras ye en principiu col inxeniu azucareru Central Castilla. “Hai peligros y amenazas pero nun hai muertos y si los hubiera nun mos movemos de la lliberación de la madre tierra”<sup>103</sup>.
114. L’alcaldía de Bogotá tien en situación d’abandonu a miles de persones sometíes escluyíes del drechu a la

vivienda, munches d’elles víctimes del esllarigamientu forciáu, como les que malviven en barrios ensin llegalizar en Ciudad Bolívar (Bogotá).

115. Denigrante ye la situación d’abandonu de la población indíxena del puelu embera chamí y katío, treslladao de los sos territorios ancestrales nel Chocó y abandonaos pol gobiernu nacional y distrital en Bogotá. Malviven d’artesaníes y llimosnes en barrios de Ciudad Bolívar ensin atención social, nin posibilidaes de retornu con garantías a los sos territorios, de los que los siguen treslladando forciadamente.
116. “Hasta ochobre del 2020 yéramos 325 families del puelu embera treslladaes del territoriu del Chocó, de zones como l’altu Andágueda y Bagadó poles amenazas de muerte y alcontramos más amenazas equí en Bogotá. Pidimos retornu con garantías o reallugamientu pero nun hai soluciones del gobiernu. L’alcaldía de Bogotá quedó de pagar l’arriendu y yá debemos dos meses. Sufrimos persecuciones de les FARC, del ELN, del ERG, del exércitu, y la policía nun mos dexa vender pulseres nes cais de Bogotá pa poder comer, y otros puelos como l’embera del Risaralda tamién ta siendo movíu de la zona de Pueblo Rico.”<sup>104</sup>
117. Los puelos indíxenes del Parque Tayrona sufren les consecuencias del conflictu armáu y del incumplimentu de los alcuertos de paz. El parque ta siendo entregáu a empresarios de la industria hotelera que son ayenos a esi entornu natural. El puelu arhuaco denuncia la falta de voluntá del gobiernu pa xenerar dinámiques productives y de permanencia, lo que s’agrava cola falta de titularidá de los sos territorios ancestrales, lo que fai que la situación sía de vulnerabilidad estrema y la supervivencia ye incierta.<sup>105</sup>

101 Audiencia con autoridaes indíxenes en Toribío (Cauca), 19 de marzu del 2021.

102 Audiencia con autoridaes indíxenes en Toribío (Cauca), 19 de marzu del 2021.

103 Audiencia con autoridaes indíxenes en Toribío (Cauca), 19 de marzu del 2021.

104 Audiencia en Bogotá, 22 de marzu del 2021.

105 Visita al Magdalena, Guajira y Cesar, marzu del 2021.

## 8. DRECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

118. Pal DANE (Departamentu Alministrativu Nacional d'Estadística): “Nel 2019, el porcentaxe de persones viviendo en situación de prohibú multidimensional foi 2'8 veces más altu nes zones rurales que nes zones urbanes; el porcentaxe de llares ensin accesu a agua potable en zones rurales foi 14'7 vegaes más altu qu'en zones urbanes. Mientres que la tasa d'analfabetismu reduxo nun 2'1 per cientu a nivel nacional, n'árees rurales foi 3'4 vegaes más altu que nes urbanes. La incidencia de la prohibú multidimensional pa los llares con xefatura femenina ye del 18'9 per cientu mentantu que pa los llares con xefatura masculina ye del 16'6 per cientu.”<sup>106</sup>
119. La tasa de desemplegu nacional ente setiembre y payares del 2020 foi de 14'6 per cientu; aumentó 4'8 puntos porcentuales en comparanza col mesmu trimestre del añu 2019.<sup>107</sup>
120. La tasa de desemplegu de los homes nel mesmu trimestre foi de 10'9 per cientu, mientres que pa les muyeres foi de 19'6 per cientu.<sup>108</sup>
121. Nel 2020, la tasa de desemplegu y el nivel de desigualdá per xéneru fueron los más altos de los últimos 10 años.<sup>109</sup>
122. “El problema de la tenencia y la propiedá de les tierres ye'l pegollu número ún de la guerra en toa Colombia, n'onde los llabradores son vistos como enemigos y opositores. Tocómos derromper en monte pa semar alimentos, oponémosmos a la explotación petrolera, al espoliu, y dícenmos de too. El paramilitarismu reactivóse con tola tecnoloxía adquirida pol gobiernu pa la fuercia pública. Nun hai garantías. Tocómos echar de nuevo'l machete al costazu y volver a abrir camín énte esti incumplimientu total cola xente desmovilizoao, y esta arremetida escontra'l campesináu.”<sup>110</sup>
123. El campesináu del Meta denuncia amenaces de muerte y persecución escontra les organizaciones sociales movilizaes por inversión social del Estáu y escontra la erradicación forciada de los cultivos d'usu ilegal. Les mesmes tán agravaes poles declaraciones señaladores del gobernador JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA.
124. L'aplicación perversa de la estinción del drechu de dominiu a les propiedaes y ganáu del campesináu, acusaes de ser testafellos ta xenerando malestar nel Meta. “Tamos intentando contener que se seme coca, necesitamos apoyu pero'l gobiernu quitó-y los bienes a l'asociación llabradora de La Julia y ensin fallu xudicial vendiéronlos supuestamente pa indemnizar a les víctimes de les FARC creando otres víctimes”<sup>111</sup>.
125. “Soi Eduardo Trujillo, el 14 d'avientu del 2016 decomisáronme los bienes que taben protexíos por ser padremuñu de familiar. Somos 39 propietarios acusaos, pola Fiscalía 30 especializada n'estinción de dominiu de Bogotá, de ser testafellos de les FARC. Dempués llevaron siete mil cabeces de ganáu de los fundadores de la rexón. A una familia mandáronla desocupar

106 [Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2019 \(dane.gov.co\)](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf)

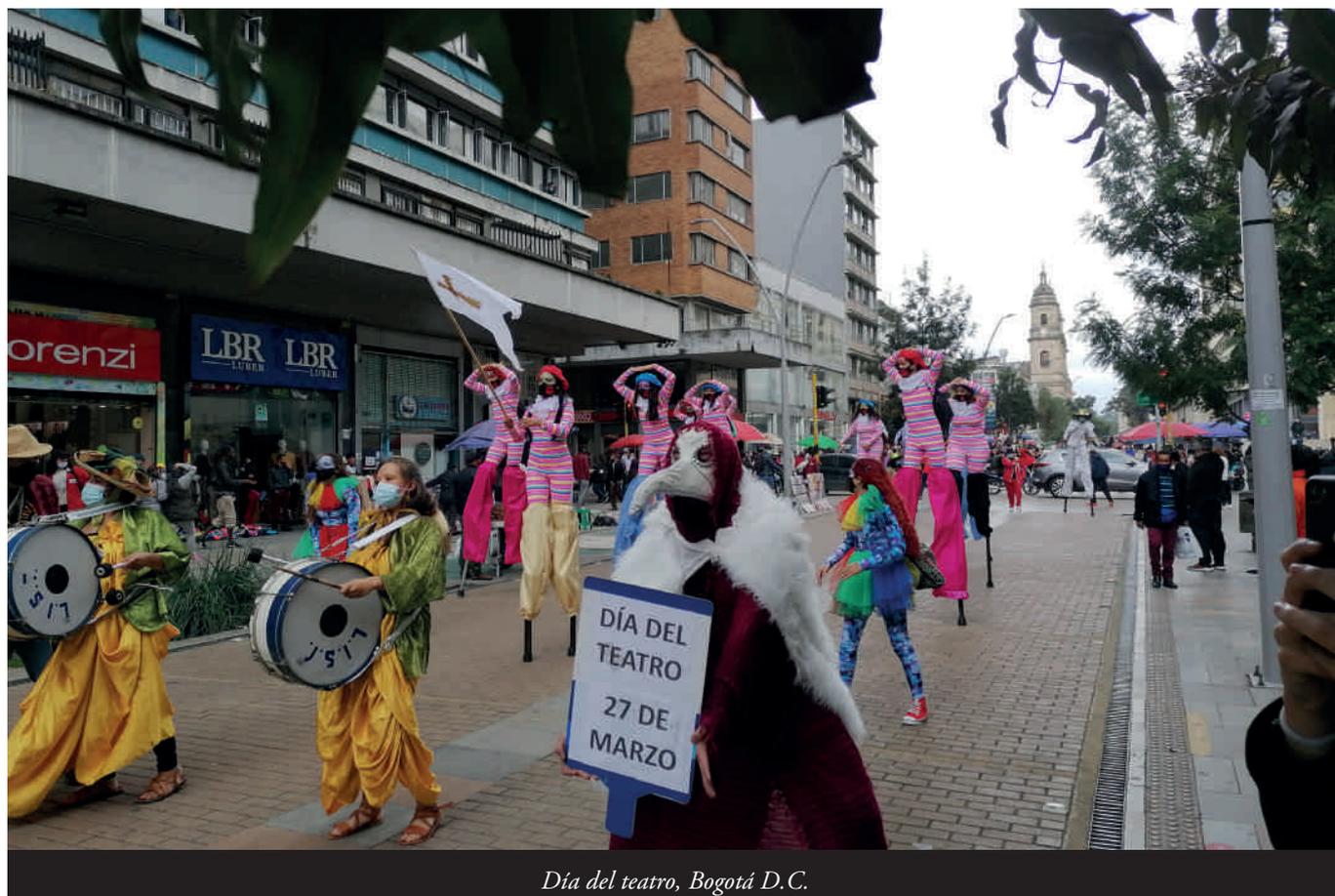
107 [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol\\_empleo\\_nov\\_20.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf)

108 [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol\\_empleo\\_nov\\_20.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf)

109 [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol\\_empleo\\_nov\\_20.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf)

110 Audiencia en La Julia (La Uribe, departamentu del Meta), 16 de marzu del 2021.

111 Audiencia en La Julia (La Uribe, departamentu del Meta), 16 de marzu del 2021.



*Día del teatro, Bogotá D.C.*

en tres días la so casa del Fondu Nacional del Aforru porque yá veníen los nuevos dueños. El gobiernu ta robándomos.”<sup>112</sup>

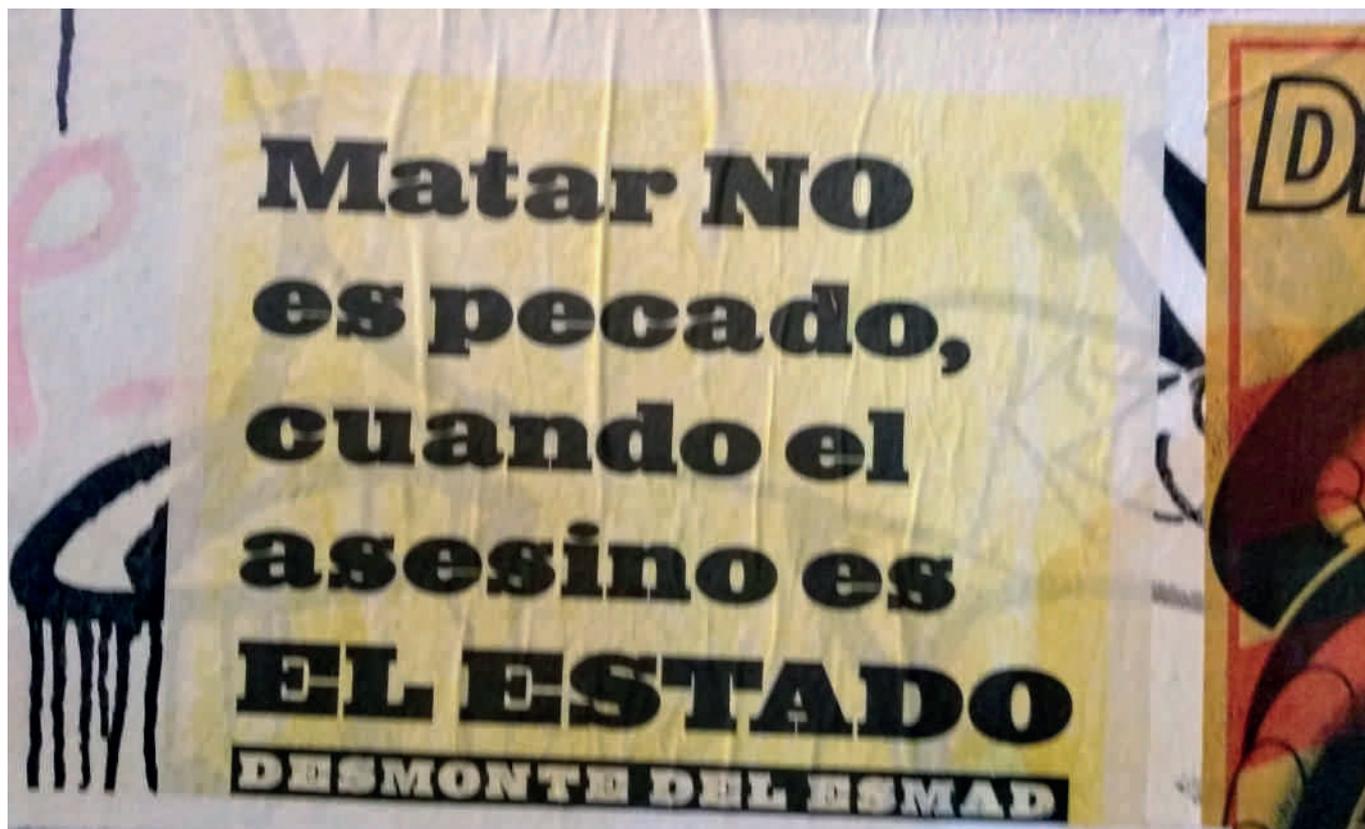
126. “Nel Meta hai colonos que los tán desaposiando de les tierras otros colonos usando la política de restitución. Hai reclamantes con escrituras de tierras del 1924, como la finca Las Margaritas. El gobiernu impón dexamos ensin economía y sustituyir la po-

blación actual por otro usando la presión política y l’orde públicu.”

127. “Al parque Tinigua llegaron llabradores tresalladaos y tán persiguiéndolos, hai varios muertos, violaciones de neñes menores, nun hai salú, víes, educación, los cabezaleros sociales nun tienen apoyu nin garantías. Hai mieu. Gracias por venir y difundir au se mos escuche.”<sup>113</sup>

112 Audiencia en La Julia (La Uribe, departamentu del Meta), 16 de marzu del 2021.

113 Audiencia en La Julia (La Uribe, departamentu del Meta), 16 de marzu del 2021.



128. “Tán xudicializando pa desaposiar de les sos tierres a llabradores de Puerto Rico, Chiribiquete, La Macarena, pa detener la deforestación, pero nun los realluguen. En Chiribiquete col Plan Artemisa detuvieron a diez llabradores, a dos xudicializáronlos y a los otros obligáronlos a firmar documentos de salida voluntaria de la tierra baxo amenaza de dir pa l’alcárcel por delitos ambientales y políticos. L’exércitu forció’l treslláu de les comunidaes del altu Raudal.”
129. La xusticia ta dexando ensin aplicar la causa del interés social pa estinguir les propiedaes de los grandes terratenientes ociosos y/o lligaos al narcotráficu y al desaposiar de tierres. Pal campesináu tamos delante un “esllarigamientu forciáu institucional” promovíu dende’l gobiernu del presidente Duque en favor de los llatifundistes del Meta.
130. El conceyu de Soacha tien más de mediu millón d’habitantes en 347 barrios de los que 180 son asentamientos irregulares, ensin títulu de propiedá. Esa población nun tien accesu a servicios públicos domiciliarios y la situación agrávase por ser ún de los conceyos del país al que más víctimes del conflictu internu lleguen, de les qu’hai rexistraes 54.000.
131. Polo menos 1.400 persones, unes 300 families, viven sometíes a les inclemencies del tiempu, obligaes a l’autoxestión comunitaria pola ausencia del gobier-

nu distrital de Bogotá pa resolver problemes urxentes de llegalización de tierres-escritures, construcción de vivienda, construcción ya igua de vías, educación, salú, agua, enerxía, alimentos, seguridá y cantarelláu en barrios como Ensueños, Maravillas de Dios, Tabor, Primavera, Alta Loma y Los Alpes en Ciudad Bolívar (Bogotá). “Son siete años que llevamos equí, con un terrenu n’ocupación non llegalizada, ensin accesu a servicios públicos, nun hai sitiü pa faer les necesidaes, tócamos en tendayos, los neños nun puen estudiar porque les clases son per internet y nun tenemos conexión, nin lletricidá”<sup>114</sup>.

132. Na costa Caribe les comunidaes negres tamién siguen sometíes a procesos de violencia, exclusión y espoliü territorial hasta del 80% de les sos posesiones, como nel casu del Palenque Rincón Guapo. Los neños/es nun tienen accesu a educación poles enormes distancias que tienen de percorrer a pie y pola falta de redes públiques gratuites d’accesu a internet pa recibir clases nel confinamientu. Temen que los vuelvan desaposiar de tierres y más esllarigamientu forciáu.
133. Los llabradores de Lengüeta, conceyu de Santa Martha, allugáu en zona del parque nacional Tayrona, son más de 2.000 persones que reclamen con urxencia que



*Reunión con Julio Rodríguez, representante de la OACNUDH.*

l’Estáu formalice la propiedá de les sos tierres o que se les reallugue, porque nun pudieron desarrollar los sos proyeutos de vida nin tienen accesu a servicios básicos, nin siquiera a lluz, agua y desagües. La situación d’abandonu dende’l gobiernu xenera qu’una neña cuasi pierda la vida pola imposibilidá d’alcontrar un serviciu médicu que la atendiera, y un naciatu de 11 díes morrió por negligencia de los servicios asistenciales yá que nun hai suministru, equipos médicos, nin ambulancia.

134. En Valledupar los sindicatos denunciaron a les empreses mineres, sobre too del carbón, qu’ataquen drechos llaborales y sindicales y que se beneficien de la represión oficial y del axorizu paramilitar pa silenciar la protesta sindical y social por ataques a drechos llaborales y polos graves impautos sociales y ambientales de la minería a gran escala.

114 Visita a asentamientos de Ciudad Bolívar (Soacha), 23 de marzu del 2021.

## CONCLUSIONES

Colombia nun ta en paz, l'aluerdu de paz y los drechos básicos de la población tán en peligru.

El gobiernu de Colombia evidencia la so falta de voluntá política pa cumplir l'aluerdu de paz, nun tien voluntá de combatir el paramilitarismu, la corrupción, la inequidá, la impunidad.

El conflictu internu de Colombia convirtióse nuna amenaza pa la seguridad de países como Venezuela, Estáu Apure, nel que se dan enfrentamientos ente la Fuercia Armada Nacional Bolivariana y grupos de les disidencies de les FARC.

El gobiernu ye responsable del xenocidiu en cursu escontra la dirixencia social, los firmantes farianos del aluerdu de paz y los pueos indíxenes, asina como de los graves retrocesos en drechos humanos nel últimu añu.

Esta violencia tien raíces na simulación de cumplimientu del aluerdu de paz por parte del gobiernu, na continuidá de la guerra pola falta de voluntá pa dialogar col ELN, nel abandonu pol Estáu de los territorios, teniendo presencia armada y nula inversión social, na corrupción, nel efeutu perversu de la política antidrogues de los Estaos Xuníos centrada en combatir al campesináu cultivador en Colombia, na doctrina militar del enemigu internu, que sirve de base a la brutalidá policial y militar nun gobiernu que tien como consigna “paz con llegalidá.”

La población sufre la convivencia de la fuercia pública colos desaposiadores de tierres y col paramilitarismu, que faen causa común pa persiguir opositores y pa mantener abiertes les rutes del tráficu de drogues y l'ingresu a los territorios d'interés pa los inversionistes criollos y foranos, incluyies les empreses multinacionales.

## RECOMENDACIONES

Cumplir integralmente l'aluerdu de paz soscritu coles FARC.

Siguir los diálogos de paz col ELN.

Adoptar y executar una política pública de persecución a les bandes criminales, al paramilitarismu y a les sos redes d'apoyu políticu, militar y económicu.

Otorgar garantíes efectives pa protexer la vida de la dirixencia social y de quien defenden los drechos humanos.

Acabar cola impunidad estructural; identificar, capturar y sancionar a los autores intelectuales del xenocidiu escontra la dirixencia social y escontra quien firmaron l'aluerdu de paz.

Respetar el drechu a la protesta social. Escontarmar l'ESMAD.

Sanción penal a los policíes responsables de los asesinatos de manifestantes nes protestes de setiembre del 2020 y 2021.

Arropear la presentación en payares del 2021 del Informe de la Comisión de la Verdá.

Respetar la división y la independendencia de los poderes públicos, l'autonomía y la independendencia del Sistema Integral de Xusticia, Verdá, Reparación y Non Repetición.

Fortalecer los sistemas de salú y d'educación públicos.

Cumplimientu pola fuercia pública del respetu a los drechos humanos y al drechu internacional humanitariu y castigu a los militares y policíes responsables d'actos de violencia sexual.

Cumplir colos aluerdos firmaos colos pueos indíxenes de respetar y ampliar los sos territorios; faer aiciones de protección efectiva de los pueos indíxenes en riesgu d'esterminiu físicu y cultural. Garantizar el drechu a la consulta previa, llibre ya informada.

Ratificar ya implementar l'aluerdu d'Escazú o aluerdu rexonal sobre l'accesu a la información, la participa-

ción pública y l'accesu a la xusticia n'asuntos ambientales n'América Llatina y el Caribe.

Encamentar a los empresarios, a los altos mandos de la fuercia pública y a quien gobernaron Colombia nes últimes décadas, a comparecer énte la XEP pa dar la so versión del conflictu armáu internu delante la Comisión de la Verdá.

## ORGANIZACIONES ENTREVISTAES

ACIN, Asociación de Cabildros Indíxenes del Norte del Cauca, organizaciones de Toribío, Toez, Timbío, Canoas, Corinto

Asociación llabriegua San Juan del Meta

Asociación coleutivos d'Afros de Mesetas y La Uribe

Asociación d'ambientalistas de La Uribe

Asociación de Pequeños Agricultores de La Julia

Asociación de Sirvidores Públicos

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Llabriegua AN-ZORC

ASOCOMUNAL, Asociación de Xuntes d'Aición Comunal

ASONALCA La Uribe, Asociación Nacional Llabriegua José Antonio Galán Zorro

Bloque de Víctimes

Cabildru San José de Julumito

Cabildros indíxenes de Totoró

Chicolate ente Amigues

CIMA, Comité d'Integración del Macizu Colombianu

CNA, Coordinador Nacional Agrariu

COCCAM Cauca, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Mariguana

Coleutivu 9 de setiembre

Coleutivu Rosa Negra

Comité de Drechos Humanos collación Gaviotas de La Uribe

Congresu de Los Puelos

Conseyu Comunitariu y Guardia Llabriegua d'El Guayabero

Conseyu departamental de Los Comunes, Meta

CPDH, Comité Permanente pola Defensa de los Drechos Humanos, Xunta Nacional y sección Valle

CRIC, Conseyu Rexonal Indíxena del Cauca

CUT Cauca, Central Unitaria de Trabayadores, Executivu Nacional, secciones Valle, Cauca, Meta, Cundinamarca y Bogotá

DHOC, Fundación pola Defensa de los Drechos Humanos y el Drechu Internacional Humanitariu del Oriente y Centru de Colombia

DIGNIDÁ Popular PSUOC

ETCR, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez, Simón Trinidad

Ex-alcalde d'El Castillo (Meta), Sr. Miguel Antonio Rubio

Familiares de les persones asesinaes nes movilizaciones escontra la brutalidá policial en San Mateo (Soacha)

FCSPP, Fundación Comité de Solidaridá colos Presos Políticos, FCSPP Nacional, secciones Tolima, Valle y Cundinamarca

FECODE-CUT, Federación Colombiana d'Educadores

FENSUAGRO, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria

Frente Ampliu pola Paz, Santander de Quilichao

Fundación Escontra l'Abusu Policial

Fundación Llazos de Dignidá

Fundación Misión Pacíficu

Guardia Llabriegua Guayabero

Integrantes de la Mesa Territorial de Garantías

Integrantes del Conseyu Nacional de Paz  
 Xuntes d'Aición Comunal de La Uribe, collaciones Buenos Aires, El Placer, La Julia, La Espalda  
 Xuntes d'Aición Comunal, collaciones Puerto Nariño (Mesetas), Buenavista, Piñal, Nueva Esperanza  
 Lliberación Madre Tierra, Los Mangos  
 Madres de Soacha  
 Marcha Patriótica  
 MOVICE, Movimientu de Víctimes de Crímenes d'Estáu, Xunta Nacional, secciones Meta, Bogotá  
 Movimientu estudiantil de Soacha  
 Observatoriu DDHH y Paz Cundinamarca  
 ONIC, Organización Nacional Indíxena de Colombia  
 Organización de Discapacitaos de La Julia  
 Organización pal Desarrollu Urbanu y Llabriegu  
 PENIS Meta, Programa Nacional de Sustitución de Cultivos d'Usu Illegal  
 Primera Llinia  
 Rede de Drechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes  
 Rede pola Vida y los Drechos Humanos del Cauca  
 Sintrabancol, Sindicatu Nacional de Trabayadores del Bancu de Colombia  
 SINTRAGRIM, Sindicatu de Trabayadores Agrícolas Independientes del Meta  
 Sintramunicipio de Yumbo  
 SINTRAUNICOL, Sindicatu Nacional de Trabayadores de les Universidaes Públiques de Colombia sección Cali, comité de xéneru  
 SUTEV-CUT, Sindicatu Únicu de Trabayadores de la Educación del Valle del Cauca  
 UNEB, Unión Nacional d'Emplegaos Bancarios  
 UNIR Costa Pacífica, Unión Nacional d'Integración Rural  
 UP, Unión Patriótica de La Julia

## INSTITUCIONES ENTREVISTAES

Embaxada d'España en Bogotá, Sr. embaxador Marcos Gómez Martínez, el conseyeru políticu Sr. Álvaro Borega y l'AECID  
 Embaxada de la Xunión Europea en Colombia, Sr vice embaxador Lars Bredal  
 OACNXDH, Oficina del Altu Comisionáu de les Naciones Xunies pa los Drechos Humanos en Colombia  
 Ministeriu de Defensa Nacional. Coronel Jhon Arango  
 Congresu de la República de Colombia, senadores: AIDA ABELLA, IVÁN CEPEDA, GUSTAVO BOLÍVAR, MARÍA JOSÉ PIZARRO, ALBERTO CASTILLA, ANTONIO SANGUINO  
 Gobernador del Magdalena, Sr. Carlos Caicedo  
 Gobernación del Meta, Oficina de Drechos Humanos y Víctimes  
 Representante del Conceyu de Toribío  
 Procuraduría municipal de Mesetas (Meta)  
 Conseyu de Víctimes de Mesetas  
 Alcaldesa encargada de Mesetas  
 Conseyu municipal de Soacha  
 Consejería de Paz de Soacha  
 Conceyala Heidi Sánchez y equipu Bogotá

## MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Blu radio  
 CODOPA, [https://www.codopa.org/cooperacion-desarrollo-comunidades-empobrecidas/notas-de-prensa-y-comunicados/una-delegacion-asturiana-verificara-por-17-ano-consecutivo-el-estado-de-los-derechos-humanos-en-colombia\\_5602\\_151\\_5776\\_0\\_1\\_in.html](https://www.codopa.org/cooperacion-desarrollo-comunidades-empobrecidas/notas-de-prensa-y-comunicados/una-delegacion-asturiana-verificara-por-17-ano-consecutivo-el-estado-de-los-derechos-humanos-en-colombia_5602_151_5776_0_1_in.html)

EL COMERCIO DE XIXÓN, <https://www.elcomercio.es/gijon/delegacion-asturiana-verificara-20210312161016-nt.html>

<https://www.lne.es/gijon/2021/03/13/despedita-delegacion-derechos-humanos-colombia-41704109.html>

El Cuarto Mosquetero

El Llano Siete Días

INFOBAE, <https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/12/colombia-una-delegacion-asturiana-verificara-el-estado-de-los-derechos-humanos-en-colombia-2/>

La FM radio, <https://www.lafm.com.co/colombia/delegacion-asturiana-de-verificacion-dice-que-gobierno-no-cumple-el-acuerdo-de-paz>

La Portada

NORTES, <https://www.nortes.me/2021/03/13/una-nueva-delegacion-de-derechos-humanos-visitara-colombia-este-mes/>

ONIC: <https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4175-declaracion-final-de-la-xvii-delegacion-asturiana-de-verificacion-de-los-ddhh-en-colombia>

<https://eldiariosolidario.com/delegacion-asturiana-ddhh-colombia>

PACOCOL, <https://www.pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/14668-declaracion-final-de-la-xvii-delegacion-asturiana-de-verificacion-de-los-ddhh-en-colombia>

PRENSA INDÍXENA [https://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com\\_content&view=article&id=40817:espana-17-delegacion-asturiana-de-verificacion-a-los-ddhh-en-colombia&catid=86&Itemid=820](https://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=40817:espana-17-delegacion-asturiana-de-verificacion-a-los-ddhh-en-colombia&catid=86&Itemid=820)

Programa Solidaridad RNE: <https://www.mixcloud.com/solidaridad/solidaridad-delegaci%C3%B3n-asturiana-de-verificaci%C3%B3n-de-ddhh-en-colombia-10042021/>

RADIO NACIONAL DE COLOMBIA, <https://www.radionacional.co/noticia/derechos-humanos-colombia-han-desmejorado-delegacion-espanola>

Radio Voces del Guayabero

RCN Radio, <https://www.rcnradio.com/colombia/situacion-de-ddhh-en-colombia-va-de-mal-peor-delegacion-asturiana-de-verificacion>

REVISTA SUR

RTVE. <https://www.rtve.es/alacarta/audios/solidaridad/delegacion-asturiana-verificacion-ddhh-colombia/5838047/>

SPUTNIK MUNDO, <https://mundo.sputniknews.com/20210326/delegacion-asturiana-colombia-presenta-deterioro-en-ddhh-1110498168.html>

Villavicencio al Aire

<https://rebelion.org/la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia-va-de-mal-a-peor/>

<https://www.sur.org.co/xvii-visita-de-delegacion-asturiana-colombia-no-esta-en-paz-ni-en-posconflictu/>

**CON EL APOYO DE:**

Ayuntamiento  de Langreo

GUE/NGL  
**THE LEFT**   
IN THE  
EUROPEAN  
PARLIAMENT

 PROTECT DEFENDERS.EU

  
**PROYECTO**  
Asfuries

  
*Soldepaz Pachakuti*